

Asamblea Legislativa Plurinacional

desafíos, organización, atribuciones
y agenda legislativa



Fabián II Yaksic

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DESAFÍOS, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES
Y AGENDA LEGISLATIVA

Fabián II Yaksic

La Paz, Bolivia
2010

© Muela del Diablo Editores

Asamblea Legislativa Plurinacional

desafíos, organización, atribuciones y agenda legislativa

Fabián II Yaksic



Diseño portada e interiores:

Marcelo Yaksic Vera

D.L. 4-1-770-10

ISBN: 978-99905-40-64-2

Imprenta Wa-Gui Tel/fax: 2204517
impwagui@hotmail.com

Impreso en Bolivia

A
Marcelo Quiroga Santa Cruz
paradigma
de vida,
consecuencia
política
y
dignidad
parlamentaria

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
PRESENTACIÓN	13
INTRODUCCIÓN	17
I. ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES	21
II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO	29
III. CRITERIOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE TRATAR UNA LEY	33
IV. AGENDA LEGISLATIVA DERIVADA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO	35
V. COMPETENCIAS PRIVATIVAS, EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS O CONCURRENTES AL MOMENTO DE LEGISLAR SOBRE UNA MATERIA	119
VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y AUTONOMÍAS	125
VII. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN	141
VIII. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN	175
IX. NUEVA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL: AUTORIDADES A DESIGNAR POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL Y OTRAS ATRIBUCIONES EXPRESAS	179
ANEXOS	
ANEXO 1	
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2009	
ANEXO 2	
NÓMINA DE CIUDADANOS ELECTOS COMO SENADORES, DIPUTADOS PLURINOMINALES, DIPUTADOS UNINOMINALES Y DIPUTADOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA ORIGINARIO	
ANEXO 3	
CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO	

PRÓLOGO

COMPÁS Y BRÚJULA PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Un prólogo es aquello que va antes del *logos* (*pro-logos*), aquello que presenta al *logos*, que introduce al *logos*. El *logos* –término griego- ha sido traducido como el estudio, la palabra. Sin embargo la etimología del *logos* es aún más compleja. El *logos* hace referencia a un *legein* (multiplicidad), es decir a una multiplicidad compleja que se resume en uno. El término *legein* subsiste en el término en castellano legión. No deja de ser interesante que el término nos remita a una imaginación bélica, y es que lo múltiple, cuando trata de traducirse en uno, es decir en una unidad, no deja su complejidad de agonismo.

Quise comenzar este prólogo al texto de Fabián de esta manera, porque el *logos*, el texto que aquí se presenta no deja de ser esta multiplicidad reflejada en el uno. Una multiplicidad que la memoria de los pueblos indígenas, la larga memoria de las insurrecciones de Túpac Katari, lo desarrolla de otra manera: “*volveré y seré millones*”.

Continuando una línea de insubordinaciones indígenas comenzadas por Túpac Amaru, los indígenas Túpac Katari, Bartolina Sisa y otros, lograron cercar la ciudad de La Paz, buscando reconstruir una temporalidad. Este carácter de reconstrucción de las temporalidades está íntimamente ligado a la reconstitución de las relaciones de poder y a la búsqueda de un devenir que transforme las actuales relaciones de poder. Es en ese sentido que a la muerte de Túpac Katari la frase *volveré y seré millones* refleja la posibilidad del retorno de una temporalidad. Pero una temporalidad en proceso(s) de devenir, que no se refleja(n) en una sola temporalidad sino en temporalidades distintas, múltiples, es decir en procesos distintos. La frase *volveré y seré millones* no se refiere simplemente al retorno de Túpac Katari, sino al retorno de la multiplicidad.

Para demostrar la derrota a la insurgencia indígena liderada por Túpac Katari, tras su muerte se cortan los miembros de su cuerpo y se los reparte paradigmáticamente en una territorialidad¹ que continuó siendo insurgente en la historia colonial y republicana, se dice que las piernas, los brazos, la cabeza, el tronco el mismo cuerpo es enterrado en lugares distintos, constituyendo una territorialidad de insurgencia.

Es, en ese sentido, que la frase *volveré y seré millones* supone reintegrar cada una de las partes del cuerpo de Túpac Katari, pero la reintegración de su cuerpo no supone el retorno a lo uno o a la unidad, sino supone un retorno de la multiplicidad, de la complejidad y de la singularidad de los unos, a la vez que supone la constitución de la territorialidad que llamamos Bolivia.

El momento de insurrección de la memoria larga y la acumulación y sedimentación de la memoria corta ha llegado y se expresa en esta compleja multiplicidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en esta compleja y múltiple agenda para poner en funcionamiento la nueva Constitución Política del Estado (nCPE).

El Derecho (así expresado con una mayúscula que abre al término Derecho), ha sido percibido frecuentemente como una de las maneras de la indolencia de las capas dirigentes hacia el pueblo, como una forma o manera en la que se expropia al pueblo su capacidad de autogobierno, su multiplicidad. El Derecho en nuestro país no ha gozado de prestigio, pues en esta memoria larga (de las luchas de los pueblos indígenas) y en esta memoria corta (de los movimientos sociales que gritan y mueren por el cambio) ha sido una manera de evitar el cambio social, ha sido una manera de socavar, minar, carcomer los derechos de las personas, de las comunidades, de su riqueza no sólo económica, sino social, cultural y política.

El Derecho, en si las leyes y el sistema jurídico necesario para poner en funcionamiento esta nueva Constitución Política del Estado (nCPE), no pueden reinventar y/o prorrogar esta indolencia. Todo lo contrario, deben posibilitar el gobierno del pueblo, deben posibilitar que la Constitución sea clara y transparente, y que nunca más se expropie las soluciones al pueblo, que nunca más se cancele el derecho por el

1. Su cuerpo, fue expuesto por todo el territorio del Qullasuyu, en señal de "escarmiento a los indios rebeldes". Su cabeza fue expuesta en el cerro de K'ili K'ili (La Paz), su brazo derecho en Ayo Ayo, el izquierdo en Achacachi, su pierna derecha en Chulumani, y la izquierda en Caquiaviri.

Derecho. Por ello es necesario un compás y brújula para el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desarrollar la legislación para poner en funcionamiento a la nueva Constitución Política del Estado (nCPE) debe prever ante todo que la nCPE no sea capturada por el sofisticado lenguaje jurídico, las leyes secundarias (que ponen en funcionamiento la nCPE) no pueden complicar lo señalado por el texto constitucional, no pueden enrevesar sus disposiciones. Asimismo se debe velar por evitar la necesidad de recurrir a un abogado, no sólo para la interpretación de estas leyes, sino incluso para el ejercicio de los derechos que se explicitan en la Constitución. Se debe desjudicializar el ejercicio del derecho, se debe restringir el auxilio de abogados sólo a lo extremadamente necesario (abogados sólo en última ratio), de esta manera se enfatiza la claridad del texto y el poder de ejercicio de la población.

Esta actividad, que invita y presenta Fabián en este texto, es parte del proceso constituyente. Un proceso constituyente no se cierra con la promulgación de una nueva CPE, sino se prorroga en la querella discursiva, en las formas y maneras de continuar la actividad constituyente, desarrollando las leyes necesarias que revolucionen y modifiquen las relaciones de poder de una sociedad tan desigual como la nuestra.

Que este breve texto que funciona como un *pro-logo* sea una invitación para explorar la multiplicidad de normas que se precisan y que Fabián pone en el escenario de debate, pues no es solamente buena iniciativa de Fabián, sino y ante todo su mandato como diputado.

Farit L. Rojas Tudela

PRESENTACIÓN

Uno de los principales procesos de gobierno es el de la legislación, ya que la Asamblea Legislativa es el espacio en el que se deliberan las normas para organizar las interacciones en el mediano y largo tiempo. En este sentido, en el proceso legislativo a la vez que se sigue discutiendo los fines, se pasa sobre todo a diseñar los mecanismos a través de los cuales habría que hacer cumplir los fines establecidos en la constitución. Esto es mucho más importante ahora, a un período posterior o post asamblea constituyente en el que hay que pasar a una segunda fase de legislación, es decir, pasar del momento macro de diseño de la constitución a la reforma de las leyes, de tal manera que se compatibilice la nueva constitución con los diferentes ámbitos de legislación, en particular los códigos que todavía siguen conteniendo otros principios organizativos.

El proceso legislativo es el ámbito de espacio y tiempo más público dentro del estado, en el sentido que es más visible que otros procesos. Una de las principales causas de visibilidad o carácter público es que la asamblea legislativa contiene una pluralidad de sujetos. En la medida en que se interactúen de manera más o menos intensa con diferentes sectores y regiones del país hacen que sea más visible una diversidad de opiniones, procesos de discusión y elaboración de propuestas para el país.

Es en este sentido que cabe valorar esta publicación de Fabián II Yaksic que consiste en una agenda legislativa, a la vez que es una explicación de la organización del trabajo legislativo, de los desafíos que enfrentan en términos de esta segunda fase de legislación, así como de las atribuciones que tiene la asamblea como las instancias de diferenciación en el trabajo interno. En este sentido tiene varias virtudes. Por un lado, hace conocer a los ciudadanos en qué consiste el trabajo

de la asamblea legislativa, cómo se organiza, qué atribuciones tiene y, sobre todo en esta coyuntura, cuáles son las tareas que tienen que enfrentar en el sentido de producir una legislación que complemente de manera coherente y pluralista el diseño contenido en la constitución. En este sentido, es un trabajo de educación ciudadana, útil tanto para los nuevos parlamentarios como para los ciudadanos en general.

La otra dimensión, más importante, es aquella que tiene que ver en particular con lo que el autor llama una agenda legislativa, que yo diría que corresponde a configurar un horizonte del trabajo legislativo, que implica tener una mirada macro del conjunto de ámbitos en los que se necesita legislar en los próximos años de una manera coherente, es decir, que lo que se legisle en temas relativos a educación sea compatible con lo que se decide en torno al modo de legislar los temas relativos a recursos naturales y otros ámbitos.

Una de las principales tareas de los legisladores elegidos es producir un marco normativo coherente que se complemente y se refuerce mutuamente, no un conjunto de leyes que responden a intereses de coyuntura y muy sectoriales que introducirían disonancia y contradicción en el cuerpo legislativo. En este sentido es útil, pertinente y necesario tener una visión global de las tareas legislativas para el próximo ciclo, que implique también pensar un cronograma de trabajo y líneas de complementariedad y de coherencia entre los diferentes ámbitos a legislar. Considero que una agenda como ésta es un muy buen comienzo para este tipo de trabajo.

Una de las primeras principales tareas del cuerpo legislativo va a ser trabajar el diseño de las instituciones de descentralización del estado que se han aprobado en la nueva constitución, que es uno de los cambios más fuertes en relación a las estructuras previas. En este sentido, Fabián II Yaksic tiene la experiencia de haber estado a cargo del Viceministerio de Descentralización en el periodo más conflictivo de enfrentamiento con las viejas oligarquías, lo que sin embargo no evitó que en ese periodo también haya dirigido una instancia en la que se elaboraron proyectos de diseño de descentralización del estado alternativos a aquellos propuestos por el viejo bloque económico y político dominante en el país. En este sentido, su presencia en la Asamblea Legislativa es una forma de darle continuidad a este trabajo de imaginar y elaborar el horizonte de reconfiguración global de las estructuras de gobierno en el

país a través de las diferentes formas de descentralización territorial y política de los procesos de gobierno.

Legislar no sólo consiste en hacer normas específicas. Políticamente significa articular, producir articulaciones de lo social, político económico, es decir, ir configurando un conjunto de redes de articulación que impliquen procesos de construcción política. En este sentido, esta propuesta de agenda para la Asamblea Legislativa es una propuesta de organización del trabajo que muestra que hay una visión macro de las responsabilidades como diputado y para el conjunto de los asambleístas, en este sentido de pensar las articulaciones. La construcción política y social pasa precisamente por articular, coordinar, por crear las condiciones de complementación y retroalimentación positiva entre los diferentes conjuntos de instituciones, de procesos sociales, en particular de normas o leyes que el órgano legislativo tiene que producir como su contribución a la articulación de la vida social, para crear las condiciones de su despliegue, en lo posible en términos de formas de democratización o de reducción de las formas de desigualdad y discriminación de todo tipo. Lo fuerte en esta propuesta es la iniciativa de organización, información y un horizonte de articulación del trabajo legislativo inmediato con las tareas de la construcción y reconstrucción del país

La Asamblea Legislativa en el seno de un régimen democrático tiene que ser un espacio pluralista, una composición pluralista de fuerzas y proyectos políticos. En este sentido, lo que hace posible que el espacio legislativo sea un espacio democrático es el despliegue de pluralismo, que no sólo consiste en la presencia de representantes de diferente origen sino en el desempeño de cada uno de ellos en el sentido de que sean productores de propuestas, articuladores de trabajo que alimenten una deliberación que efectivamente se pueda considerar como un proceso de consideración de alternativas y no simple aprobación de propuestas del partido predominante. En este sentido, creo que la presencia de Fabián II Yaksic en la asamblea legislativa plurinacional, que empieza con este tipo de trabajo de propuesta, es un buen signo de fuerza democrática y de construcción política en el espacio público central del estado boliviano.

Luis Tapia

INTRODUCCIÓN

El resultado electoral del 6 de diciembre ha marcado un nuevo hito en la historia democrática de nuestro país, donde el triunfo electoral obtenido por el binomio Evo Morales/Álvaro García del MAS-IPSP logrando el respaldo del 64,22% del total de votos válidos, ha significado que el MAS-IPSP logre el control de ambas Cámaras y por ende del conjunto de la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de 2/3 de sus miembros.

Esto le permite al bloque contundentemente mayoritario en la Asamblea y al gobierno del Presidente Evo Morales implementar la Constitución Política del Estado prácticamente sin oposición. Sin embargo, de la manera democrática y constitucional como se administre los 2/3, dependerá que la profundización del proceso de cambio siga contando con el mayoritario respaldo ciudadano especialmente urbano.

Una combinación dialéctica entre Asamblea Legislativa Plurinacional, con personalidad propia, Órganos del Estado Plurinacional y Entidades Territoriales Autónomas que actúen con eficiencia, eficacia y transparencia en la implementación de políticas públicas de impacto social, económico y productivo, con efectiva participación ciudadana y control social, harán posible que los tiempos del vivir bien lleguen efectivamente para beneficio de todas las bolivianas y todos los bolivianos.

Sentimos que el cambio no tiene partido, que el cambio está en nuestros corazones comprometidos con la necesidad de consolidar y profundizar democráticamente este proceso de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que implicará la construcción

democrática y constitucional del nuevo “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”; como reza el primer artículo de la Constitución Política del Estado.

Existe la necesidad de impulsar en todos los espacios de deliberación posibles, un DIÁLOGO INTERCULTURAL Y TERRITORIAL PERMANENTE, que sienta las bases democráticas que nos permita superar las tres fallas estructurales que heredamos desde la fundación de nuestra república:

- i) un estado monocultural, patriarcal, adultocentrista y con enormes desigualdades sociales, que ha excluido del desarrollo social, político, económico y cultural a pueblos y nacionalidades indígena originario campesinos, a mujeres y a jóvenes;
- ii) un estado centralista, burocrático y corrupto que ha marginado del desarrollo al 80% del territorio nacional, a departamentos, regiones, provincias y municipios, y;
- iii) una economía dependiente y monoexportadora de materias primas, basada en una administración y gestión antinacional y depredadora de nuestros recursos naturales.

Una sincera vocación concertadora, acompañada de una firme convicción política e ideológica, hará posible que la primera Asamblea Legislativa Plurinacional, cumpla con el mandato constitucional de construir democrática y colectivamente la nueva arquitectura estatal plurinacional, con equidad social, de género y generacional, con autonomías y base económica y jurídica plural. Según este mandato, la sinergia entre la inversión pública, privada y social comunitaria sustentada en la nacionalización e industrialización de nuestros recursos naturales, deberá constituir las bases para la modificación del patrón de acumulación existente, a través del incentivo y promoción del desarrollo económico y de nuevas potencialidades productivas en todo el territorio nacional para hacer de nuestra patria una Bolivia grande y unida.

Este debería ser el propósito de la enorme cantidad de Leyes que deberá deliberar y aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si usted no ha leído la Constitución Política del Estado, este texto le podría servir para navegar legislativamente por el contenido de la Constitución. Si la ha leído, espero le sea útil compartir con el

autor algunas reflexiones acerca del rol histórico que le toca asumir a la primera Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente en lo concerniente a la definición de la agenda legislativa derivada de la Constitución Política del Estado. Espero que esta agenda se materialice en efectivas iniciativas legislativas, para la vida, a ser tratadas a lo largo de la presente legislatura (2010-2015).

Este texto pretende ser una invitación a la ciudadanía en general y particularmente a mis colegas, hombres y mujeres, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para implementar la Constitución Política del Estado a través de la elaboración colectiva y democrática de las Leyes. Esto nos permitirá cumplir con el desafío asumido, con entusiasmo, esperanza y ganas de trabajar por una Bolivia plurinacional, descentralizada y con autonomías, grande, unida, democrática, solidaria, productiva y digna.

I. ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Fruto del resultado de las Elecciones Generales del pasado 6 de abril del Año 2009, son cuatro partidos o alianzas que lograron representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo al cuadro COMPOSICIÓN POLÍTICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL que detalla su composición por Departamento.

COMPOSICIÓN POLÍTICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL *

DEPARTAMENTO	PARTIDO	SENADORES	DIPUTADOS PLURI NOMINALES	DIPUTADOS UNI NOMINALES	DIPUTADOS ESPECIALES	TOTAL
CHUQUISACA	MAS	3	3	4	0	10
	PPB-CONVERGENCIA	1	2	2	0	5
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	4	5	6	0	15
LA PAZ	MAS	4	9	15	1	29
	PPB-CONVERGENCIA	0	2	0	0	2
	UN-CP	0	2	0	0	2
BRIGADA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		4	13	15	1	33
COCHABAMBA	MAS	3	5	8	1	17
	PPB-CONVERGENCIA	1	3	2	0	6
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	4	8	10	1	23
ORURO	MAS	4	2	5	1	12
	PPB-CONVERGENCIA	0	1	0	0	1
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE ORURO	4	3	5	1	13
POTOSÍ	MAS	4	6	7	0	17
	AS	0	0	1	0	1
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	4	6	8	0	18

* Elaboración propia en base al Acta de la Corte Nacional Electoral.

COMPOSICIÓN POLÍTICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL *

DEPARTAMENTO	PARTIDO	SENADORES	DIPUTADOS PLURI NOMINALES	DIPUTADOS UNI NOMINALES	DIPUTADOS ESPECIALES	TOTAL
TARIJA	MAS	2	2	2	1	7
	PPB-CONVERGENCIA	2	1	2	0	5
	AS	0	0	1	0	1
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	4	3	5	1	13
SANTA CRUZ	MAS	2	3	6	1	12
	PPB-CONVERGENCIA	2	7	7	0	16
	UN-CP	0	1	0	0	1
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	4	11	13	1	29
BENI	MAS	2	2	1	1	6
	PPB-CONVERGENCIA	2	1	4	0	7
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE BENI	4	3	5	1	13
PANDO	MAS	2	1	1	0	4
	PPB-CONVERGENCIA	2	0	2	1	5
	BRIGADA DEPARTAMENTAL DE PANDO	4	1	3	1	9
BOLIVIA	MAS	26	33	49	6	114
	PPB-CONVERGENCIA	10	17	19	1	47
	UN-CP	0	3	0	0	3
	AS	0	0	2	0	2
	ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL	36	53	70	7	166

* Elaboración propia en base al Acta de la Corte Nacional Electoral.

De la lectura del Cuadro podemos destacar los siguientes aspectos que marcan un hito único en la historia de procesos electorales en nuestro país.

El 64,22% obtenido por el binomio Evo Morales Ayma/Alvaro García Linera de la Alianza por la refundación de Bolivia MAS-IPSP (Ver Anexo I, Resultados Elecciones Generales del 6 de Diciembre de 2009) se ha traducido en la siguiente representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional: el MAS-IPSP logró 114 Asambleístas que representa el 68,67% (algo más de 2/3) del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; PPB-CONVERGENCIA logró 47 Asambleístas que representa el 28,31% del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; UNIDAD NACIONAL (UN-CP) logró 3 Asambleístas que representa el 1,8% del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ALIANZA SOCIAL (AS) logró 2 Asambleístas que representa el restante 1,2% del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los 2/3 (111 Asambleístas) que se requiere en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar algunas leyes y/o designaciones ha sido superado por la representación del MAS-IPSP en 3 Asambleístas, logrando 114 miembros del total de la Asamblea.

En el caso de la Cámara de Diputados, se requerían 87 Asambleístas para llegar a los 2/3, el MAS-IPSP cuenta con 1 Asambleísta adicional, logrando 88 Diputados del total de sus miembros.

En el caso de la Cámara de Senadores, se requerían 24 Asambleístas para llegar a los 2/3, el MAS-IPSP cuenta con 2 Asambleístas adicionales, logrando 26 Senadores del total de sus miembros.

En lo que va de la historia de procesos electorales, al menos desde la recuperación democrática del 10 de octubre de 1982, que marcó una continuidad ininterrumpida de gobiernos democráticos y constitucionales, se han gestado 2/3 en el Congreso como resultado de la denominada “democracia pactada” y la conformación de “megacoaliciones” entre partidos políticos que administraron el Estado² hasta las Elecciones Generales de diciembre del 2005. Hoy la “Alianza para la refundación de Bolivia” MAS-IPSP, sin necesidad de “pactos” en el Congreso con ninguna otra organización política con representación parlamentaria, ha obtenido más de los 2/3.

El desafío será administrar con responsabilidad estos 2/3, especialmente motivando la deliberación democrática en el seno de la Bancada mayoritaria, impulsando la participación y deliberación con la ciudadanía en la elaboración colectiva de leyes, y aperturando escenarios de concertación con asambleístas de los otros partidos y agrupaciones ciudadanas que permitan incorporar y escuchar propuestas proactivas de las minorías en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2. Para refrescar la memoria política ver: Fabián II Yaksic y Luis Tapia, *BOLIVIA Modernizaciones empobrecedoras, desde su fundación a la desrevolución*, Muela del Diablo Editores, 1997, La Paz.

ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Asamblea Legislativa Plurinacional se estructura en dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados. Nos referiremos a la organización de la Cámara de Diputados, que es muy similar a la Cámara de Senadores, que tiene la siguiente estructura orgánica, de acuerdo a su Reglamento General ³:

- 1) ASAMBLEA O PLENO: constituye el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las y los diputados en ejercicio.
- 2) DIRECTIVA: compuesta por una o un Presidente, dos Vicepresidentas o Vicepresidentes y cuatro Secretarías o Secretarios. La o El Presidente, la o el Primer Vicepresidente y la o el Primer y Segundo Secretarios, corresponden al bloque de mayoría; la o el Segundo Vicepresidente y la o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría. Son atribuciones de la Directiva: a) Dirigir la organización y las actividades de la Cámara. b) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones, y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, en consulta con los Jefes de Bancadas y Brigadas. c) Presentar para su aprobación al Pleno, el proyecto de presupuesto camarl y supervisar su ejecución, mediante la o el Oficial Mayor. d) Presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de cada gestión, un informe sobre la ejecución presupuestaria. e) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.
- 3) COMISIONES Y COMITÉS: son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de la Cámara. Todo Diputado en ejercicio, es obligatoriamente designado miembro de una Comisión. Las principales funciones de las Comisiones, entre otras, son: i) Promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el sector o área de su competencia. ii) Informar a la Asamblea sobre los proyectos de ley. iii) Recibir información oral y escrita de las autoridades y funcionarios del Órgano Ejecutivo, judicial y electoral en ámbitos que no sean jurisdiccionales, así como de las entidades descentralizadas y empresas públicas. Las Comisiones tienen una Directiva compuesta de una o un Presidente y un número

3. Reglamento General de la Cámara de Diputados, Edición Oficial, Cámara de Diputados, La Paz, 2010.

de Secretarías y Secretarios igual al de Comités, constituidos en su ámbito. Nueve de las Presidencias de Comisión son asignadas al Bloque de mayoría y tres al de minoría. Las Secretarías de los Comités se asignan de manera proporcional a la representación de cada Bloque. Hay 12 Comisiones y 37 Comités.

Los Comités son instancias operativas y de investigación y están conformadas por miembros de la respectiva Comisión. Cumplen también la función de nexo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Los Comités están dirigidos por el Secretario respectivo de la Comisión. Los Comités elaboran los proyectos de informe en las materias de su competencia y realizan las investigaciones que les encomiende la Comisión a la que pertenecen. Al efecto, tienen facultades para recibir declaraciones informativas, recabar documentación, realizar inspecciones y cuanto sea necesario, para el cumplimiento de sus obligaciones. Los Comités, por mandato expreso de la Comisión efectúan el tratamiento preliminar de los Proyectos de Ley, referidos a las temáticas de su incumbencia.

- 4) **BRIGADAS Y BANCADAS PARLAMENTARIAS:** las y los diputados electos, por un mismo Departamento, se organizan en una Brigada Departamental dirigida por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y dos Secretarías o Secretarios, designados alternadamente de entre las diferentes fuerzas políticas. Las principales funciones de la Brigada Departamental son: i) coordinar las actividades parlamentarias de orden departamental, promoviendo y desarrollando los regímenes autonómicos del Estado; ii) Propiciar eventos (seminarios, talleres, foros) en los Departamentos, para obtener una mejor información de los asuntos regionales; iii) Hacer seguimiento de los asuntos de interés regional; y iv) coordinar con los órganos legislativos subnacionales correspondientes.

Las y los diputados que logren su elección mediante su postulación por una misma fórmula electoral, se organizan en una Bancada Política; que deberá tener un número mayor a tres miembros, para contar con oficinas y personal de apoyo. Las Bancadas Políticas, entre sí y con otras u otros diputados, constituyen Bloques para la conformación de las Directivas de la Cámara y las Comisiones y Comités. El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Los y las Asambleístas miembros en ejercicio electos y electas por voto popular, ejercen la representación popular y cumplen cuatro funciones que señala la Constitución Política del Estado: funciones legislativas, de fiscalización, de gestión y de coordinación.

Son los artículos 158, 159 y 160 de la Constitución Política del Estado los que detallan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de cada una de sus Cámaras (Diputados y Senadores). Estas atribuciones han sido recogidas por el Reglamento General de la Cámara de Diputados de la siguiente manera:

“Artículo 6º (Atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional).

Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo.
2. Nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno.
3. Fijar la remuneración de los asambleístas, que en ningún caso será superior a la de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado.
4. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas
5. Elegir a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional, por dos tercios de votos de sus miembros presentes.
6. Preseleccionar a las candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Por dos tercios de votos de sus miembros presentes.
7. Aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley.
8. Aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social presentado por el Órgano Ejecutivo.
9. Aprobar Leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.
10. Decidir las medidas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública.
11. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.
12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, este deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta

días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado.

13. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.
14. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.
15. Ratificar los Tratados Internacionales, celebrados por el Órgano Ejecutivo, en las formas establecidas por la Constitución.
16. Establecer el sistema monetario.
17. Establecer el sistema de medidas.
18. Controlar y fiscalizar a los Órganos del Estado y a las Instituciones Públicas.
19. Interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o Ministro. La Asamblea también podrá disponer por dos tercios el voto de confianza a las ministras y los ministros interpelados.
20. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.
21. Controlar y Fiscalizar a las empresas Públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.
22. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado determinando el motivo y tiempo de su ausencia.
23. Autorizar excepcionalmente el ingreso y transito temporal de fuerzas militares extranjeras, determinando el motivo y el tiempo de permanencia.
24. A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado.
25. Proponer ternas a la Presidenta o Presidente del Estado, para la designación de la Contralora y Contralor General del Estado, Presidenta o Presidente del Banco Central de Bolivia, Máxima Autoridad del órgano de Regulación de Bancos y entidades Financieras y Presidentas y Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado. Dichas ternas serán aprobadas por mayoría absoluta.

Artículo 7º (Atribuciones de la Cámara de Diputados). La Cámara de Diputados, por competencia expresa que le asigna el Artículo 159º de la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones enunciativas y no limitativas de otras que por mandato de la ley y de la forma republicana de gobierno pudiera tener:

- 1ª) Iniciar el tratamiento de los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Supremo, en caso de iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia, los Gobiernos Autónomos y los Diputados Nacionales. Así como tratar en revisión los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores.
- 2ª) Proponer Interpelaciones a las Ministras y los Ministros de Estado en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado.
- 3ª) Realizar las labores de fiscalización establecidas en la Constitución, la Ley y el presente Reglamento.
- 4ª) Elaborar, aprobar y modificar su reglamento.
- 5ª) Calificar las credenciales otorgadas por el Órgano Electoral Plurinacional.
- 6ª) Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento.
- 7ª) Aplicar sanciones a sus miembros de acuerdo con la Constitución, la Ley y el presente Reglamento.
- 8ª) Aprobar su presupuesto y ejecutarlo.
- 9ª) Nombrar y remover a su personal administrativo.
- 10ª) Iniciar la aprobación del presupuesto general del Estado en la forma establecida por la Constitución Política del Estado.
- 11ª) Iniciar la aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el órgano ejecutivo.
- 12ª) Iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de subvenciones.
- 13ª) Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas del Estado.
- 14ª) Iniciar la autorización a las universidades para la contratación de empréstitos.
- 15ª) Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz.
- 16ª) Acusar ante la Cámara de Senadores a los Miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Es el Capítulo Segundo del Título I Órgano Legislativo de la Constitución Política del Estado el que establece el procedimiento legislativo que debe seguir la Asamblea Legislativa Plurinacional para abordar el tratamiento de la enorme cantidad de leyes que debe tratarse en su seno derivada de la misma Constitución, veamos lo que establece este Capítulo:

Artículo 162.

I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.
2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.
3. El Órgano Ejecutivo.
4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia.
5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.
2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

3. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores.
4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.
7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación como ley.
9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la Legislatura siguiente.
10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera en receso, la Presidenta o el Presidente del Estado remitirá sus observaciones a la Comisión de Asamblea.
11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea.

Artículo 164.

- I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata.
- II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”.

Un aspecto fundamental a considerar al momento de elaborar y tratar un proyecto de Ley es si el mismo implica gastos e inversiones para el Estado, de ser así, estas leyes deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 321 inciso iv de la CPE que establece que: “Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste”. Esto es importante sobre todo para no reproducir una costumbre, muchas veces demagógica en la que incurren algunos legisladores al presentar proyectos de Ley de Declaratorias de Prioridad Nacional o Departamental a proyectos que normalmente implican gastos al Estado, pero que al no tener definidas las fuentes de los recursos, ni la manera de cubrirlos y menos las modalidades de inversión, estos proyectos quedan como meras declaraciones pero que sirven de pretexto para posteriores presiones sociales.

En concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en sus primeras sesiones los nuevos reglamentos de debates tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, estableciéndose en los mismos, procedimientos legislativos para cada Cámara.

Vamos a entrar en un momento intenso de encarar iniciativas legislativas cuyo tratamiento debe enmarcarse en lo establecido en la CPE. Será fundamental que especialmente la ciudadanía conozca de su derecho de impulsar iniciativas legislativas y que las mismas sean tratadas obligatoriamente en el seno de la Asamblea Legislativa. Las iniciativas

legislativas ciudadanas enriquecerán el proceso, pero para ello es preciso que la Asamblea Legislativa Plurinacional dinamice y facilite las mismas desarrollando plataformas ciudadanas en todos los Departamentos del país para dar cumplimiento y viabilizar la efectiva participación ciudadana y control social que implica: “Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes” (Art. 242, inc. 2, CPE).

La dinámica legislativa que encararemos hacia adelante, como emergencia de la aprobación y puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado; no sólo se concentrará en la Asamblea Legislativa Plurinacional sino que tendrá también como protagonistas a los legisladores departamentales y municipales que elegimos en las Elecciones del 4 de abril. Una vez que se constituyan las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, estos deberán elaborar leyes de alcance departamental y municipal que esperemos puedan desarrollar un tratamiento legislativo basado en lo establecido en los artículos 162 a 164 de la CPE reproducidos más arriba. La legislación nacional, municipal y departamental deberá ser desarrollada, especialmente en el marco de las competencias transferidas por la constitución a todos los niveles del Estado (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuido por Materia de acuerdo a la CPE).

III. CRITERIOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE TRATAR UNA LEY

Los diputados y senadores miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional tienen como función fundamental “parlamentar” es decir hablar, deliberar, emitir opinión y debatir las propuestas sustentadas en el diálogo, en el consenso y en el respeto al disenso. Por ello y contando con los Procedimientos Legislativos definidos en la Constitución y los reglamentos de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al momento de considerar cualquier iniciativa legislativa podríamos tomar en cuenta al menos los siguientes seis criterios que orienten la deliberación y aprobación de toda Ley en el seno del Órgano Legislativo:

- 1.- TODA LEY DEBE ESTAR AJUSTADA Y ARMONIZADA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
- 2.- TODA LEY DEBE TENER CONSISTENCIA, COHERENCIA Y CLARIDAD EN SU FORMULACIÓN ACORDE A TÉCNICAS LEGISLATIVAS ESTABLECIDAS
- 3.- PARA SU APROBACIÓN, TODA LEY DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESTABLECIDO EN LA CPE Y LOS REGLAMENTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, Y VELAR POR UNA DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS Y LOS ASAMBLEÍSTAS EN LAS SESIONES DEL PLENO CAMARAL Y DE LAS COMISIONES.
- 4.- EL OBJETO DE LA LEY DEBERÍA:
 - I) PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO POSIBLE A LA CIUDADANÍA: SEA DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO, DEMOCRÁTICO Y/O CULTURAL;
 - II) PRESERVAR LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO UNITARIO SOCIAL DE DERECHO PLURINACIONAL COMUNITARIO, LIBRE, INDEPENDIENTE,

SOBERANO, DEMOCRÁTICO, INTERCULTURAL, DESCENTRALIZADO Y CON AUTONOMÍAS;

III) PRESERVAR LA EQUIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y GENERACIONAL EN EL ALCANCE DE TODA LEY.

- 5.- TODA LEY DEBE CONTAR CON LA SUFICIENTE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTITUCIONAL O SECTORIAL EN SU ELABORACIÓN.
- 6.- TODA LEY DEBE CONSIDERAR EN SUS ALCANCES EL CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TANTO DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO COMO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuido por Materia de acuerdo a la CPE).

Las iniciativas legislativas que cumplan al menos con los seis requisitos enunciados garantizarán una implementación democrática y constitucional de la Constitución Política del Estado y la emergencia de la nueva institucionalidad plurinacional y autonómica emergente de la misma.

IV. AGENDA LEGISLATIVA DERIVADA DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO

Tenemos una Constitución Política del Estado aprobada por primera vez en la historia republicana de Bolivia por voto democrático y universal de la ciudadanía en referendo del 25 de enero del 2009 y que entró en vigencia a partir de su promulgación por el Presidente Evo Morales en fecha 7 de febrero del mismo año. Esto obliga a que toda la legislatura todavía vigente debe adecuarse gradualmente a la CPE, por tanto la agenda legislativa identificada es resultado de la necesidad de dicha adecuación, así como de leyes que expresamente la nueva Constitución Política del Estado las establece como mandato constitucional, y otras que sin estar expresamente señaladas, están implícitamente planteadas en la misma CPE.

Cada ley identificada tiene su correspondiente texto constitucional que la hace necesaria y está acompañada de una breve explicación de su alcance.

La Agenda legislativa identificada corresponde también a las competencias privativas, exclusivas, compartidas (ley básica nacional) y concurrentes (legislación nacional) establecidas por la CPE para el nivel central del Estado de acuerdo a la definición de cada una de las tipologías de asignación competencial establecidas en el artículo 297 de la CPE.

El propósito del listado de leyes propuesto, que son derivadas de la Constitución Política del Estado, tiene el propósito de que puedan ser consideradas y traducidas en iniciativas legislativas para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la presente legislatura, por cualquier ciudadano o ciudadana, por Diputados y Senadores de

la Asamblea Legislativa Plurinacional, por instituciones del Órgano Ejecutivo, por el Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia y por los gobiernos autónomos de las entidades territoriales, como lo establece el artículo 162 de la CPE.

Toda la agenda legislativa identificada y derivada de la CPE, que deberá considerarse en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la hemos ordenado y agrupado en función de las doce Comisiones establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Las Comisiones, de acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados, son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta para el cumplimiento de sus funciones, que entre otras está la de promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el sector o área de su competencia; e informar a la Asamblea sobre los Proyectos de Ley. Cada Comisión está organizada en Comités como instancias operativas y de investigación y están conformados por miembros de la respectiva Comisión. El artículo 55 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que: “Los comités por mandato expreso de la Comisión y en el plazo que ella fije, efectuarán el tratamiento preliminar de los Proyectos de Ley referidos a las temáticas de su incumbencia, sin que su pronunciamiento sea prerequisite para la consideración del proyecto en la Comisión”. La Cámara de Diputados está organizada en 12 Comisiones y 37 Comités.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación 2) Comité de Democracia y Sistema Electoral; y 3) Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos, normas y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados

y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de su funciones, y personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes.

Esta Ley tendrá como finalidad acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

Esta Ley establecerá una institucionalidad que proponga, supervise y fiscalice las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado; e impulsar planes de lucha efectiva contra la corrupción y evaluar su ejecución.

Esta Ley establecerá los procedimientos y las instancias llamadas a investigar y sancionar las ganancias ilícitas, sobre cuyas investigaciones NO SE PODRÁ INVOCAR SECRETO BANCARIO, de valores y de seguros, comercial, industrial, tributario, económico y financiero, cuando la entidad pública, habilitada por esta Ley para investigar fortunas ilícitas, requiera información para el cumplimiento de sus funciones. La información obtenida solo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos vinculados a la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera.

Para este propósito el Artículo 333 de la CPE establece que: “Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial”.

Esta ley deberá considerar también lo establecido en el artículo 112 de la CPE: “Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.

Esta ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Presidente Evo Morales en fecha 31 de marzo del 2010, lo que sin duda reviste un carácter histórico y responde al mandato popular de erradicar el flagelo de la corrupción y la impunidad de servidores públicos que en el pasado se enriquecieron ilícitamente en el ejercicio de funciones públicas. La Cultura nacional de Cero tolerancia a la corrupción deberá ser el mayor de los objetivos de este proceso de transformación y cambio; pero el mismo no será alcanzado sólo con esta Ley, sino a partir de ésta, hacer que se implementen, programas y sistemas, institucionalizados y permanentes de transparencia y lucha contra la corrupción, en todas las entidades públicas, tanto del nivel central del Estado como de las Entidades Territoriales Autónomas.

2. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Que garantice el derecho de toda ciudadana y todo ciudadano a acceder a información oportuna y veraz. La Nueva Constitución Política del Estado establece éste como parte de los derechos civiles: “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva” (Art. 21, núm. 6). El derecho de acceso a la información es un derecho humano que posibilita a las personas participar en la gestión pública a través del control social y de este modo detectar actos de corrupción y realizar su seguimiento.

3. LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Esta ley debe permitir el paso de la vigilancia de la administración de recursos a la participación efectiva de la ciudadanía en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas.

Para la consideración de este proyecto de Ley debemos remitirnos a los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado:

“Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. II. El derecho a la participación comprende: ...5. La fiscalización de los actos de la función pública.

Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad”.

4. LEY DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Esta ley establecerá los principios sobre los cuales todo servidor público deberá rendir cuentas ante la sociedad no solo sobre la ejecución presupuestaria y el destino de los recursos sino por los resultados obtenidos en su gestión, en la búsqueda de la satisfacción de necesidades de la población. Esta Ley reglamentará lo estipulado en la nueva Constitución Política del Estado (Arts. 232 a 240) referido al desempeño de funciones públicas de servidoras y servidores públicos; y su obligación que tienen de: “Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública (CPE, Art. 235, inc. 4).

5. LEY DE REVOCATORIA DEL MANDATO POPULAR

Esta ley deberá regular el procedimiento para revocar el mandato de toda autoridad pública electa mediante voto popular. Esta Ley deberá incorporar la revocatoria del mandato popular de los Diputados Uninominales, ya que al ser la ciudadanía la que permitió que con su voto sea electo el Diputado Uninominal sea la misma comunidad que active el referendo para revocar su mandato, ante cualquier incumplimiento de funciones o abandono de su obligación de trabajar estrechamente con la comunidad de la Circunscripción a la que representa en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lástima que no podrá hacerse lo mismo con los Diputados Plurinominales y Senadores que incumplan sus funciones, ya que si bien son electos en circunscripción departamental será muy difícil aplicar este mandato constitucional e individualizar la votación que hubieran recibido, que es la base para revocar el mandato recibido en las urnas, tomando en cuenta que su elección ha sido resultado

de la votación obtenida por el candidato presidencial y el partido político o agrupación ciudadana en la Circunscripción Departamental correspondiente.

Esta Ley reglamentará lo estipulado en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 240. I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley. II. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo. III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público. IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de acuerdo a Ley. V. Producida la revocatoria de mandato el afectado cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley. VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo.

Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: ...5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley”.

6. LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Esta Ley regulará todo lo concerniente a la jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional y de sus diferentes niveles, de acuerdo a lo establecido en los artículos 205 a 212 de la nueva Constitución Política del Estado. De acuerdo a los artículos referidos de la CPE, esta ley regulará el funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional, que sustituirá a la actual Corte Nacional Electoral, y que está compuesto por: 1. El Tribunal Supremo Electoral. 2. Los Tribunales Electorales Departamentales. 3. Los Juzgados Electorales. 4. Los Jurados de las Mesas de sufragio. 5. Los Notarios Electorales (Art. 205, CPE).

El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados; y tiene como función estratégica la de organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral (Art. 208, CPE).

El mandato constitucional expreso que deberá regular esta ley es el siguiente:

“Artículo 205. ...II. La jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral y de sus diferentes niveles se definen, en esta Constitución y la ley.

Disposición Transitoria Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

7. LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL

La novedad de esta Ley, con respecto al sistema electoral vigente, es que ahora deberá regular también la elección por sufragio universal de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental; de los miembros del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por otro lado, al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado en materia electoral: i) la Codificación sustantiva y adjetiva en materia electoral es una competencia privativa del nivel central del Estado; ii) el Régimen Electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales, es una competencia exclusiva del nivel central del Estado; iii) al definir la CPE que el Régimen electoral departamental y municipal es una competencia compartida entre el nivel central del Estado y las Entidades territoriales autónomas, se requerirá una Ley Básica aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a partir de la cual, se deberá contar con una Ley de Desarrollo, elaborada y aprobada por las instancias legislativas departamentales y municipales que incluya la reglamentación y ejecución que en esta caso corresponderá a las entidades territoriales autónomas. (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuido por Materia de acuerdo a la CPE).

Al momento de considerar esta Ley debemos tener en cuenta lo contemplado en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 11. ...II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la Ley:... 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

Artículo 27. I. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional.

Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.

Artículo 278. I. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales, elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. II. La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

Artículo 284. ...III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejales y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

Disposición Transitoria Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

8. LEY DE INSTITUTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

La Constitución Política del Estado además de la democracia representativa vigente hasta antes de aprobarse la nueva CPE, amplía las libertades democráticas hacia el ejercicio de la democracia participativa y comunitaria. En cuanto a la democracia participativa la Constitución reconoce varios institutos de democracia directa y participativa que deben ser regulados por esta Ley.

Los artículos de la CPE que deben ser considerados al momento de debatirse y elaborar esta Ley son los siguientes:

“Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”.

9. LEY DE IMPRENTA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (ADECUADA A LA CPE)

Considero fundamental que no sólo la Asamblea Legislativa Plurinacional sino también el conjunto de la ciudadanía podamos debatir y reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación y la necesidad de tener una regulación democrática e institucional sobre ellos, precautelando por sobre todas las cosas la libertad de expresión. La Ley de imprenta data del siglo pasado y ya es hora de actualizarla y adecuarla a la nueva CPE.

Los artículos de la CPE que deben ser considerados al momento de tratar esta Ley son:

“Artículo 107. I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de

periodistas y medios de comunicación y su ley. III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”.

10. LEY DEL ÓRGANO LEGISLATIVO PLURINACIONAL

La CPE establece la necesidad de contar con una Ley que regule las funciones y organización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la base para esta Ley serán los reglamentos aprobados por ambas cámaras. Para dar cumplimiento a este mandato constitucional la Asamblea Legislativa Plurinacional podría elevar a rango de Ley los Reglamentos aprobados en sus primeras sesiones.

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley... II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 162. ...II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa”.

11. LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Es fundamental contar con una Ley de la Defensoría del Pueblo adecuada a la nueva Constitución Política del Estado y en función de ella institucionalizar a la brevedad posible su designación por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 220, CPE). Para la consideración de la ley se deberá tomar en cuenta lo concerniente a esta entidad establecida en la Sección I del Capítulo Segundo referido a la Función de Defensa de la Sociedad en sus artículos 218 al 224 dedicados a la Defensoría del Pueblo:

“Artículo 218. I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos...

III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”.

12. LEY DE SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS

Esta Ley regulará los derechos y obligaciones que tienen las personas que acceden a ocupar una responsabilidad en la administración pública en todos los Órganos del Estado, Policía, FFAA, Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas y Entidades Territoriales Autónomas.

Esta Ley deberá desarrollar los principios de la Administración Pública establecidos en el siguiente artículo de la CPE:

“Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.

Esta Ley también deberá establecer los alcances de la carrera administrativa para todas aquellas personas que prestan servicios en la administración pública aplicando el siguiente artículo de la CPE:

“Artículo 233. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”.

Por otra parte, la nueva CPE establece requisitos, obligaciones y responsabilidades para el ejercicio de la función pública a ser reguladas por Ley de acuerdo a los siguientes preceptos constitucionales:

“Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en

la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.⁴

Artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública. 3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. 5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública.

Artículo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona. III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 237. I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública: 1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos. 2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley. II. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones”.

13. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo a la CPE una Ley regulará la organización y funcionamiento de las cooperativas de servicios públicos:

“**Artículo 335.** Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia será

4. Este requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales ha sido flexibilizado en la misma CPE por la Décima Disposición Transitoria que establece su aplicación progresiva de acuerdo a Ley.

realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por el Órgano Electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por la ley”.

14. LEY DE BIENES DE PATRIMONIO ESTATAL Y ENTIDADES PÚBLICAS

La CPE establece la necesidad de contar con una Ley para regular la administración de los bienes de patrimonio del Estado y entidades públicas:

“Artículo 339. ...II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”.

15. LEY DE CONCESIONES SOBRE RECURSOS NATURALES, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS BÁSICOS

Es necesario adecuar a la nueva CPE el ordenamiento jurídico en cuanto a concesiones tomando en cuenta la siguiente disposición constitucional:

“Disposición Transitoria Octava. I. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. **II.** En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. **III.** Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros. **IV.** El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. **V.** Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado”.

16. LEY DEL ÓRGANO EJECUTIVO

El Órgano Ejecutivo, a fin de adecuarse a los preceptos constitucionales debe dotarse para su funcionamiento de una Ley, lo que antes se denominaba Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), ahora se denominaría Ley de Organización del Órgano Ejecutivo (LOOE) aplicando los siguientes artículos de la CPE.

“Artículo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:..

Artículo 174. Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:...

Artículo 175. I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley:...”

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Jurisdicción Ordinaria y Consejo de la Magistratura 2) Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; y 3) Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL

Reglamentará lo establecido en la Constitución Política del Estado en lo referente a la Justicia Ordinaria que se ejerce por el TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales (LEY DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL); existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, como instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, es parte del Órgano Judicial y su funcionamiento será regulado también por esta Ley.

El TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, integrado por Magistradas y Magistrados, organizada internamente en salas especializadas, cuya composición y organización se determinará por esta Ley.

Esta Ley deberá regular la composición y organización del Tribunal Supremo de Justicia dando cumplimiento a los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley.

Artículo 183. ...II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 184. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley...”

Como parte integrante del Órgano Judicial, esta ley deberá regular también las atribuciones del Tribunal Agroambiental, aunque por la especificidad de sus funciones se requerirá una Ley específica para este Tribunal.

“Artículo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley...”.

La Ley del Órgano Judicial está contemplada entre las que deben ser aprobadas con plazos constitucionales:

“Disposición Transitoria Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

2. LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

De acuerdo a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado, “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” (CPE, Art. 196). Esta Ley regulará la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esta ley orgánica del Tribunal Constitucional Plurinacional deberá tratarse también en la Comisión de Constitución, legislación y sistema electoral; y especialmente en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías por las atribuciones que la CPE le transfiere en materia de posibles controversias competenciales entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

“Artículo 197. ...III. La composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán regulados por la ley.

Disposición Transitoria Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

Esta Ley debe contemplar también lo establecido en materia de garantías constitucionales establecidas especialmente en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 109. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. **II.** Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.

Artículo 114. I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”.

Uno de los propósitos fundamentales que hace a la esencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es atender el derecho ciudadano a presentar la Acción de Inconstitucionalidad establecida en el artículo 132 de la CPE; esta Ley deberá regular los procedimientos a seguir:

“Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”.

Las controversias competenciales entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, y entre éstas últimas entre sí, los controles de constitucionalidad de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas y los posibles conflictos de constitucionalidad entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina, deberán ser atendidos con especial dedicación por el Tribunal Constitucional Plurinacional a ser elegido por voto popular el 5 de diciembre de 2010 (Ley 003 De Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público). Para ello y al momento de considerar la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, se debería pensar en habilitar Salas especializadas (al menos una de Competencias y otra de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina) en la estructura de funcionamiento de este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las siguientes disposiciones de la CPE:

“Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. 2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. 3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas. 4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución....11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

Artículo 275. Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción.

Disposición Transitoria Tercera....II. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad” (Las negrillas en el texto son mías).

3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (adecuado a la CPE)

Para una administración de la justicia eficiente que permita optimizar los procedimientos y superar el hecho de que se demora más en detener a los delincuentes que en liberarlos, promoviendo la conducta ética de jueces y la responsabilidad social de los fiscales, se hace necesaria un nuevo Código de Procedimiento Penal adecuado a la CPE; dando cumplimiento al artículo 298 que establece que la “Codificación sustantiva y adjetiva en materia... penal...” es una competencia PRIVATIVA del nivel central del Estado (Art. 298, inc. I, 21, CPE).

“**Artículo 23.** I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas. V. En el momento

en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querrela formulada en su contra. VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley.

Artículo 121. ...II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado”.

La legislación en materia penal deberá considerar también lo contemplado en la CPE sobre la privación de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales:

“**Artículo 117.** ...III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley”.

La codificación sustantiva y adjetiva en materia penal deberá considerar las siguientes disposiciones constitucionales especialmente las referidas a las Acciones de Defensa de la sociedad instituidas por la CPE:

“**Artículo 127.** I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Artículo 129. ...V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley.

Artículo 131. ...IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente y sin

observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley.

Artículo 134. ...V. La decisión final que conceda la Acción de Cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley”.

4. LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

Considerando que las pandillas muchas veces están compuestas por menores de edad se requiere una legislación especial que con un enfoque de prevención y derechos humanos se desarticulen las pandillas juveniles con programas de rehabilitación efectivos para reinsertar en la comunidad a jóvenes que lamentablemente caen en redes delincuenciales que es preciso desbaratarlas. Este proyecto de Ley se debería considerar dando cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado:

“**Artículo 23.** ...II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad”.

5. LEY DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

Esta Ley regulará las atribuciones de este tribunal establecidas en el Artículo 189 de la CPE, principalmente referidas a: “Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el

sistema ecológico y la conservación de especies o animales”; y organizar los juzgados agroambientales.

Esta Ley debe ser también considerada por la comisión de Constitución, legislación y sistema electoral, y especialmente por la Comisión Región Amazónica, tierra, territorio, agua, recursos naturales y medio ambiente, por el necesario enfoque de “derechos de la madre tierra”.

6. LEY DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Si bien el Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial, por las especificidades de este Consejo como responsable del régimen disciplinario es aconsejable que una Ley específica de este Consejo sea la que regule su conformación, estructura y funciones de acuerdo a lo estipulado por la CPE.

“Artículo 193. I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana. II. Su conformación, estructura y funciones estarán determinadas por la ley.

Artículo 195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la Constitución y en la ley...”

7. LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL

Esta Ley reglamentará lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en relación a la JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA (CPE, Arts. 190 a 192). La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria, así como el alcance de la jurisdicción indígena originaria campesina y sus ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

Esta ley deberá ser tratada también por la Comisión de Constitución, legislación y sistema electoral; y especialmente por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad.

“Artículo 191. ...II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: ...2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Artículo 192. ...III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”.

8. LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

La nueva Constitución Política del Estado crea una nueva institucionalidad que tiene que ver con la función de defensa del Estado instituyendo la Procuraduría General del Estado.

“Artículo 229. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley”.

9. LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO

Esta Ley, adecuada a la nueva CPE, regulará el funcionamiento y atribuciones del Ministerio Público establecidas en los artículos 225 a 228:

“Artículo 226. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución. **II.** El Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia y demás fiscales establecidos por la ley”.

10. LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y JUSTICIA

Esta Ley tiene por finalidad conformar una Comisión de la verdad y justicia encargada expresamente de investigar las violaciones a los Derechos Humanos y las garantías constitucionales expresada en torturas, detenidos desaparecidos, asesinatos y todo tipo de violencia física y psicológica utilizada en contra de ciudadanos y ciudadanas por

estructuras de poder nacional, departamentales o locales en el transcurso de los últimos 40 años, averiguando la verdad para lograr justicia a las víctimas de estas violaciones.

La Comisión, creada por esta Ley, aportará en elevar la cultura democrática de las estructuras de poder y la sociedad en su conjunto a fin de que las prácticas totalitarias e intolerantes que violan los derechos individuales y colectivos, no tengan posibilidad de permanecer en la impunidad y que tarde o temprano la verdad y la justicia habrán de imponerse.

Esta iniciativa legislativa ha sido propuesta por el Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, que es la base sobre la que se debería trabajar esta ley en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los objetivos de la Comisión de la Verdad y Justicia creada por esta Ley serían:

- i) Luchar contra la impunidad, mediante el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período investigado, señalando sus antecedentes, circunstancias y responsables.
- ii) Obtener datos concretos de estos hechos para satisfacer el interés de las víctimas de conocer lo sucedido y velar por la aplicación justa de las leyes.
- iii) Señalar las causas que motivaron la violencia y las razones por las que se tuvo como consecuencia la pérdida de tantas vidas humanas ajenas al conflicto.
- iv) Incidir en prácticas de respeto a la igualdad y la dignidad.
- v) Reforzar las bases de un orden interno democrático que respete y promueva los derechos humanos.
- vi) Recomendar las medidas de restitución de los derechos conculcados de las víctimas y las medidas que deberían tomarse para prevenir que estas violaciones no se produzcan en el futuro.

Esta Ley deberá otorgar atribuciones y funciones a la Comisión de la Verdad y Justicia que le permita efectivamente:

- i) investigar los crímenes cometidos sistemáticamente o en gran escala de asesinatos, exterminios, desapariciones forzadas y tortura durante el período señalado.
- ii) Adoptar ciertas medidas para que los organismos estatales correspondientes brinden protección a todas las víctimas, testigos,

familiares y todos los que puedan brindar alguna información sobre los hechos investigados, para que no sean sujetos de represalias y padecimientos innecesarios durante la investigación.

- iii) La Comisión deberá tener las facultades legales, para obviar fueros y todo lo concerniente a documentación secreta, siempre y cuando la investigación así lo requiera.
- iv) Ningún poder del Estado, organismo político u otra institución pública o privada deberá estar facultada para detener o demorar una investigación, en ninguna circunstancia.

11. LEY DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

Esta Ley tiene el objeto de modificar el Código Civil y sus Procedimientos, para que la sucesión por causa de muerte sea un trámite y no un juicio. Este trámite no debería precisar de abogado y podría realizarse ante el Registro Civil y Derechos Reales mediante un formulario. Con esto podríamos disminuir en un 30% la actividad de tribunales y depender menos de abogados que en muchos casos lo que hacen es complicarle la vida a la ciudadanía y por supuesto cobrar por un servicio estatal que no debería significar para la gente mayores suplicios burocráticos que los sufridos por la muerte de sus seres queridos. Es hora de liberarnos de los tribunales y abogados para todo y para nada.

12. LEY DE MODIFICACIÓN DE DATOS EN REGISTROS PÚBLICOS

Otra Ley que podría simplificar la vida de la ciudadanía y liberarnos de caer en las redes de la burocracia judicial tiene que ver con los trámites ante los registros públicos para modificar, letras y nombres; llenar un formulario, publicar la solicitud de la modificación en órganos de prensa, determinar plazos para oposiciones, debería ser suficiente para estas modificaciones. Con esto podríamos disminuir también en un 30% la actividad de tribunales y depender menos de abogados y ahorrarle a la ciudadanía no sólo el costo de la intermediación judicial sino un trámite que en muchos casos resulta excesivamente burocrático; y convertir este tipo de procesos administrativos en un efectivo servicio público en beneficio de la ciudadanía.

Considero que este tipo de iniciativas legislativas y otras similares debería ser un objetivo principal de la Asamblea Legislativa

Plurinacional, elaborando y aprobando leyes que simplifiquen la vida de la ciudadanía, haciendo que las instituciones públicas estén al servicio de la gente y no que la gente sea la permanente víctima de sus instituciones. De esta manera invertiremos una relación de dominación/confrontación entre Estado y Sociedad, para transformarla en una relación virtuosa de complementariedad, reciprocidad, democracia, que sienta las bases de un Estado que procure el Vivir Bien de su Sociedad, lo que en otras experiencias se denominó el Estado de Bienestar.

Es en el mal necesario de la tramititis donde la relación Estado-Sociedad debería humanizarse. Toda entidad pública, sea del nivel Central del Estado o de las Entidades Territoriales Autónomas debe entender que su existencia se debe a la comunidad, y que por tanto desburocratizando los procedimientos administrativos podría ser el mecanismo más sencillo de poner el Estado al servicio de la Sociedad.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por cuatro Comités: 1) Comité de Planificación e Inversión Pública; 2) Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría; 3) Comité de Política Financiera, Monetaria y de Seguros; y 4) Comité de Ciencia y Tecnología.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Esta Ley aplicará y regulará el mandato de la Constitución Política del Estado (Art. 103) que establece que “el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y tecnología en beneficio del interés general” y “asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación”. Esta ley se regirá a los principios de la Administración Pública establecidos en la CPE (CPE, Art. 232), y sus fines estarán destinados a garantizar que el uso de los medios electrónicos se constituyan en elementos generadores de inclusión social, promotores del interés y participación ciudadana en los asuntos públicos, transparencia en la

gestión pública, y búsqueda de la complementariedad del conocimiento científico con el saber local y ancestral.

2. LEY DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Esta Ley deberá elaborarse tomando en cuenta lo establecido en el siguiente artículo de la CPE:

“**Artículo 103.** I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología. II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley”.

3. LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y DOMINIO TRIBUTARIO

La emergencia de Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con competencias en materia de gestión pública requiere una corresponsabilidad fiscal de las mismas en virtud de que los ingresos que genera el Estado, a través del nivel Central, nunca serán suficientes para financiar los gastos e inversión pública del conjunto del Estado. Por ello y a fin de ampliar la bases materiales de las autonomías, las ETAs deberán hacer un especial esfuerzo imaginativo para recaudar recursos propios que no sólo sean de materia impositiva. Pero sin duda es una posibilidad abierta por la CPE al definir la existencia de dominios tributarios nacionales, departamentales y municipales que esta ley deberá clasificar y definir.

Esta Ley debe adecuarse a la política fiscal definida en la CPE, considerando una política transparente y responsable de administración del gasto y el endeudamiento. Para ello debemos tomar en cuenta lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:...7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.

Artículo 321. I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste. V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente. III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y

definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

Artículo 325. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley”.

4. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Esta ley deberá adecuar a la nueva CPE la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental más conocida como Ley SAFCO, considerando la cualidad del Estado autonómico, donde los sistemas de administración y control gubernamentales se adecúen a la existencia de diversas Entidades Territoriales Autónomas, en función a la determinación constitucional de que el Sistema de control gubernamental es una competencia concurrente (Art. 299, Inc. II-14, CPE). Se define la concurrencia en la CPE como aquella en la que “la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva” (Art. 297, inc. I-3, CPE).

“Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley”.

A la brevedad posible la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá institucionalizar y dar cumplimiento a la designación de la Contralora o Contralor General del Estado de acuerdo al siguiente artículo de la CPE:

“Artículo 214. La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.

5. LEY DE CLASIFICACIÓN Y USO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Garantizar y ampliar la base material de las autonomías sin duda será un desafío para el Estado Plurinacional descentralizado y con autonomías para el pleno ejercicio autonómico por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs). Sin recursos, las competencias asignadas por la CPE a cada una de las ETAs podrían verse comprometidas. Por ello se requiere de una reingeniería en materia de clasificación y uso de los ingresos generados por el Estado para una distribución democrática, equitativa y que garantice una base material mínima para el funcionamiento pleno del régimen autonómico; a partir de la cual las ETAs generen sus propias estrategias de generación de recursos propios en el marco de sus competencias en materia fiscal.

De ahí la importancia estratégica de definir un PACTO FISCAL ESTRATÉGICO entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Para ello es fundamental definir la clasificación y el uso de las rentas del Estado reguladas por Ley a partir de los preceptos constitucionales establecidos en los siguientes artículos:

“Artículo 339. ...III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de desarrollo económico y social del país, el Presupuesto General del Estado y con la ley.

Artículo 340. I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales, e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos. II. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinos. III. Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional”.

Esta ley debería ser debatida y considerada también en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

6. LEY DE IMPUESTOS Y REGALÍAS POR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Con excepción de las regalías que perciben los Departamentos productores de hidrocarburos cuyo 11% está constitucionalizado (CPE, Art. 368); esta Ley deberá regular la distribución equitativa de regalías para departamentos no productores, los impuestos a los hidrocarburos (IDH) y demás rentas provenientes de la explotación de recursos naturales transferidas a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) contemplando al menos las siguientes variables: i) población, ii) necesidades básicas insatisfechas, iii) extensión territorial; y iv) eficacia y eficiencia administrativa de las ETAs.

Esta ley deberá considerar los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 341. Son recursos departamentales: 1. Las regalías departamentales creadas por ley; 2. La participación en recursos provenientes de impuestos a los Hidrocarburos según los porcentajes previstos en la Ley....

Artículo 351. ...IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley.

Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 355. I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. II. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley.

Artículo 368. Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial”.

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN E INDUSTRIA

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por cinco Comités: 1) Comité de Minería y Metalurgia; 2) Comité de Energía e Hidrocarburos; 3) Comité de Industria, Comercio, Transportes y Turismo; 4) Comité de Agricultura y Ganadería; y 5) Comité de Economía Comunitaria y Social Cooperativa.

Las iniciativas legislativas que se debengestar en ésta área responden al desafío de transitar de la economía primario exportadora a la de una economía industrial y plural que logre los siguientes objetivos:

- ✓ Apoyo al Emprendimiento Productivo Privado, generando un entorno favorable para la actividad económica (comercial, industrial, agropecuaria y de servicios).
- ✓ Gran salto a la industrialización: gas, hierro, litio y empresas nacionales estratégicas, consolidando el Modelo Nacional

Productivo y la construcción de una nueva matriz productiva, sólida e integral.

- ✓ Inserción laboral de la juventud: mi primer empleo digno, en todas las reparticiones del Estado y empresas privadas.
- ✓ Proteger, impulsar e incentivar la cadena económica y productiva de la actividad turística. Estableciendo políticas de promoción turística, profesionalizando a los prestadores de servicios y facilitando la operación de la cadena turística.
- ✓ Impulso al desarrollo agropecuario sustentable hacia una Bolivia agroecológica y con soberanía y seguridad alimentaria.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD AUTÁRQUICA DE REGULACIÓN SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA DE HIDROCARBUROS

Dado el carácter estratégico de los recursos hidrocarburíferos y su aprovechamiento para el beneficio del país, toda la cadena productiva requiere de una eficiente y eficaz tarea de regulación, control, supervisión y fiscalización. Esta ley deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 365 de la CPE:

“Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley”.

2. CÓDIGO DE MINERÍA

La Constitución Política del Estado establece como competencia privativa del nivel central del Estado la codificación sustantiva y adjetiva en materia de minería:

“Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:...21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral”.

Al momento de considerar el nuevo Código de Minería hay que tomar en cuenta lo estipulado en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. ...IV. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.

Artículo 372. ...II. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley. III. El Estado deberá participar en la industrialización y comercialización de los recursos mineralógicos metálicos y no metálicos, regulado mediante la ley. IV. Las nuevas empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su domicilio legal en los departamentos de mayor producción minera, Potosí y Oruro”.

3. LEY DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO, GARANTÍAS Y FOMENTO A LA INVERSIÓN E INICIATIVA PRIVADA

Con la Constitución Política del Estado la iniciativa privada está garantizada, y esta Ley dará cumplimiento al mandato constitucional expresado en los siguientes artículos:

“Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley”.

Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo. IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país. V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios”.

4. LEY DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Esta Ley dará cumplimiento y regulará lo establecido en el artículo 334, inciso 4, en sentido de que:

“En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: ...Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado”.

Así mismo esta Ley deberá regular y hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado en sentido de que:

“Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo...Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción” (CPE, Art. 47).

5. LEY DE POLÍTICAS GENERALES, PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

Esta ley deberá regular y dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado que reconoce el turismo como estratégico para la economía nacional:

“El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente” (CPE, Art. 337).

Esta Ley debe considerar la distribución competencial, entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, en materia de turismo establecida en la CPE de la siguiente manera:

COMPETENCIA EXCLUSIVA del nivel central del Estado: Políticas generales de turismo (Art. 298, inc. II-37, CPE).

COMPETENCIA EXCLUSIVA de los gobiernos departamentales autónomos: Políticas de turismo departamental (Art. 300, inc. I-20, CPE).

COMPETENCIA EXCLUSIVA de los gobiernos municipales autónomos: Políticas de turismo local (Art. 302, inc. I-17, CPE).

COMPETENCIA EXCLUSIVA de las autonomías indígena originario campesinas: Políticas de turismo (Art. 304, inc. I-11, CPE).

La CPE define como competencias exclusivas: “...aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas” (Art. 297, inc. I-2, CPE).

En virtud de ello tendremos cuatro leyes, cada una en su respectiva jurisdicción, pero que requiere, dada la formulación competencial en esta materia, una obligada coordinación y armonización legislativa entre el nivel central del Estado (Asamblea Legislativa Plurinacional) y las Entidades Territoriales Autónomas (Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y las instancias legislativas definidas por las Autonomías Indígenas) a fin de no hacer la vida imposible a operadores y clientes de la actividad turística con una maraña legislativa, que podría inviabilizar la estratégica industria turística en el país.

6. LEY DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Esta Ley se adecuará a lo establecido en la Constitución Política del Estado en referencia a la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales que se regirán por el principio de: “Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones

con valor agregado” (CPE, Art. 255, II, Núm. 11); así como lo estipulado en el artículo 318: “El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora”.

Esta ley debería regular la estructura y funciones de un Consejo Nacional de Exportaciones de Bolivia (CONEXBOL) con la finalidad de lograr una mayor participación de los actores involucrados en el proceso de exportación, como instancia consultiva para concertar las políticas de Estado conducentes a fomentar las exportaciones.

7. LEY DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Esta Ley regulará el impulso a la innovación y que de cobertura a los CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se tiene ya muchas experiencias a nivel local en funcionamiento. Una Ley de innovación tecnológica hará posible el efectivo respaldo al tejido productivo local y elevar sus condiciones de competitividad para la exportación.

8. LEY DE FOMENTO A LA ARTESANÍA

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 334:

“Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: 1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos...3. La producción artesanal con identidad cultural”.

9. LEY DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 334:

“Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: ...2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica”.

10. LEY DE EMPRESAS COMUNITARIAS O SOCIALES

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 54:

“Artículo 54. ...III. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.

11. LEY DEL SISTEMA COOPERATIVO

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 55:

“Artículo 55. El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley”.

12. LEY DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRAL

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 76:

“Artículo 76. I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores. II. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de ninguna naturaleza en el territorio boliviano, con excepción de los que hayan sido creados por la ley”.

13. LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL ESTATAL

La gestión pública, sin importar el nivel desde la cual se ejerce, debe estar obligatoriamente enmarcada en un sistema de planificación evitando así que se la haga a la deriva. En el actual SISPLAN existen una serie de deficiencias que exigen su modificación, insertando los Planes Regionales de Desarrollo (Supramunicipales). De esta manera se simplificaría la planificación del desarrollo municipal, que actualmente

supone 327 planes de desarrollo municipales (PDMs). Sería recomendable no obligar a los Gobiernos Municipales a contar con un PDM que en muchos casos termina en el escritorio de algún funcionario desinteresado. En su lugar se podrían establecer los planes regionales con la participación de varios municipios y su respectivo gobierno departamental porque la escala regional es más apropiada para la planificación. Esto no debería restringir la posibilidad de que los municipios que por sus características y dimensiones, elaboren sus Planes de Desarrollo Municipal en base a los planes de desarrollo nacional, departamental y regional.

Para ello se debe dar cumplimiento al artículo 316 de la CPE que establece que:

“Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:
1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales”.

Al momento de elaborar esta ley debemos tomar en cuenta las competencias transferidas por la Constitución Política del Estado a los distintos niveles de la siguiente manera:

“Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:...22. Política económica y planificación nacional.

Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:...35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:...42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional”. (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidas por materia de acuerdo a la CPE).

14. LEY DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, ESPECULACIÓN, ACAPARAMIENTO, AGIO, USURA, EVASIÓN IMPOSITIVA Y OTROS DELITOS ECONÓMICOS

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 325:

“Artículo 325. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley”.

15. LEY ÓRGANICA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en los siguientes artículos:

“Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 2. Ejecutar la política cambiaria. 3. Regular el sistema de pagos. 4. Autorizar la emisión de la moneda. 5. Administrar las reservas internacionales.

Artículo 329. I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos. II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus funciones cinco años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley”.

Además de considerar esta Ley será importante agendar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la brevedad posible, la preselección de ternas a presentarse al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para la designación constitucional del Directorio del Banco Central de Bolivia.

16. LEY DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA

Para dar cumplimiento a lo establecido en la CPE en su artículo 330:

“Artículo 330. ...V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación”.

17. LEY DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, SERVICIOS
FINANCIEROS Y SU REGULACIÓN

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en los siguientes artículos:

“Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.

Artículo 332. I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley”.

18. LEY DE DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ENERGÉTICA
Y REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA

Que regule y de cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en los siguientes artículos:

“Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley.

Artículo 379. I. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente. II. El Estado garantizará

la generación de energía para el consumo interno; la exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país”.

19. LEY DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE Y SEGURO AGRARIO

El paradigma del “suma qamaña” (vivir bien) establecido en la nueva CPE como un principio ético-moral de la sociedad plural (Art. 8, CPE) adquiere un sentido estructural frente a la realidad en la que todavía se vive en el área rural donde está concentrada la pobreza que afecta a la mayoría de pueblos y naciones indígena originario campesinos. Por tanto, una profunda revolución democrática y cultural implica volcar los mayores esfuerzos para revertir estos indicadores. Es preciso orientar la inversión pública y privada para elevar la productividad agropecuaria y fortalecer la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria. Esta ley deberá enfocarse a este propósito.

En esta Ley se debería insertar un capítulo referido al Seguro Agrícola Universal.

Esta ley deberá regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales. 3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 4. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las dimensiones de su vida. 5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria.

Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación,

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario. 5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades. 6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos. 7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural. 11. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.

Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía.

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Autonomías Departamentales; 2) Comité de Autonomías Municipales y Regionales; y 3) Comité de Autonomías Indígena Originario Campesinas.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

La CPE limita los alcances de la Ley Marco de Autonomías al procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, a la transferencia y delegación competencial, al régimen económico financiero, y a la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas (Art. 271). Esta restricción permite dar cabida a las normas básicas institucionales de las Entidades Territoriales Autónomas (Estatutos y Cartas Orgánicas). Además de esta limitante específica, la Ley Marco de Autonomías debería también regular la emergencia de la autonomía regional y la indígena originaria campesina; las Mancomunidades entre Entidades Territoriales Autónomas, entre los aspectos más importantes.

La Ley Marco de Autonomías deberá ser aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (CPE, Art. 271). Esta es una de las cinco leyes que está contenida en la Disposición Transitoria Segunda de la CPE para ser tratado en los 180 días a partir de instalada la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los alcances de esta Ley son ampliamente explicados más adelante en la Parte VII. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN.

2. LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS

La actual Ley 2028 de Municipalidades, todavía vigente, ha quedado obsoleta a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado porque existe ahora un régimen constitucional de entidades territoriales autónomas municipales que establece adicionalmente un catálogo competencial especialmente en lo

que se refiere a las Competencias Exclusivas transferidas a los Gobiernos Municipales Autónomos.

Hasta que los Gobiernos Municipales no logren aprobar sus Cartas Orgánicas y éstas entren en vigencia como norma institucional básica mediante referendo aprobatorio y previo control de constitucionalidad, como lo establece la CPE, deberán regular su funcionamiento en base a esta Ley. A fin de evitar un vacío legal es preciso contar con una nueva ley cuya base debería ser la adecuación a la nueva CPE de la todavía vigente Ley de Municipalidades.

3. LEY DE UNIDADES TERRITORIALES (CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO TERRITORIAL-INGET)

Revisados los antecedentes históricos de la organización política del estado, se evidencia que hasta la fecha sólo se han delimitado un 6% de municipios, eso quiere decir que del total de municipios existentes, solo alrededor de 20 Municipios cuentan con Ley de Delimitación territorial y sólo dos están debidamente demarcados.

Durante varias décadas, el anterior Poder Legislativo, en el marco de sus atribuciones y en ausencia de un marco legal adecuado, ha promovido y generado una caótica creación de Provincias, Municipios y sobre todo Cantones. Un claro ejemplo es el caso de Oruro donde la Provincia Eduardo Abaroa fue fragmentada en dos, rompiendo su continuidad geográfica, por la Provincia Sebastián Pagador.

Hasta el 7 de febrero de 2009, en función de la Ley de Unidades Político Administrativa (UPAs) todavía en vigencia, los Prefectos son Jueces en primera instancia para dirimir conflictos de límites intermunicipales e interprovinciales, y el Ministro de la Presidencia era juez en segunda instancia de éstos, y además Juez en Primera instancia para dirimir conflictos de límites interdepartamentales. Los Prefectos y futuros Gobernadores, al ser autoridades electas, no están en condiciones de ser jueces imparciales; y las funciones propias del Ministro de la Presidencia hacían que su tarea de Juez se torne burocrática y poco eficiente. Por Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, el Ministerio de Autonomía asume la responsabilidad en segunda instancia de conocer los procesos administrativos de creación, modificación y delimitación de las Unidades Territoriales municipales, manteniéndose las Prefecturas con las mismas atribuciones.

Por ello es necesario que el Estado cuente con una nueva INSTITUCIONALIDAD que exclusivamente atienda ésta delicada tarea, que es la base de la organización territorial del Estado; por ello la Ley de Unidades Territoriales (UTAs) debería sustituir a la actual Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs), teniendo como propósito fundamental simplificar, reglamentar y regular el proceso de delimitación, creación y modificación de Unidades Territoriales.

De acuerdo al Art. 269, Inc. II de la CPE, “La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley”. Por lo que, la Ley de Unidades Territoriales deberá establecer el procedimiento de delimitación considerando al menos tres mecanismos a los que podrían recurrir las partes en conflicto: i) concertación entre Unidades Territoriales, con plazos y procedimientos definidos; ii) proceso legal-administrativo con plazos y procedimientos simplificados, y iii) referendo en las áreas de disputa. Así mismo ésta Ley debería establecer la creación del INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO TERRITORIAL, entidad con autonomía de gestión técnico-administrativa, instaurada como máximo y único tribunal técnico-administrativo para conocer y dirimir sobre esta materia, pudiendo las partes involucradas en el conflicto apelar en última instancia al Tribunal Supremo de Justicia. Este Instituto asumiría las actuales competencias de la Unidad Técnica de Límites dependiente del Ministerio de Autonomía, y las Unidades de Límites dependiente de las actuales prefecturas y futuros gobiernos departamentales autónomos.

Este Instituto debería estar a la cabeza del Consejo Nacional Geográfico Territorial (CONGET) regulado también en esta Ley, como instancia deliberativa y consultiva para conocer aspectos de organización territorial del Estado Plurinacional. De ella formarían parte todas las entidades públicas que tienen relación con los asuntos territoriales del Estado como son el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Estadísticas, varios Ministerios y una representación de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, Municipales e Indígena Originaria Campesinas.

En materia de Organización Territorial, se tiene como base la cartografía del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Instituto Geográfico Militar (IGM) y Corte Nacional Electoral. En el marco del Artículo 29 de la Ley UPAs N° 2150, el Instituto Geográfico Militar es

el único organismo técnico encargado de realizar la demarcación de las Unidades Político Administrativas en el territorio nacional. Sobre esta base la nueva Ley de Unidades Territoriales deberá definir las responsabilidades institucionales para contar con una base de datos con información cartográfica (mapas) y alfa numérica (tablas) que coadyuve al proceso de delimitación y demarcación de Unidades Territoriales. Por ello esta nueva Ley de Unidades Territoriales deberá contemplar también aspectos referidos a la elaboración de la cartografía oficial del Estado Plurinacional.

La nueva CPE establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; eliminando la mención del Cantón como parte de la organización territorial del Estado y que las regiones formarán parte de la organización territorial. Esto hace que la nueva Ley de Unidades Territoriales resulte estratégica para encarar de manera planificada la organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la base de la necesaria definición de la delimitación y demarcación de las Unidades Territoriales.

No se debería esperar a que surjan los conflictos de límites para emprender en los próximos cinco a diez años una imprescindible tarea Estatal de delimitación como base territorial fundamental para encarar la Organización territorial del Estado Plurinacional descentralizado y con autonomías.

Al momento de considerar esta Ley se debe dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 6. Aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites, de acuerdo con la Constitución y con la ley.

Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley”.

4. LEY ORDENAMIENTO, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Esta Ley tiene el propósito de definir las políticas en esta materia que permita un crecimiento ordenado del territorio sin perjuicio para las áreas rurales garantizando un Ordenamiento, Gestión y Planificación del Territorio en función a las capacidades del suelo. Esta ley deberá evitar los loteamientos especulativos y la venta indiscriminada de terrenos rurales sin planificación. El estudio y respeto de la vocación productiva del suelo en el área rural; es la base para definir la ubicación de nuevas centralidades o asentamientos humanos. A partir de ésta Ley nacional se debería elaborar la Legislación de las Entidades Territoriales Autónomas que tienen competencias exclusivas para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos en coordinación con los planes del nivel central del Estado y otros niveles, en base a la competencia exclusiva del nivel central del Estado de definir “Políticas de planificación y ordenamiento territorial” (Ver el Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidos por Materia de acuerdo a la CPE).

Esta Ley debería establecer una disposición transitoria de regularización de construcciones y urbanizaciones en base a las exigencias establecidas en esta norma que permita encarar un programa sustentable de protección física de urbanizaciones. Estas deben encarar intervenciones estructurales de estabilización de suelos, instalación de servicios básicos (alcantarillado sanitario y pluvial), muros de protección y otras inversiones que eviten deslizamientos y otros fenómenos de riesgos que han estado sucediendo en varios municipios provocado por asentamientos urbanos fuera de norma.

5. LEY DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO DE INMUEBLES URBANOS

Esta Ley deberá dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en cuanto al Derecho a la propiedad, que en su artículo 56 señala que: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria”; así como el artículo 57: “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad

pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”.

Esta Ley regulará el Saneamiento del Derecho Propietario de Inmuebles Urbanos. En Bolivia, uno de los principales problemas es la falta de saneamiento del derecho propietario de bienes inmuebles, cuyos factores de incidencia son los trámites burocráticos de inscripción del derecho propietario y sus costos elevados, aspectos que impiden el acceso de este derecho a gran parte de la población, lo que determina que esta población también se vea impedida de acceder a créditos, transferir su derecho propietario afectando económicamente a las familias propietarias. Considerando esta problemática, se propone adicionalmente las siguientes medidas:

- ✓ Modificación del Código de Procedimiento Civil para permitir procedimientos sumarios para adquirir la propiedad con otras modalidades simplificadas.
- ✓ Modificación y actualización del sistema legal de Derechos Reales.
- ✓ Creación de una oficina estatal pública de saneamiento del Derecho Propietario con asistencia gratuita.
- ✓ Establecer un ente público que articule las políticas municipales de Catastro con las del INRA de saneamiento y la de registro propietario de Derechos Reales.

Esta ley deberá tratarse también en la Comisión de Constitución, legislación y sistema electoral; así como en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

6. LEY DE CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINA

Esta Ley establecerá las bases para la conformación de la Región Metropolitana Andina a partir de la base constitucional para la conformación de regiones que está establecida en el artículo 280 de la CPE:

“Artículo 280. I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio

de planificación y gestión. Excepcionalmente una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por sí sola tenga las características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse regiones metropolitanas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. Donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales. III. La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental”.

La REGIÓN METROPOLITANA ANDINA abarcaría la jurisdicción de los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla, El Alto, La Paz, Viacha, Pucarani y Laja; con el propósito de dar soluciones integrales y de alcance metropolitano al menos a los siguientes aspectos de urgente atención: i) tratamiento y recojo de basura (MICROEMPRESAS DE RECOJO Y RECICLAJE), ii) conservación del medio ambiente (PRESERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS), iii) abastecimiento de agua potable y alcantarillado (EMPRESAS MUNICIPALES Y METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), iv) transporte masivo (METROBUS) y, v) actividad económico-productiva industrial y agropecuaria (PARQUE INDUSTRIAL Y FERIA METROPOLITANO).

Esta Ley regulará la conformación del Consejo Regional Metropolitano con la participación de los ocho Gobiernos Municipales, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el nivel central del Estado para articular la concurrencia de la inversión pública local, departamental y nacional, en torno al Plan de Desarrollo de la Región Metropolitana Andina concertado entre todos los actores públicos y privados de la región. Su finalidad es superar las diferencias hoy existentes entre los ocho municipios que albergan al 70% de la población del Departamento de La Paz en cuanto a niveles de pobreza, servicios básicos, nivel de escolaridad e Índice de Desarrollo Humano.

INDICADORES BÁSICOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINA

Municipio	Cat	Pob. 2001	Km ²	Densidad poblac.	Tasa crec.	Pob. Estimada	Nivel de pobreza	Indice de Migración	Servicios básicos	Nivel de escolaridad	IDH 2001
La Paz	D	793.293	1.973	402	1,11	866.536	34,47	-12,01	86,82	10,6	0,714
El alto	D	649.958	346	1877,1	5,1	967.625	66,9	18,53	85,89	8,0	0,638
Viacha	C	46.596	845	55,2	2,66	57.486	79,02	-0,14	40,85	6,3	0,608
Pucarani	C	26.802	927	28,9	1,75	30.792	97,71	-12,08	16,23	4,7	0,577
Laja	B	16.311	680	24	1,16	17.888	98,81	-16,12	14,45	5,5	0,558
Achocalla	B	15.110	193	78,1	1,54	17.075	99,1	5,62	32,88	5,4	0,592
Palca	B	14.185	734	19,3	1,49	15.967	98,7	-12,87	47,34	3,9	0,539
Mecapaca	B	11.782	526	22,4	2,25	14.078	81,66	-1,06	31,48	5,3	0,583
TOTAL		1.574.037	6.224	252,9		1.987.447					
% al Dpto			3,80%			70,20%					

7. LEY DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

El Propósito de esta Ley está orientado a facilitar la regularización de obligaciones tributarias municipales que están pendientes sea por temas de fiscalización o por acumulo de sanciones pecuniarias e intereses generados por el incumplimiento de pago. También debe generar mecanismos que faciliten la actualización del registro de inmuebles en el Catastro Municipal.

Esta Ley determinará los mecanismos en los que la ciudadanía de un municipio determinado pueda acceder a este beneficio, estableciendo descuentos, exenciones e incentivos tributarios en lo que hace al dominio tributario municipal, fundamentalmente en el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores y Patentes Municipales Permanentes.

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, CULTURAS E INTERCULTURALIDAD

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural; 2) Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; y 3) Comité de la Hoja de Coca.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Para dar cumplimiento y regular lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica,

histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley”.

2. LEY DE DEMOCRACIA COMUNITARIA

Esta ley deberá dar cumplimiento y regular lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 11.** ...II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: ...3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. II. El derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos. 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. 4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.

Artículo 210. I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos. II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y

mujeres. III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria”.

Esta ley deberá ser tratada también por la Comisión de Constitución, legislación y sistema electoral.

3. LEY DE REVALORIZACIÓN, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 384 de la CPE:

“**Artículo 384.** El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

4. LEY DEL LIBRO, FOMENTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Bolivia es el único país de Sudamérica que no cuenta con una Ley del libro y fomento a la producción editorial y al hábito de la lectura. Ya es hora que nuestro país se dote de un instrumento legal y políticas públicas que fomenten y protejan la producción bibliográfica nacional, la divulguen y el hábito de la lectura se universalice a través de políticas públicas permanentes tanto del nivel central del estado como de las Entidades Territoriales Autónomas.

El propósito de esta Ley es asumir como una política de Estado y de interés público la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial boliviana.

Esta Ley tiene por objeto la protección y el fomento de la industria editorial, el estímulo del hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro como uno de los factores principales en la difusión de la cultura, transmisión de conocimientos, la formación educativa, el fomento de la investigación científica social y la conservación del patrimonio del Estado Plurinacional y su diversidad intercultural. Para ello esta ley impulsará las medidas necesarias que permitan mejorar las condiciones de edición, producción, impresión, comercialización,

distribución y circulación del libro en todo el territorio nacional. Las medidas que esta ley deberá regular incluyen estímulos tributarios, de fondo editorial y de fomento nacional, departamental y municipal destinado a respaldar la tarea del editor y escritor boliviano y boliviana; fortalecimiento y apertura de bibliotecas, centros de difusión y promoción del libro; estimular la producción intelectual de los escritores y autores bolivianos tanto de obras científicas como culturales; estimular el hábito de la lectura; aumentar y apoyar sustancialmente las exportaciones de libros bolivianos; y ofrecer a escritores y empresas editoriales las condiciones que hagan posible el logro de los objetivos desarrollados en esta Ley.

Esta Ley deberá dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes disposiciones constitucionales:

“Artículo 98. ...III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley”.

5. LEY DE FOMENTO A LAS CULTURAS E INTERCULTURALIDAD

El fomento y respeto a la diversidad cultural en el marco de un diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe será fundamental para garantizar la construcción colectiva y democrática del nuevo Estado Plurinacional descentralizado y con autonomías, dando cumplimiento de lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado:

“Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe....

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país”.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por dos Comités: 1) Comité de Educación; y 2) Comité de Salud, Deportes y Recreación.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY “AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PERES” DEL SISTEMA ÚNICO Y GESTIÓN CONCURRENTES DE EDUCACIÓN

Esta Ley debe regirse al mandato constitucional establecido en el Capítulo Sexto (artículos 77 al 90) referido a la Educación, interculturalidad y derechos culturales. La nueva Constitución Política del Estado define que: “I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio” (CPE, Art. 77).

Esta Ley debe considerar además lo establecido en el artículo 298, Parágrafo II, inciso 17; referido a que es competencia exclusiva del nivel central del Estado definir las POLÍTICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y SALUD. Pero al mismo tiempo se debe considerar el artículo 299, Parágrafo II, inc. 2, referido a que la GESTIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y EDUCACIÓN ES UNA COMPETENCIA CONCURRENTES entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Dada la definición central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas; esta últimas ejercerán simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva en función de la legislación nacional en materia de educación.

2. LEY DEL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR Y UNIVERSIDADES PRIVADAS

Para dar cumplimiento y regular lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 94. I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley. II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado. III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas académicos en todas las

modalidades de titulación, se conformarán tribunales examinadores, que estarán integrados por docentes titulares, nombrados por las universidades públicas, en las condiciones establecidas por la ley. El Estado no subvencionará a las universidades privadas.

Artículo 97. La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley”.

3. LEY DEL SISTEMA ÚNICO Y GESTIÓN CONCURRENTES DE SALUD

Esta Ley debe regirse al mandato constitucional establecido en la Sección II, Capítulo Quinto (CPE, Arts. 35-45) referido al derecho a la salud y la seguridad social. La Constitución Política del Estado define que: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud... El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud y controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley”. La Ley debe considerar además lo establecido en el artículo 298, Parágrafo II, inciso 17; referido a que es competencia exclusiva del nivel central del Estado definir las POLÍTICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y SALUD; pero al mismo tiempo se debe considerar el artículo 299, Parágrafo II, inc. 2, referido a que la GESTIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y EDUCACIÓN ES UNA COMPETENCIA CONCURRENTES entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Dada la definición de competencia concurrente establecida en el artículo 297, las Entidades Territoriales Autónomas ejercerán simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva en función de la legislación nacional en materia de educación.

Asimismo, esta ley deberá regular los SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE SALUD en función de lo establecido en la nueva CPE en los siguientes artículos:

“Artículo 36. ...II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley.

Artículo 39. I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.

Artículo 42. ...III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio”.

Finalmente esta Ley deberá regular y dar cumplimiento en materia de DONACIONES Y TRASPLANTES a lo establecido en el artículo 43 de la CPE:

“**Artículo 43.** La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia”.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por dos Comités: 1) Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades; y 2) Comité de Derechos de Género.

En esta Comisión se debería impulsar leyes que garanticen la equidad social de género y generacional en todas las políticas públicas para superar el sexismo, el adultocentrismo, la situación de violencia y abandono en la que todavía viven niños y niñas en nuestro país; la necesidad de proteger y brindar oportunidades de transmitir sus saberes de nuestros adultos mayores, y respetar la dignidad y necesidad de ser tratados como iguales a las personas con diferente discapacidad y opción sexual.

La protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, deben ser parte de los objetivos fundamentales de la legislación para la vida que se debata en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La importancia de los temas de la Agenda Específica de las mujeres, para traducir los derechos reconocidos en la Constitución, en un nuevo marco normativo, o la adecuación del existente, debe hacer énfasis en los siguientes derechos definidos por movimientos sociales de mujeres: 1) A una vida libre de violencia, física, sexual y psicológica. 2) A la participación política, en equidad de género e

igualdad de oportunidades, básicamente incorporando el binomio en los procesos electorales. 3) Al ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 4) A una maternidad segura e intercultural. 5) A la tenencia, herencia y titularidad de la tierra de las mujeres. 6) Al reconocimiento y la valoración del trabajo domésticos. 7) A los derechos laborales y seguridad social de las mujeres. 8) A una educación libre de roles tradicionalmente asignados, haciendo énfasis en la malla curricular educativa con enfoque de género. 9) A la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges, y la democratización de roles. 10) Igualdad de condiciones en la responsabilidad del hogar educación y formación de hijas e hijos. 11) A la presunción de paternidad y certificados de nacimiento para las y los recién nacidos. 12) A la libertad de conciencia y religión. 13) Al reconocimiento de la equidad social y de género. 14) A la Igualdad de Oportunidades y no discriminación, en todos los ámbitos de la vida política, jurídica, social y económica de las y los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ya es hora de preocuparnos en serio del vivir bien de las niñas y niños. Para ello la Asamblea Legislativa Plurinacional debería liderizar la legislación y programas especiales que exige la situación de la niñez en nuestro país. Por ello se recomienda impulsar las siguientes políticas públicas:

Programa NIÑAS Y NIÑOS NUESTRO CORAZÓN. Para proteger y promover al principal recurso humano del país. Programa integral destinado a la atención preferente de uno de los grupos más vulnerables de la población: los niños y niñas de entre 0 y 12 años, especialmente de aquellas familias con menores ingresos. Comprende acciones en materia de nutrición, salud, fortalecimiento educativo y reinserción familiar, con sub-programas especiales para cada uno de los segmentos específicos comprendidos en el grupo de edades arriba mencionado. Se sugiere la conformación de un equipo de trabajo –con una Delegación Presidencial para el programa- y con participación de la Vicepresidencia, de los Ministerios de Salud, Justicia, Planificación del Desarrollo, representantes de organizaciones sociales de mujeres, representantes de la niñez, representantes de las Iglesias, y representantes de las Entidades Territoriales Autónomas, con la tarea de entregar un programa detallado, con presupuestos, mecanismos operativos, responsables por área, responsables de monitoreo y coordinación, etc. A fin de hacer sostenible

el programa, de reforzar los recursos financieros y de no utilizar exclusivamente recursos de los hidrocarburos –aunque estos deben ser la base de financiamiento del programa y la contraparte del país-, existe la posibilidad de obtener una canasta de fondos de cooperación de diversas agencias y organismos financieros, exclusivamente para obtener recursos adicionales para este programa.

Los subprogramas tienen que ver con las siguientes acciones: i) entrega diaria de una dieta extraordinaria para los niños y niñas de entre 0 y 5 años de alimentos esenciales; ii) subprograma destinado a brindar condiciones de vida digna a los “niñas y niños de la calle” con programas de capacitación en oficios técnicos que les permita acceder a fuentes de empleo estables; líneas de microcrédito y creación de albergues y comedores especiales logrando a mediano plazo no tener una sola niña o niño en la calle; iii) subprograma “Ch’itis seguros” destinado a prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y niños; iv) subprograma “Ch’itis sanos” de desparasitación infantil y carnet sanitario infantil, monitoreado por el Ministerio de Salud, para desparasitar a todos los niños y niñas menores de 12 años; y v) subprograma almuerzo escolar que permitirá dinamizar cadenas productivas, ya que el almuerzo, que podría ser entregado por medio de los municipios, de acuerdo a los hábitos alimenticios de cada región, utilizando exclusivamente productos nacionales adquiridos directamente a los productores.⁵

La Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribuciones de legislar, gestionar, fiscalizar y coordinar, debe involucrarse solidaria y activamente a favor de políticas públicas, en este caso a favor de nuestra niñez para hacer del Órgano Legislativo un cuerpo colegiado comprometido con su comunidad, desburocratizado y con activa conciencia social.

Finalmente un programa que debería ser encarado de manera estructural por el nivel central del Estado y en especial por las Entidades Territoriales Autónomas es el denominado AMIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, haciendo que Presidente, Vicepresidente, Diputados, Senadores, Alcaldes, Gobernadores, máximas autoridades de los otros Órganos del Estado, dirigentes sociales, empresarios y comunidad toda nos declaremos ser amigos o amigas de la niñez y adolescencia y por

5. Estas propuestas para la niñez han sido pensadas por Pedro Susz, Director de Gobernabilidad del GMLP.

tanto obremos en consecuencia. Un Estado que no trabaja por su futuro, protegiendo y dotando de condiciones de felicidad y vivir bien para la niñez y adolescencia es un Estado no solo aparente sino nefasto y cruel, que no merece existir. Hoy tenemos la oportunidad histórica de contribuir a la construcción de un Estado no solamente Plurinacional sino sencillamente humano, aplicando a cabalidad los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política del Estado.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE LA JUVENTUD

Esta Ley regulará el cumplimiento del mandato constitucional establecido en la Constitución Política del Estado que establece que: “El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley” (CPE, Art. 59, inc. V).

2. LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DOMÉSTICA (Adecuación a la CPE)

Para adecuar y dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado en sentido de que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes... Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad... El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (CPE, Art. 15). Así como el artículo 61 que: “...prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y

social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”; el artículo 68 que:” prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”; y el artículo 71 que estipula que: “Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad”.

3. LEY CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN

Para dar estricto cumplimiento al mandato constitucional de que: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (CPE, Art. 14, inc. II).

Esta ley debería ser transversal prácticamente a todas las Comisiones con el propósito de penalizar esta práctica en todas las áreas del Estado, la Economía y la Sociedad para erradicarla definitivamente.

4. CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (Adecuación a la CPE)

Su adecuación deberá realizarse acorde a los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado.

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”.

5. LEY DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Adecuada a la CPE)

Su adecuación deberá realizarse acorde a los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 64.** I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley”.

6. LEY DEL ADULTO MAYOR (Adecuada a la CPE)

Su adecuación deberá realizarse acorde a los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 67.** I. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley.

Artículo 68. I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”.

Finalmente en la Comisión de Derechos Humanos se podrían recuperar y adecuar a la CPE las Leyes que se encuentran rezagadas en su tratamiento en la anterior legislatura, respecto a normativa en beneficio de las mujeres como:

- a. Ley Integral para garantizar una vida libre sin violencia, Acoso sexual en ámbitos laborales y educativos.
- b. Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de Género.
- c. Ley Integral contra Trata y Tráfico de Personas, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Senadores de la anterior legislatura.
- d. Ley para Presupuestos Sensibles a Género.
- e. Ley de Pensiones con Enfoque de Género.
- f. Ley SU SALUD con perspectiva de Género.

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Trabajo y Régimen Laboral; 2) Comité de Seguridad Social y de Protección Social; y 3) Comité de Hábitat, Vivienda y Servicios Básicos.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE FOMENTO A LA VIVIENDA

Esta Ley regulará el cumplimiento del mandato constitucional establecido en la nueva Constitución Política del Estado que establece que: “I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural” (CPE, Art. 19).

2. CÓDIGO LABORAL (Adecuado a la CPE)

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la nueva CPE:

“Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de

primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.

Artículo 49. I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales. III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.

Artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social.

Artículo 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

Artículo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley”.

3. LEY DE REGULACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

De acuerdo al Art. 20 de la CPE, esta Ley tendrá el objeto de normar el derecho de toda persona al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El mismo artículo constitucional establece que: "...II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley" (CPE, Art. 20).

COMISIÓN DE GOBIERNO, DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por cuatro Comités: 1) Comité de Gobierno y Policía Boliviana; 2) Comité de Defensa, FF.AA., Fronteras y Defensa Civil; 3) Comité de Lucha Contra el Narcotráfico; y 4) Comité de Seguridad Ciudadana.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (Adecuada a la nueva CPE)

Si bien es cierto que las estadísticas muestran una sociedad cada vez menos segura, con miedo y vulnerable a diversas expresiones de conflicto, violencia y crimen organizado, cuyas causas suelen atribuirse a problemas económicos, demográficos, fractura social y procesos de urbanización y modernización de la sociedad, no es menos evidente que también se debe, al conjunto de debilidades institucionales que dificultan la construcción de una democracia más

inclusiva y un Estado de Derecho confiable y eficaz. Gran parte de la responsabilidad de la seguridad pública descansa en las funciones y deberes que debe cumplir el Estado. Empero, sus instituciones se desempeñan de manera cuestionable.

La seguridad ciudadana está definida en la nueva Constitución Política del Estado como una competencia concurrente entre el nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas, por tanto la tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de aprobar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana debería ser la de fiscalizar para que todas las entidades públicas cumplan con sus obligaciones en ésta materia; especialmente la Policía Boliviana, la Justicia (Jueces y fiscales), el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, la Prefectura o futuro Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Municipales. Pero si no logramos un involucramiento de nuestra comunidad, tanto de sus dirigentes como de la ciudadanía en general, en los barrios, en los establecimientos educativos (públicos y privados), en los locales públicos y áreas de equipamiento; la sola acción de las entidades públicas será insuficiente; por ello en materia de seguridad ciudadana esta Ley y las políticas públicas que de ella se deriven deberá abordar al menos los siguientes aspectos:

- ✓ Creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que establezca Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana en función de la Competencia Concurrente en esta materia definida por la CPE.
- ✓ Fortalecimiento y construcción de Estaciones Policiales Integrales de seguridad ciudadana dotadas de adecuada infraestructura y equipamiento; tomando en cuenta zonas estratégicas con densidad poblacional e incidencia de delincuencia, concordantes y en efectiva concurrencia con los Planes Municipales, Departamentales y de la Policía Boliviana en materia de Seguridad Ciudadana. Estas Estaciones Policiales Integrales permitirán el fortalecimiento del Modelo de Policía Comunitaria en todos los municipios, para la aplicación de un nuevo concepto de seguridad preventiva con énfasis en los derechos humanos, con capacidad para resolver conflictos ciudadanos, disponibilidad de equipos y sistemas de información adecuados para combatir eficazmente la criminalidad.

- ✓ Profesionalización especializada y tecnificación de la Policía Boliviana para contar con una Policía preventiva, proactiva y próxima a la ciudadanía.
- ✓ Reforma y Modernización del Órgano Judicial, para una administración de Justicia eficiente para la seguridad ciudadana.
- ✓ Organización y fortalecimiento de Consejos Municipales, Macrodistritales, Distritales y Barriales de seguridad ciudadana con participación y control social efectivos, articulados con las redes institucional y social.
- ✓ Creación de Observatorios Municipales de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Boliviana y las instancias pertinentes de los Gobiernos Municipales, que desarrolle un Sistema de Información en Red y Seguimiento a las tareas, planes, programas, zonas de riesgo y acciones ejecutadas por las diversas instituciones públicas y privadas.
- ✓ Promoción y apoyo logístico a la formación integral y participativa de Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Boliviana y las instancias pertinentes de los Gobiernos Municipales, para contar en todos los establecimientos escolares (públicos y privados) con permanente vigilancia. Incorporación de la temática de seguridad ciudadana y la prevención en la currícula escolar.
- ✓ Gestación de espacios gratuitos de promoción y difusión de la temática de seguridad ciudadana en los medios de comunicación masivos.
- ✓ Desarrollo de un sistema moderno de Tarjetas de identificación del conductor, y sistema efectivo de control en seguridad vial (radares, velocímetros y alcoholímetros).
- ✓ Modernizar la base de datos de la Policía Boliviana con el desarrollo del Sistema de Datos Biométricos, estableciendo en esta Ley de Seguridad Ciudadana que la Policía Boliviana haga uso del Padrón Biométrico de la Corte Nacional Electoral para combatir y perseguir el delito con rapidez y eficacia a través del uso de los datos dactilares.
- ✓ Regulación de la actividad de la “seguridad privada” conectada en red con la Policía Boliviana, que cuente con registros y autorización de funcionamiento de la autoridad competente.

- ✓ Desarrollo de una normativa más estricta y acciones efectivas de la autoridad municipal en el control del consumo y venta indiscriminada de bebidas alcohólicas.

2. LEY DE SEGURIDAD VIAL

Esta ley deberá regular el control efectivo de los vehículos, especialmente los que prestan servicio público de transporte; reglamentando el uso y penalidades (ante el incumplimiento) de los sistemas de identificación y controles viales establecidos; para controlar y sancionar los “accidentes” de tránsito especialmente en el servicio de transporte interdepartamental e interprovincial; así como precautelar la seguridad de los conductores y usuarios del transporte público.

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la CPE:

“**Artículo 76.** I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores”.

Lamentablemente, el servicio de transporte terrestre, especialmente en las rutas interprovinciales e interdepartamentales, se ha vuelto un tema de seguridad pública nacional por la cantidad de muertos y heridos que viene provocando este servicio que está poniendo en riesgo la seguridad física de la ciudadanía y que es preciso encararla con políticas públicas efectivas; partiendo de la legislación.

Lo que ha estado ocurriendo los últimos años es una clara dispersión de responsabilidades no asumidas por las autoridades competentes, donde la Policía Boliviana a través del Organismo Operativo de Tránsito, las entidades llamadas a regular el servicio, el Órgano Ejecutivo, Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales no están respondiendo y actuando a la altura del desafío, en parte por negligencia, escasos recursos humanos y económicos y sobre todo por una normativa también dispersa y poco clara en los roles institucionales.

Por otro lado, salvando honrosas excepciones, tenemos operadores privados acostumbrados a eludir la norma y prestar el servicio sin invertir en medidas elementales de seguridad para los pasajeros, lo que significaría sacrificar sus ingresos, actuando con negligencia y peligrosas deficiencias en la prestación del servicio.

Por ello urge elaborar esta Ley que contemple lo establecido en la CPE sobre todo en las competencias distribuidas tanto al nivel central del Estado como a las Entidades Territoriales Autónomas en materia del transporte terrestre. Así tenemos la siguiente distribución competencial:

COMPETENCIA EXCLUSIVA del nivel central del Estado: Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento (Art. 298, inc. II-32, CPE).

COMPETENCIA EXCLUSIVA de los gobiernos departamentales autónomos: Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento (Art. 300, inc. I-9, CPE).

COMPETENCIA EXCLUSIVA de los gobiernos municipales autónomos: Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano. (Art. 302, inc. I-18, CPE).

La CPE define como competencias exclusivas: "...aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas" (Art. 297, inc. I-2, CPE). Esto significa que la legislación en esta materia será tanto del nivel central del Estado como de las Entidades Territoriales Autónomas departamentales y municipales, lo que hará imprescindible la armonización legislativa entre los tres niveles del Estado. Esta Ley de Seguridad Vial podría ser el comienzo de dicha armonización, al menos en lo que se refiere a seguridad ciudadana en las carreteras.

3. LEY DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

Mediante esta Ley, los mercados ilegales de armas, municiones y explosivos serán objeto del mayor control estatal. Se deberá penalizar el uso de armas no autorizadas pero al mismo tiempo se debería ejercer el más estricto control sobre las importaciones, producción, tenencia y circulación de armas, municiones y explosivos.

4. LEY DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 de la CPE:

“Artículo 139. ...III. Los estados de excepción serán regulados por la ley”.

5. LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS (Adecuada a la CPE)

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 243. Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.

Artículo 245. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley.

Artículo 247. I. Ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General. II. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de grandes unidades, será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos que señale la ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser Viceministra o Viceministro del Ministerio de Defensa.

Artículo 248. El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, cuya composición, organización y atribuciones determinará la ley, estará presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 249. Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley.

Artículo 250. Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva”.

6. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA BOLIVIANA (Adecuada a la CPE)

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.

Artículo 253. Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, General de la institución, y reunir los requisitos que señala la ley”.

7. LEY DEL RÉGIMEN DE FRONTERAS

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 263. Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia física permanente en ellas.

Artículo 264. I. El Estado establecerá una política permanente de desarrollo armónico, integral, sostenible y estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de su población, y en especial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos fronterizos. II. Es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos naturales en las áreas fronterizas. III. La regulación del régimen de fronteras será establecida por la ley”.

Esta Ley deberá también regular y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 262 de la CPE referido a excepciones a la propiedad en zonas de seguridad fronteriza:

“Artículo 262. I. Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo ni subsuelo; excepto en el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa

Plurinacional. La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de esta prohibición pasarán a beneficio del Estado, sin ninguna indemnización. II. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a un régimen jurídico, económico, administrativo y de seguridad especial, orientado a promover y priorizar su desarrollo, y a garantizar la integridad del Estado”.

8. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS, FLUVIALES Y LACUSTRES

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 268 de la CPE:

“**Artículo 268.** El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley”.

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL MIGRANTE

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por dos Comités: 1) Comité de Política Internacional, Protección al Migrante y Organismos Internacionales; y 2) Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE NATURALIZACIÓN

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 142 de la CPE:

“**Artículo 142.** I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal, con más de tres años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley”.

2. LEY DE TRATADOS INTERNACIONALES APROBADOS MEDIANTE REFERENDO

Para regular y dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. II. Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación los tratados internacionales que impliquen: 1. Cuestiones limítrofes. 2. Integración monetaria. 3. Integración económica estructural. 4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de integración.

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.

Artículo 259. I. Cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, o el treinta y cinco por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas iniciativas podrán utilizarse también para solicitar al Órgano Ejecutivo la suscripción de un tratado. II. El anuncio de convocatoria a referendo suspenderá, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, el proceso de ratificación del tratado internacional hasta la obtención del resultado.

Artículo 260. I. La denuncia de los tratados internacionales seguirá los procedimientos establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del Derecho internacional, y los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para su ratificación. II. La denuncia de los tratados ratificados deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de ser ejecutada por la Presidenta o Presidente del Estado. III. Los tratados aprobados por referendo deberán ser sometidos a un nuevo referendo antes de su denuncia por la Presidenta o Presidente del Estado”.

COMISIÓN DE REGIÓN AMAZÓNICA, TIERRA, TERRITORIO, AGUA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

De acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados esta Comisión está compuesta por tres Comités: 1) Comité de Región Amazónica, Tierra y Territorio; 2) Comité de Recursos Naturales,

Hídricos y Agua; y 3) Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales.

Los Proyectos de Ley, derivados de la CPE y relacionados con esta Comisión, que deberían ser considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional serían los siguientes:

1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS

Dado el cambio climático que está ocurriendo en el mundo se hace imprescindible la definición de políticas de Estado en materia de recursos hídricos dando cumplimiento y regulando lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad

alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades. III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población.

Artículo 377. I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado. II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos”.

Al momento de considerar el tratamiento de esta Ley es preciso remitirse también a la distribución de competencias en esta materia entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuida por Materia de acuerdo a la CPE, al final de esta misma publicación).

2. LEY DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL, DE ÁREAS PROTEGIDAS, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD O LEY DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA MADRE TIERRA

Adecuando la Ley de Medio Ambiente todavía en vigencia a la Constitución Política del Estado, esta Ley tiene el propósito de regular el aprovechamiento de los recursos naturales renovables de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema; garantizando el equilibrio ecológico; el Patrimonio Natural; la preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción.

Al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 346.** El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y

aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.

Artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación.

Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley.

Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio.

Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad”.

Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. II. Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.

Al momento de considerar el tratamiento de esta Ley es preciso remitirse también a la distribución de competencias en esta materia entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidas por Materia de acuerdo a la CPE, al final de esta misma publicación).

3. LEY DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 358 de la CPE:

“**Artículo 358.** Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento”.

Al momento de considerar el tratamiento de esta Ley es preciso remitirse también a la distribución de competencias en esta materia entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidas por Materia de acuerdo a la CPE, al final de esta misma publicación).

4. LEY DE RECURSOS FORESTALES

Al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 386.** Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor

de comunidades y operadores particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.

Artículo 388. Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley.

Artículo 389. I. La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros, sólo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de planificación y conforme con la ley. II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de agua. III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados”.

Al momento de considerar el tratamiento de esta Ley es preciso remitirse también a la distribución de competencias en esta materia entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (Ver Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidas por Materia de acuerdo a la CPE, al final de esta misma publicación).

5. LEY DE DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 358 de la CPE:

“Artículo 390. I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones. II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturrealde del departamento de La Paz y las provincias Vaca

Díez y Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonia boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país.

Artículo 391. I. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente. II. El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional. III. El Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la amazonia, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonia, para promover actividades propias de la región.

Artículo 392. I. El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales. II. Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siranga y del castaño, símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley”.

6. LEY DE PROPIEDAD AGRARIA INDIVIDUAL Y COMUNITARIA

O LEY DEL SERVICIO BOLIVIANO DE REFORMA AGRARIA

(Adecuación de la ley INRA de reconducción comunitaria a la CPE)

Al momento de considerar esta ley se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los siguientes artículos de la CPE:

“**Artículo 393.** El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

Artículo 394. I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios

particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos. II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad.

Artículo 395. I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. II. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra.

Artículo 396. I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado.

Artículo 397. I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la

fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social.

Artículo 398 (opción aprobada en el Referendo Dirimitorio). Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas.

Artículo 399. I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley. II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos.

Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad.

Artículo 401. I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de una indemnización justa.

Artículo 402. El Estado tiene la obligación de: 1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. 2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país”.

V. COMPETENCIAS PRIVATIVAS, EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS O CONCURRENTES AL MOMENTO DE LEGISLAR SOBRE UNA MATERIA

La Asamblea Legislativa Plurinacional, al momento de tratar el listado de leyes explicado más arriba u otras iniciativas legislativas, deberá considerar si la materia sobre la que se pretende legislar es una competencia privativa o exclusiva del nivel central del Estado; compartida o concurrente con las Entidades Territoriales Autónomas; o si se trata más bien de una competencia exclusiva de alguna de las Entidades Territoriales Autónomas.

Toda competencia que no esté incluida entre las 199 transferidas por la Constitución, será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley; de acuerdo a lo estipulado en el artículo 297, inciso II; definiendo lo que algunos “expertos” en el tema llaman, “cláusula residual” a favor del nivel central del Estado. Para una mejor visualización y comprensión de las competencias, en el Anexo 3 Distribución del Catálogo de Competencias por Materia de acuerdo a la Constitución, encontrará un cuadro didáctico que ayuda a ver la distribución de las 199 competencias catalogadas y transferidas en la CPE tanto al nivel central del Estado como a las Entidades territoriales Autónomas.

Es por ello que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe considerar que es su responsabilidad legislar sobre SUS COMPETENCIAS PRIVATIVAS, definidas como “... aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado” (Art. 297, I. 1, CPE). Las competencias privativas del nivel central del Estado son (Art. 298, I, CPE):

1. Sistema financiero.
2. Política monetaria, Banco Central, sistema monetario, y la política cambiaria.
3. Sistema de pesas y medidas, así como la determinación de la hora oficial.
4. Régimen aduanero.
5. Comercio Exterior.
6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana.
7. Armas de fuego y explosivos.
8. Política exterior.
9. Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio.
10. Control de fronteras en relación a la seguridad del Estado.
11. Regulación y políticas migratorias.
12. Creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado.
13. Administración del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas del nivel central del Estado.
14. Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.
15. Registro Civil.
16. Censos oficiales.
17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación.
18. Hidrocarburos.
19. Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado.
20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral.
22. Política económica y planificación nacional.

Al momento de considerar el listado de leyes explicado más arriba u otras iniciativas legislativas, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá legislar también sobre las COMPETENCIAS EXCLUSIVAS del nivel central del Estado, que a diferencia de las privativas y dependiendo de la materia, se podrían transferir o delegar, facultades reglamentarias y/o ejecutivas, a las Entidades Territoriales Autónomas. Esta es una enorme posibilidad que se abre, en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para un escenario de concertación con los gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas y la participación de la ciudadanía, para reflexionar sobre la pertinencia o no de transferir o delegar dichas funciones. La CPE define a las competencias exclusivas como: "...aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas". (Art. 297, I. 2, CPE). Las competencias exclusivas del nivel central del Estado son (Art. 298, II, CPE):

1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales.
2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones.
3. Servicio postal.
4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.
5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.
6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.
7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques.
8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado.
9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental.
10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y ferrocarriles de la Red Fundamental.
11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.

12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia.
13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.
14. Otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen Actividades en más de un Departamento.
15. Otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento.
16. Régimen de Seguridad Social.
17. Políticas del sistema de educación y salud
18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal.
19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.
20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales.
21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.
22. Control de la administración agraria y catastro rural.
23. Política fiscal
24. Administración de Justicia
25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.
26. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al procedimiento establecido por Ley.
27. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros de interés del nivel central del Estado.
28. Empresas públicas del nivel central del Estado.
29. Asentamientos humanos rurales

30. Políticas de servicios básicos
31. Políticas y régimen laborales
32. Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a mas de un departamento.
33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial
34. Deuda pública interna y externa
35. Políticas generales de desarrollo productivo
36. Políticas generales de vivienda
37. Políticas generales de turismo
38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.

De la misma manera, la Asamblea Legislativa Plurinacional, al momento de tratar una Ley deberá analizar si la materia, sobre la que se pretende legislar, es una COMPETENCIA CONCURRENTE con las Entidades Territoriales Autónomas. La CPE define a las competencias concurrentes como: "...aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva". (Art. 297, I. 3, CPE). Las competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas son (Art. 299, II, CPE):

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
2. Gestión del sistema de salud y educación.
3. Ciencia, tecnología e investigación.
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
5. Servicio metereológico.
6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.
8. Residuos industriales y tóxicos.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos
10. Proyectos de riego.
11. Protección de cuencas.
12. Administración de puertos fluviales
13. Seguridad ciudadana.
14. Sistema de control gubernamental.
15. Vivienda y vivienda social.
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca

Finalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, al momento de tratar una Ley deberá analizar si la materia, sobre la que se pretende legislar, es una COMPETENCIA COMPARTIDA. La CPE define a las competencias compartidas como: "...aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas". (Art. 297, I. 4, CPE). Las competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas son (Art. 299, I, CPE):

1. Régimen electoral departamental y municipal.
2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.
3. Electrificación urbana
4. Juegos de lotería y de azar.
5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado.
6. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal.
7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.

VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y AUTONOMÍAS

Implementar el régimen autonómico establecido en la CPE no va a ser una tarea sencilla fundamentalmente porque el tema y su implementación viene precedida de un clima de confrontación desatado por los grupos de poder regionales que entienden, a su manera, las autonomías y que no terminan de asimilar que la autonomía ya no es una consigna de nadie sino un mandato constitucional, cuyas características, alcances, estructura, competencias y modalidades están definidas en la Tercera Parte de la CPE denominada Estructura y Organización Territorial del Estado.

Por otro lado, la igualdad del rango constitucional, la jerarquía normativa y el catálogo competencial obliga a emprender una enorme voluntad política entre el nivel central del Estado y quienes conducirán las Entidades Territoriales Autónomas, fruto de la voluntad popular expresada en las Elecciones del 4 de abril del 2010, a fin de crear sólidos escenarios de concertación. Lo contrario significará poner en riesgo su implementación generando nuevos escenarios de confrontación que espero nadie los desee ni estimule, como ha ocurrido durante el primer gobierno del Presidente Evo Morales que se tuvo que enfrentar a Prefectos y “líderes” regionales obstinados en auto asignarse el rol de oposición que estuvo a punto de llevar al país a una confrontación civil de imprevisibles consecuencias.

La decisión del Presidente Morales de someterse a Referendo Revocatorio, realizado el 10 de agosto del 2008, marcó la consolidación de su liderazgo nacional y el debilitamiento de la oposición regional. Como resultado del Referendo, donde el Presidente fuera ratificado con

el 67,41 % del total de los votos válidos, así como los principales Prefectos de oposición; la fuerza corporativa de los Prefectos fue debilitada con la revocatoria de su mandato de dos Prefectos opositores (Manfred Reyes Villa de Cochabamba y José Luis Paredes de La Paz). Esto posibilitó un nuevo escenario propicio para iniciar un necesario proceso de concertación demandado por la ciudadanía en torno a modificaciones al Proyecto de Constitución que fuera aprobado en diciembre del 2007 por la Asamblea Constituyente.

Es así que se instaló un difícil proceso de concertación con Prefectos, Alcaldes y Pueblos Indígena Originario Campesinos en septiembre del año 2008 en la ciudad de Cochabamba⁶, que se materializaría en un nuevo Capítulo referido a la Organización Territorial del Estado y las autonomías. Esto abrió la concertación en el Congreso con importantes modificaciones, tanto de forma como de fondo, a 126 artículos y 11 Disposiciones Transitorias del proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, transformándose virtualmente el Parlamento en Congreso Constituyente. Ello posibilitó finalmente en fecha 21 de octubre de 2008, la aprobación de la esperada Ley de Convocatoria al Referendo de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado programado para el 25 de enero del año 2009.

Fruto del proceso de concertación es que la nueva Constitución Política del Estado incluye una propuesta de organización territorial del Estado y régimen de autonomías; que sin duda significará una profunda transformación estructural del Estado.

Para entender de manera sintética el alcance del régimen autonómico que está establecido en la CPE, debemos hacer referencia a tres artículos fundamentales de la CPE que marcarán la compleja implementación de las autonomías plenas: el artículo 272 establece como una de las cualidades inherentes a la autonomía la FACULTAD LEGISLATIVA; con lo que se rompe definitivamente con el

6. El autor de este libro, entonces Viceministro de Descentralización, coordinó este proceso de concertación desarrollado en la ciudad de Cochabamba, bajo la conducción del entonces Ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero. El diálogo empezó el día jueves 18 de septiembre y concluyó el día domingo 5 de octubre de 2008 con la firma de un documento que contenía la propuesta de nuevo Capítulo de Autonomías a ser incorporado en la CPE. Este documento no fue suscrito por los Prefectos de "oposición" (Rubén Costas, Mario Cosío, Ernesto Suarez y Savina Cuellar) por mero cálculo político, perdiendo así su oportunidad de ser protagonistas del gran acuerdo nacional que se efectivizó en el Congreso. Con algunas variaciones este documento quedó insertado en el proyecto de Constitución aprobado por el Congreso mediante la Ley N° 3836 De convocatoria a referendo constituyente y dirimitorio, que viabilizó la aprobación de la CPE en el referendo del 25 de enero del 2009.

monopolio legislativo del nivel central del estado acabando de ésta manera efectivamente con el centralismo. El otro artículo esencial es el 276 que establece que las entidades territoriales autónomas no se subordinan entre sí, lo que quiere decir que no deberá existir tutela de una sobre otra, y en virtud de que tienen IGUAL RANGO CONSTITUCIONAL, sus disposiciones legislativas tienen la misma jerarquía normativa; esto se complementa con el artículo 410 que es el que define la nueva JERARQUÍA NORMATIVA constitucional de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: fijando en el tercer nivel jerárquico a las leyes nacionales, los Estatutos autonómicos, las Cartas Orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena.

IMPLEMENTACIÓN ASIMÉTRICA, GRADUAL, SOLIDARIA y DEMOCRÁTICA DE LAS AUTONOMÍAS

Implementar el régimen de las autonomías establecido en la nueva Constitución Política del Estado es entender sobre todo que se tratará de un proceso asimétrico, es decir, que en cada Departamento, Región, Municipio o Entidad Territorial Indígena Originario Campesina la implementación no puede ser homogénea, pues la misma se ajustará a sus especificidades departamentales, regionales, locales y/o culturales, así como a la capacidad institucional que muestren las respectivas Entidades Territoriales. Será un proceso necesariamente gradual en la medida que muchas competencias no necesariamente serán plenamente asumidas de una sola vez y de manera simultánea por todas las Entidades Territoriales. La implementación deberá ser solidaria a fin de generar un mecanismo de distribución y transferencias de recursos a las Entidades Territoriales que logre superar los desequilibrios departamentales, regionales y locales provocados por el actual sistema de distribución de recursos que exige compensaciones solidarias y mecanismos de distribución más equitativos. Finalmente la implementación debe ser democrática, sobre todo en la elaboración legislativa nacional, departamental y municipal que se avecina. Especialmente la Ley Marco de Autonomías, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, deben ser elaborados o cuando corresponda, adecuados a la CPE, con amplia participación de todos los actores sociales y territoriales. Solo así lograremos que la comunidad en su conjunto se involucre

plenamente en el desafío de construir el Estado autonómico y se eviten problemas de ingobernabilidad en las Entidades Territoriales Autónomas en sus respectivas Unidades Territoriales y, entre éstas y el nivel central del Estado.

La implementación del régimen de autonomías establecido en la nueva CPE implicará enfrentar los siguientes desafíos:

- i) Gestión, planificación y organización territorial: hacia la gestación de PACTOS TERRITORIALES** entre Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) al interior de cada Departamento para garantizar mínimos niveles de gobernabilidad democrática en la implementación del régimen de descentralización político-administrativa con autonomías establecido en la CPE. Para ello será necesario instaurar Consejos Autonómicos Departamentales con participación de todas las Entidades Territoriales Autónomas en cada uno de los Departamentos. En dichos Consejos se deberá armonizar aspectos referidos a la organización territorial, especialmente en lo que se refiere a las jurisdicciones territoriales para una efectiva gestión, planificación y organización territorial para el desarrollo de los pueblos y comunidades interculturales que habitan en cada territorio.
- ii) Distribución y generación de recursos: hacia un PACTO FISCAL**, que modifique el actual proceso de descentralización fiscal-financiera, que ha provocado enormes inequidades intra e inter departamentales generado por el actual sistema de distribución de recursos, fundamentalmente provenientes de la explotación de la riqueza hidrocarbúfera. En el Cuadro que a continuación se muestra, se pueden observar claramente las asimetrías regionales en la distribución per cápita a cada Departamento por recursos transferidos a Prefecturas y Municipalidades. Con excepción de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria cuya distribución se basa en criterios poblacionales y hace que el ingreso asignado a Municipalidades sea igual para todos los Departamentos, existe un desequilibrio en la distribución del resto de los ingresos.

Cuadro
Asimetrías en ingresos departamentales per cápita
(presupuesto reformulado 2008 transferido a
Municipalidades y Prefecturas) En Bs./habitante

	Departamento	Chuq.	La Paz	Cbba.	Oruro	Potosí	Tarija	Santa Cruz	Beni	Pando	Promedio
	Población	531.522	2.350.466	1.455.711	391.870	709.013	391.226	2.029.471	362.521	52.525	8.274.325
Municipios	Copart. Trib.	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60	353,60
	HIPC II	33,91	23,51	21,18	34,73	37,48	27,74	14,86	38,20	114,97	24,80
	IDH	446,89	202,99	226,56	606,16	335,02	793,56	209,10	655,23	4.522,31	329,87
Prefecturas	Reg. Forest.	0,10	0,21	0,15			0,92	1,82	2,16	30,21	0,87
	Reg. Hidro.	280,46		250,09			4.653,76	222,82	465,77	1.607,23	367,31
	Reg. Minera	2,13	19,33	1,70	291,63	689,23		13,82			82,19
	Fdo. Comp.	16,66	41,26	19,64				20,34			21,23
	IEHD	72,45	36,92	43,31	88,81	60,96	88,92	38,57	93,85	491,12	53,08
	IDH	162,65	36,78	59,39	220,61	121,93	288,96	42,60	238,47	1.645,88	97,25
	Total	1.368,86	714,60	975,62	1.595,54	1.598,22	6.207,44	917,52	1.847,28	8.765,34	1.330,20
	Total IDH	609,54	239,77	285,95	826,77	456,95	1.082,52	251,70	893,70	6.168,20	427,12

El más alto

El más bajo

Fuente: Elaborado por el Observatorio Bolivia Democrática del Viceministerio de Descentralización con información del Ministerio de Hacienda, diciembre 2008.

Como se puede observar La Paz es el Departamento más afectado en cuanto a distribución de recursos. No recibe regalías, apenas un reducido fondo de compensación y por supuesto es el que menos recursos per cápita recibe por concepto del IDH. No hay correspondencia entre lo que La Paz aporta al país con lo que recibe de transferencias del Estado para sus gobiernos municipales y administración departamental. El Cuadro contempla las transferencias recibidas por los Gobiernos Municipales y Prefecturas de cada Departamento con el presupuesto reformulado de la gestión 2008.

Un urgente Pacto Fiscal deberá establecer y garantizar la universalización mínima de cobertura de servicios públicos para toda boliviana y boliviano independientemente de dónde viva y a partir de la cual cada Entidad Territorial Autónoma pueda desarrollar políticas públicas para mejorar coberturas o la calidad de los servicios. La única manera de lograr esto (salvando el 11% de las regalías departamentales constitucionalizadas que corresponde a los Departamentos productores de Hidrocarburos), es estableciendo una redistribución de los recursos que genera el estado, especialmente por la explotación de los recursos naturales; que sea equitativa considerando al menos criterios de población, tamaño del territorio e índices de pobreza.

iii) Asignación y ejercicio competencial: hacia un PACTO COMPETENCIAL en base a la distribución y delegación contemplada en la CPE evitando la superposición de competencias y acabando con situaciones en que algunos servicios básicos no se ofrecen a la población o se lo hace insuficientemente. Será preciso, a tiempo de ejercer las competencias correspondientes a cada entidad territorial autónoma transferidas por la CPE, hacer una cuantificación de las mismas estableciendo en cada caso su sostenibilidad en términos financieros, técnicos e institucionales.

En los Consejos Autonómicos Nacional y Departamentales será necesario armonizar la aplicación de los Estatutos Autonómicos de cada Departamento con las Cartas Orgánicas de cada Gobierno Municipal y Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos; así como la legislación departamental, municipal

e indígena que se elaborarán en el marco de las competencias exclusivas de cada Entidad Territorial. Muchas competencias exclusivas, por la manera como están formuladas, requieren de una armonización legislativa para evitar superposiciones competenciales en su aplicación. Un ejemplo de ello es la materia competencial de turismo que está contemplada como exclusiva de cuatro niveles territoriales: el nivel central del Estado legisla sobre políticas generales de turismo; el Departamento legislará sobre políticas de turismo departamental; los Municipios legislarán sobre políticas de turismo local; y las Autonomías indígenas legislarán en políticas de turismo. Es deseable que las controversias competenciales puedan ser resueltas en un escenario de concertación, de lo contrario las mismas deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

- iv) Control de constitucionalidad: acelerar la CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL** cuya elección y composición es compleja y requerirá un tiempo mayor del que se desearía. Por ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar en 180 días de iniciadas sus sesiones la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, hacer la preselección respectiva y llegar a las elecciones por voto popular de éste Tribunal y otros del Órgano Judicial ya convocada para el 5 de diciembre del 2010. El rol que tendrá el Tribunal Constitucional Plurinacional será determinante para la implementación del proceso autonómico por cuanto la CPE le asignó la responsabilidad de ser única instancia sobre la inconstitucionalidad de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas; los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público y entre el gobierno nacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas; y los recursos en materia impositiva creados, modificados o suprimidos (Art. 202, 1-4). Esto amerita que en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional se instaure una Sala Competencial especializada que atienda exclusivamente estos procesos.

Sin embargo es deseable que las controversias competenciales entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales

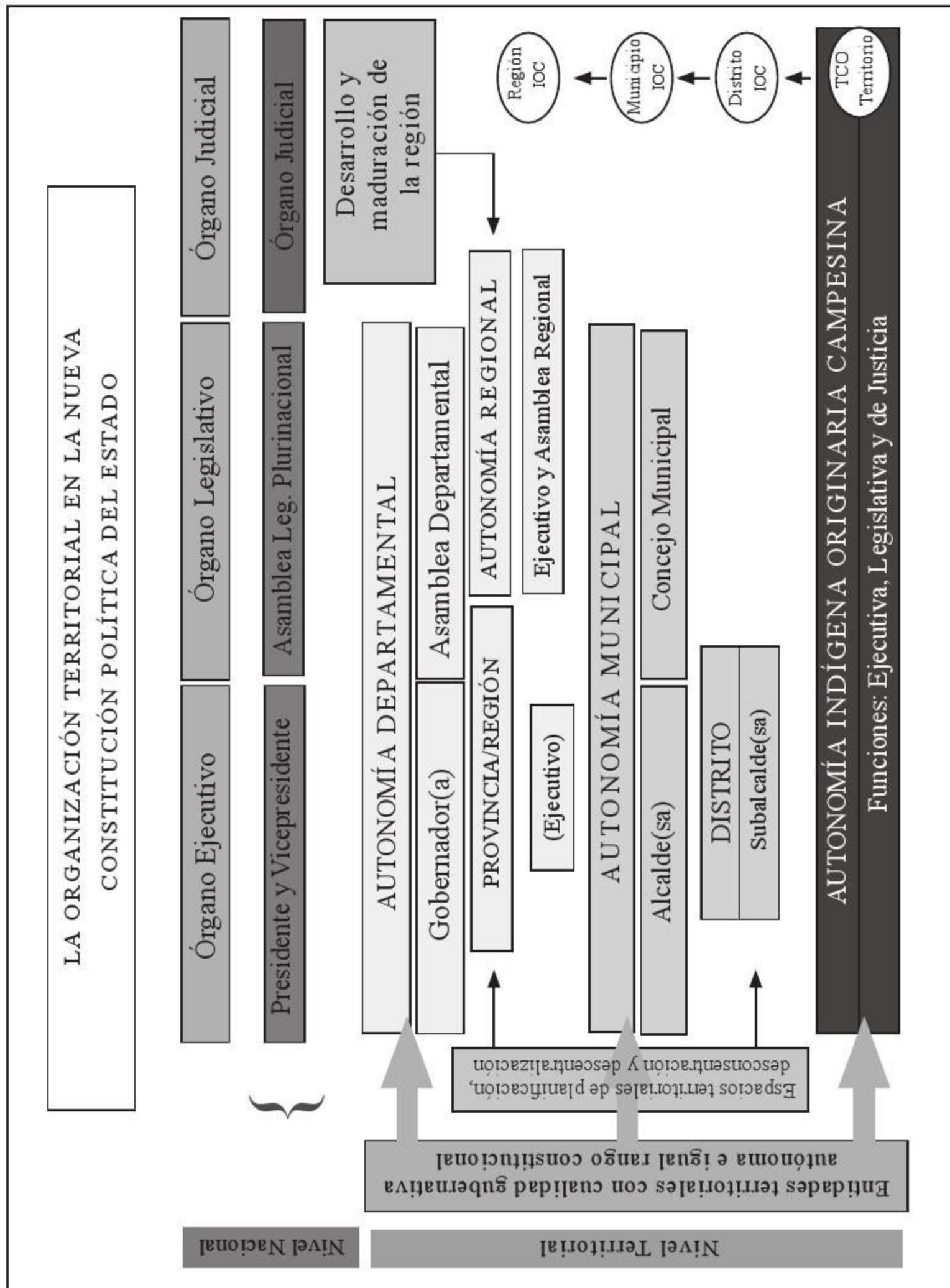
Autónomas y/o entre éstas últimas sean resueltas en un escenario de concertación que habrá que instituirlo tanto a nivel departamental (Consejo Departamental Autonómico) como a nivel nacional (Consejo Nacional Autonómico).

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y EL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS EN LA CPE

Los acuerdos políticos que se lograron tanto en Cochabamba con Prefectos, FAM y Pueblos Indígena Originarios, así como en el Congreso Nacional han allanado el camino para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en referéndum el día 25 de enero pasado.

La Tercera Parte de la Nueva Constitución Política del Estado, referida a la organización Territorial del Estado y Régimen de descentralización político-administrativa con autonomías, empieza modificando la denominación de las actuales unidades político administrativas (UPAs), que se divide en dos conceptos: Unidades Territoriales y Entidades Territoriales.

- a) **Unidades Territoriales:** se refieren a los espacios geográficos en que se organiza el territorio, es decir a la demarcación física que tienen Departamentos, Municipios, etc. La CPE define cuatro unidades territoriales: Departamento, Provincia, Municipio y Territorio indígena originario campesino, y establece que una quinta, la región, podrá ser parte de esta organización territorial de acuerdo a la Ley.
- b) **Entidades territoriales:** se refieren a la administración y en su caso, al Gobierno sobre esas unidades territoriales, que son su jurisdicción. La CPE define las departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.



Las entidades territoriales autónomas no se subordinan entre sí y tendrán igual rango constitucional (Art. 276, CPE), lo que quiere decir que no deberá existir tutela de una sobre otra, y sus disposiciones legislativas tienen la misma jerarquía.

Los Departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006, accederán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la Constitución y deberán adecuar sus estatutos a ésta, y sujetarlos a control de constitucionalidad. Los otros cinco departamentos (Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz) deberán elaborar sus Estatutos, y previo control de constitucionalidad, entrarán en vigencia mediante referendo aprobatorio en cada Departamento.

Las entidades territoriales indígena originario campesinas pueden conformarse en:

- a) Territorios indígena originario campesinos (mediante un trámite administrativo adquirirá esta cualidad la actual categoría de Tierras Comunitarias de Origen-TCOs)
- b) Distritos municipales
- c) Municipios

Su constitución como autonomías indígena originario campesinas se realizará mediante consulta y la aprobación de un Estatuto autonómico, que es el que establecerá los órganos e institucionalidad para el ejercicio de su Gobierno. La agregación de estas entidades territoriales podrá dar lugar a Regiones indígena originario campesinas.

Con relación a los espacios de planificación y gestión territorial en el ámbito local; al obviar la mención al Cantón, la CPE deja abierta la puerta para que los Gobiernos Municipales puedan definir los espacios de planificación al interior de su jurisdicción, mediante los Distritos Municipales, en los que pueda desconcentrar y descentralizar la gestión pública.

Las regiones, se constituirán como espacios de planificación y gestión, conformadas por varios Municipios o provincias al interior de los Departamentos, para superar la fragmentación territorial que suponen las actuales provincias, en base a criterios culturales, lingüísticos, históricos, económicos y ecológicos.

Las regiones que se hayan conformado podrán optar por constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los Municipios que la conforman, vía referendo y con la aprobación de su Estatuto autonómico. Contarán con un órgano ejecutivo y una Asamblea Regional sin facultad legislativa, elegidos por voto.

COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

La nueva Constitución Política del Estado incluye las definiciones de cuatro modalidades de asignación competencial:

- I) **PRIVATIVAS**, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado;
- II) **EXCLUSIVAS**, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas;
- III) **CONCURRENTES**, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva; y
- IV) **COMPARTIDAS**, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

Así definidas las modalidades de asignación competencial permiten establecer que cada Entidad Territorial Autónoma podrá:

- a) Legislar, reglamentar y ejecutar respecto a competencias exclusivas.
- b) Desarrollar legislativamente una Ley Básica nacional, reglamentarla y ejecutarla respecto a las competencias compartidas.
- c) Reglamentar y ejecutar la ley nacional respecto a las competencias concurrentes, así como respecto a aquellas, que

siendo competencias nacionales exclusivas, su reglamentación y/o ejecución le sean delegadas o transferidas por ley.

En base a las cuatro modalidades de asignación competencial, la CPE distribuye 199 competencias entre el nivel central del Estado, y las Entidades Territoriales Autónomas (Departamentales, Municipales e Indígena Originaria Campesinas) asignando:

- ☐ VEINTIDÓS (22) competencias PRIVATIVAS y TREINTA Y OCHO (38) competencias EXCLUSIVAS para el nivel central del Estado (Art. 298).
- ☐ SIETE (7) Competencias que se ejercerán de forma COMPARTIDA entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (Art. 299).
- ☐ DIECISÉIS (16) Competencias que se ejercerán de forma CONCURRENTE entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (16) (Art. 299).
- ☐ TREINTA Y SEIS (36) competencias EXCLUSIVAS que ejercerán los gobiernos DEPARTAMENTALES autónomos, en su jurisdicción (Art. 300).
- ☐ CUARENTA Y TRES (43) competencias EXCLUSIVAS que ejercerán los gobiernos MUNICIPALES autónomos, en su jurisdicción (Art. 302).
- ☐ Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer: VEINTITRES (23) competencias EXCLUSIVAS, CUATRO (4) competencias COMPARTIDAS y DIEZ (10) competencias CONCURRENTES (Art. 304).

Para una mejor comprensión del catálogo de competencias distribuido en la CPE hemos ordenado las mismas por materias en una Matriz Competencial que se adjunta en el Anexo 3 al final de esta publicación.

La Región recibirá las competencias que le sean conferidas por el Gobierno Autónomo Departamental.

BASE MATERIAL DE LAS AUTONOMÍAS

El Estado debe garantizar un techo mínimo de recursos a ser transferidos a las Entidades Territoriales Autónomas en base a una política de distribución de los ingresos que se recauda fundamentalmente por impuestos y/o regalías establecidas como hecho imponible a la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, siendo la renta petrolera hoy la fuente principal de recursos coparticipables entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Como vimos más atrás se requerirá una nueva legislación que mejore equitativamente la distribución de recursos a Departamentos y Municipios, superando las asimetrías hoy existentes.

El Artículo 340 establece las regulaciones mínimas acerca de los recursos que administrarán las Entidades Territoriales Autónomas estableciendo que: i) las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales, e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos; ii) la ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinos; iii) los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario campesinas, judiciales y universitarios, recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional.

Por otra parte el Art. 323 regula el dominio tributario de las entidades territoriales autónomas estableciendo que los impuestos que pertenecen al dominio tributario exclusivo de las Entidades Territoriales Autónomas departamentales o municipales, SERÁN APROBADOS, MODIFICADOS O ELIMINADOS POR SUS CONCEJOS O ASAMBLEAS, A PROPUESTA DE SUS ÓRGANOS EJECUTIVOS. El mismo artículo establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal.

LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA CPE

La CPE profundiza las autonomías municipales estableciendo que:

- ☐ Cada órgano deliberativo elaborará de manera participativa el Estatuto o **Carta Orgánica** aprobado por dos tercios de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como NORMA INSTITUCIONAL BÁSICA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción (Art. 275).
- ☐ El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y **legislativa** municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde (Art. 283).
- ☐ El Concejo Municipal estará compuesto por concejales y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal (Art. 284).
- ☐ En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la **Carta Orgánica Municipal** (Art. 284).
- ☐ La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejales y concejales municipales. La **Carta Orgánica Municipal** definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción (Art. 284).
- ☐ **El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según lo dispuesto por esta Constitución** (Art. 284).

Por otra parte en lo que respecta a los órganos ejecutivos y legislativos de los Gobiernos Autónomos Municipales la CPE establece que:

- ☐ Para ser candidato o candidata a un cargo electivo se requiere haber residido de forma permanente en el municipio al menos dos años antes de la elección (Art. 285 y 287); y haber cumplido

21 años para Alcaldesa y Alcalde, y 18 años para postular a Concejal (Art. 285 y 287).

- ☐ El período de mandato es de cinco años, con reelección de manera continua por una sola vez. (Art. 285 y 287).
- ☐ La suplencia temporal del Alcalde o Alcaldesa corresponderá a un miembro del Concejo de acuerdo a la **Carta Orgánica** (Art. 286, I).
- ☐ En caso de ausencia definitiva del Alcalde o Alcaldesa, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta o sustituto será una autoridad ya electa definida de acuerdo a la **Carta Orgánica**. (Art. 286, II).
- ☐ La elección de los Concejos tendrá lugar en listas separadas de los ejecutivos (Art. 287, II).

En cuanto a las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales, **el artículo 302 de la CPE establece el listado de CUARENTA Y TRES (43) competencias exclusivas que deberán asumir los gobiernos autónomos municipales** en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, los Gobiernos Autónomos Municipales podrán acceder a las SIETE (7) competencias compartidas desarrollando la legislación a partir de una Ley Básica Nacional; y a las DIEZ Y SEIS (16) competencias concurrentes establecidas en la CPE (Art. 299). Adicionalmente serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o delegadas; estableciéndose en el artículo 305 que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.

VII. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

Esta Ley es una de las cinco que la Constitución Política del Estado (CPE) establece un plazo para su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional en su siguiente Disposición Transitoria:

“Disposición Transitoria Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de **ciento ochenta días** a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la **Ley Marco de Autonomías y Descentralización”**.

Los alcances mínimos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) podemos establecerlos en el siguiente sumario ordenador que será desarrollado a partir de lo establecido en la Constitución:

ESTRUCTURA MÍNIMA DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

1. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y DE LAS AUTONOMÍAS
2. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS (ETAs)
 - A. DEPARTAMENTALES
 - B. REGIONALES
 - C. MUNICIPALES
 - D. INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINAS

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTATUTOS AUTONÓMICOS Y CARTAS ORGÁNICAS
4. ACREDITACIÓN, TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN COMPETENCIAL
5. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO
6. COORDINACIÓN ENTRE EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
7. MANCOMUNIDADES Y SISTEMA ASOCIATIVO
8. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
9. FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
10. ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
11. DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y ABROGATORIAS

Veamos en detalle y en el mismo orden cada una de los contenidos mínimos que deberá desarrollar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización:

1. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y DE LAS AUTONOMÍAS

En la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado, dedicada a la Estructura y Organización Territorial del Estado, existen un conjunto de definiciones y principios constitucionales en materia de organización territorial y autonomías que deberán ser desarrollados por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), entre otros podemos mencionar los siguientes:

UNIDAD Y ENTIDAD TERRITORIAL

En sustitución del concepto de Unidad Político Administrativa que está establecido en la Ley 2150 UPAs todavía vigente, la Constitución desglosa éste en dos: 1. **Unidad Territorial**, para referirse a los espacios geográficos en que se organiza el territorio, es decir a la demarcación física de Departamentos, Regiones, Provincias, Municipios y Territorios Indígena Originario Campesinos. 2. **Entidad territorial**: referida a la

administración y en su caso, al Gobierno sobre la unidad territorial, que es su jurisdicción.

DISTRITACIÓN DE LOS CANTONES

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) deberá aclarar el tratamiento que se dará a los Cantones, en la medida en que los mismos ya no son reconocidos en la Constitución Política del Estado como Unidades Territoriales y por tanto no serían parte de la Organización Territorial del Estado (Art. 269, CPE); pero sí podrían ser considerados como espacios de planificación territorial en un necesario proceso de distritación municipal que absorba gradualmente a los cantones en el marco de un proceso de ordenamiento, gestión y planificación territorial municipal. Por ello, una vez que la LMAD establezca el futuro de las ex Unidades Político Administrativas Cantonales, habrá que derivar los detalles de su posible conversión en distritos municipales en función a la Ley que específicamente regule el Ordenamiento, la gestión y la planificación Territorial.

“Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos...”.

REGIÓN COMO ESPACIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL

Un aspecto fundamental y que marca una oportunidad histórica para comenzar una efectiva organización territorial del Estado que armonice territorio, población y estructuras de poder, está en el reconocimiento constitucional de las regiones como espacios de planificación y gestión territorial que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá regular, considerando los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 269....III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Artículo 280. I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión. Excepcionalmente una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por sí sola tenga las

características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse regiones metropolitanas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones....”

PRINCIPIOS RECTORES

La LMAD deberá desarrollar cada uno de los siguientes principios rectores sobre los cuales se regirán la organización territorial del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), de acuerdo al artículo 270 de la CPE:

“Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución”.

AUTONOMÍA

El alcance de la autonomía debe estar claramente definido en la Ley Marco en torno a sus cualidades caracterizadas por: la elección directa de autoridades; administración de recursos económicos; y ejercicio de facultades: legislativa, normativo-administrativa (autonomía regional), deliberativas y fiscalizadora. La autonomía regional es la única que no tiene igual rango constitucional ni la misma jerarquía normativa por tanto la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá establecer los alcances de la facultad normativa-administrativa establecida en la Constitución para el gobierno de cada autonomía regional. Para ello debemos aplicar los siguientes preceptos constitucionales:

“Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

Artículo 281. El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo”.

FACULTAD LEGISLATIVA, IGUAL RANGO CONSTITUCIONAL Y JERARQUÍA NORMATIVA

Es la facultad legislativa, plenamente reconocida por la Constitución Política del Estado a las Entidades Territoriales Autónomas departamentales, municipales e indígena originaria campesinas, la que marcará la diferencia y el desafío más importante en el proceso de implementación del régimen autonómico establecido en nuestra CPE. De acuerdo a la CPE las Entidades Territoriales Autónomas deberán legislar, reglamentar y ejecutar respecto a sus competencias exclusivas; así como podrán encarar el desarrollo legislativo de una Ley Básica nacional, reglamentarla y ejecutarla respecto a las competencias compartidas. La Ley Marco podría especificar y desarrollar esta facultad que es inherente a la autonomía.

Por otro lado la Constitución establece la no subordinación y la igualdad de rango constitucional entre Entidades Territoriales Autónomas y una misma jerarquía normativa entre las leyes nacionales, los Estatutos Autonómicos, las Cartas Orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena originaria campesina. Estos aspectos deberán ser abordados, para su mejor entendimiento, por la LMAD de acuerdo lo estipulado por los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 276. Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional.

Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. **II.** La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por

la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: **1.** Constitución Política del Estado. **2.** Los tratados internacionales. **3.** Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. **4.** Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

SUJETO AUTONÓMICO

De las definiciones conceptuales que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá precisar es que la autonomía está referida a la Entidad Territorial Autónoma y no al territorio sea este indígena originario campesino, municipal, regional o departamental; es decir no hay autonomías territoriales sino gubernativas.

Autonomía no es sinónimo de federalismo, soberanía y menos de independencia; confusiones aparentemente semánticas pero que encierran una visión distinta que han pretendido imponer algunos grupos de poder regionales que, abanderados de la consigna de autonomía, han tratado de impulsar acciones en algunos casos más bien cercanas al separatismo, a la secesión, y en otros casos a un Estado semi soberano dentro del Estado plurinacional o a un régimen federal⁷.

2. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

a. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS DEPARTAMENTALES

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en relación a las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, deberá especificar los aspectos a ser abordados por los Estatutos Autonómicos y conceptos marco de temas referidos al buen gobierno de estas Entidades como ser: transparencia, lealtad institucional, participación y control social, planificación, información y Control Gubernamental entre otros. Los aspectos de funcionamiento, organización y estructura de los Gobiernos Autónomos Departamentales deberán ser resueltos en sus respectivos

7. El alcance de algunos Estatutos Autonómicos, que al haber sido redactados por personas vinculadas a los grupos de poder regionales, y al no haber sido elegidos democráticamente para esta labor legislativa departamental y no tener un referente constitucional, prácticamente se han dado a la tarea de hacer dibujo libre con sus Estatutos. Por ello la CPE, resultado de los acuerdos políticos, si bien reconoce la existencia de dichos Estatutos establece un claro mandato constitucional de adecuar los mismos a la Constitución y posteriormente remitirlos a control de constitucionalidad (Tercera Disposición Transitoria, CPE); aspectos que deberán ser realizados por las Asambleas Departamentales elegidas democráticamente el 4 de abril de 2010.

Estatutos Autonómicos a partir de los principios marco de esta ley⁸ y lo establecido en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

Artículo 278. I. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales, elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. II. La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva”.

Hasta tanto no entren en vigencia sus Estatutos Autonómicos de acuerdo a la Constitución; para unos adecuarlos y remitirlos a control de Constitucionalidad (Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz); y para los otros departamentos (Oruro, Potosí, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca) elaborarlos, aprobarlos en sus respectivas Asambleas Departamentales por dos tercios de sus miembros y previo control de constitucionalidad, entren en vigencia mediante referendo aprobatorio en sus jurisdicciones (Art. 275, CPE), será preciso definir una suerte de régimen transitorio que podría estar reflejada en una Ley también de carácter transitoria y referencial. Una vez elegidas sus autoridades, gobernadores y asambleístas departamentales, en las elecciones del 4 de abril, podría generarse un vacío normativo para el ejercicio de los gobiernos autónomos departamentales. No teniendo sus normas básicas institucionales (Estatutos) todavía en vigencia, no podrán utilizar ninguna norma supletoria vigente en la medida que, tanto la Ley de

8. Para dar curso a los Estatutos Autonómicos, son estos aspectos los que se eliminaron del alcance de la Ley Marco de Autonomías en el proceso de concertación abierto en Cochabamba y en el Congreso en septiembre y octubre del 2008. Comparar el artículo 272 del proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro, con el artículo 271 de la Constitución vigente.

Descentralización Administrativa y otras disposiciones legales todavía en vigencia, rigen para las Prefecturas dependientes del nivel central del Estado y no para gobiernos autónomos departamentales.

En virtud de ello, las Asambleas Departamentales tendrán que aprobar en sus primeras sesiones disposiciones transitorias para el buen funcionamiento del Ejecutivo y Legislativo Departamental ajustado a las 36 competencias exclusivas transferidas por la CPE en su artículo 300. Para facilitar la transición hacia el ejercicio pleno de los Gobiernos Departamentales Autónomos se debería considerar una disposición Transitoria sea en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización o en una Ley Transitoria que sirva de referencia a las ETAs Departamentales para una estructura mínima de funcionamiento con el siguiente alcance:

- ✓ De la Asamblea Departamental: composición y elección de su Directiva; definición de su estructura mínima de funcionamiento y atribuciones y; elaborar su reglamento de funcionamiento interno. Presupuesto y ejecución del mismo.
- ✓ Estructura mínima de funcionamiento del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental tomando como referencia las estructuras prefecturales actuales adecuadas a las competencias exclusivas transferidas por la CPE a los Gobiernos Autónomos Departamentales. Presupuesto y ejecución del mismo.
- ✓ De la Asamblea Departamental de los Gobiernos Autónomos Departamentales de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando: elaborar participativamente la adecuación de sus Estatutos Autonómicos, aprobarlos por dos tercios de sus miembros, y remitirlos a control de constitucionalidad para su puesta en vigencia.
- ✓ De la Asamblea Departamental de los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Potosí: elaborar participativamente sus respectivos Estatutos Autonómicos, aprobarlos por dos tercios de sus miembros y remitirlos a control de constitucionalidad, para que entren luego en vigencia previo referendo aprobatorio del mismo en cada uno de sus Departamentos.

b. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS REGIONALES

La Ley Marco tiene expresamente mayores responsabilidades de

regulación con relación a la conformación de regiones y las posibilidades de emergencia de las Autonomías Regionales expresamente planteadas en la CPE en los siguientes artículos:

“Artículo 269. ...III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Artículo 280. I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión. Excepcionalmente una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por sí sola tenga las características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse regiones metropolitanas. **II.** La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. Donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales. **III.** La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental.

Artículo 281. El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo.

Artículo 282. I. Las y los miembros de la Asamblea Regional serán elegidas y elegidos en cada municipio junto con las listas de candidatos a concejales municipales, de acuerdo a criterios poblacionales y territoriales. **II.** La región elaborará de manera participativa su Estatuto, de acuerdo a los procedimientos establecidos para las autonomías regionales”.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá regular con claridad el alcance de las facultades normativo-administrativas en relación a las facultades legislativas otorgadas a las otras Entidades Territoriales Autónomas. Entendiendo que la facultad legislativa es la que otorga a las Entidades Territoriales Autónomas igual rango constitucional y misma jerarquía normativa.

Hasta tanto no se tengan Estatutos Autonómicos en las regiones que se habilitaron para encarar la Autonomía Regional vía referendo, la organización, funcionamiento y atribuciones generales de la Asamblea Regional serán regulados por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

La primera experiencia de gobierno autónomo regional se dará en la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. El 6 de diciembre de 2009, los estantes y habitantes de los municipios de Yacuiba, Villamontes y Caraparí; además de votar por Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores, respondieron en referendo a la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo que su provincia ingrese al régimen de la autonomía regional?; la respuesta fue ampliamente favorable por el Sí con el 80,45% en los tres Municipios, dando como resultado final el siguiente:

CÓMPUTO REGIONAL DE LA PROVINCIA GRAN CHACO *		
DETALLE	TOTAL	%
Ciudadanos inscritos	70.332	
Votos emitidos	65.191	100
Votos válidos	60.006	92,05
Votos nulos	1.980	3,04
Votos en blanco	3.205	4,92
Abstención	5.141	7,3
VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN		
SI	48.272	80,45%
NO	11.734	19,55%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

El pasado 4 de abril, la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, eligió a su Asamblea Regional. Sin embargo, ésta requerirá una posible disposición transitoria, para su funcionamiento inicial hasta que se tenga aprobada la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (hasta el 22 de julio del 2010); por tanto, podría haber un vacío normativo de 2 a 3 meses que se podría resolver aprobando una Ley

Transitoria para el funcionamiento de la Asamblea Regional del Chaco. La Ley 4021 establece que las autoridades electas el 4 de abril tomarán posesión de sus cargos el 30 de mayo, por tanto, hay suficiente tiempo para tratar los siguientes alcances, que podrían ser incluidos en Ley Marco de Autonomías y Descentralización y/o ser considerados en una Ley Transitoria. El autor del presente libro presentó a la Cámara de Diputados, en fecha 10 de marzo de 2010, un proyecto de ley transitoria con el siguiente alcance:

MANDATO Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

La Asamblea Regional del Chaco del Departamento de Tarija electa el 4 de abril de 2010, tiene el mandato expreso de elaborar participativamente y aprobar por dos tercios de votos de sus miembros, el proyecto de Estatuto Autonómico Regional del Chaco en el plazo de hasta un año a partir de su posesión.

Sus atribuciones serían:

- a) Conformar su Directiva.
- b) Elaborar un reglamento de funcionamiento interno.
- c) Definir la sede de sus funciones o su funcionamiento de forma rotativa.
- d) Elaborar, proponer y aprobar su presupuesto de funcionamiento.
- e) Contratar a su personal.
- f) Conformar el Consejo Regional Económico Social de la Región (CRES) y coordinar con las autoridades que corresponda las iniciativas para el desarrollo de la región.
- g) Gestionar ante el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija la transferencia o delegación de competencias para el Gobierno Autónomo Regional del Chaco.
- h) Elaborar participativamente el proyecto de Estatuto Autonómico Regional del Chaco; aprobarlo por dos tercios del total de sus miembros y remitirlo a Control de Constitucionalidad.

Los contenidos y alcances del Estatuto Autonómico del Chaco se sujetarán a la Constitución Política del Estado y se adecuarán a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO

Los miembros de la Asamblea Regional, una vez cumplidos los requisitos y procedimientos de Ley, serán posesionados por la Corte Superior de Justicia de Tarija, ante la cual y en el mismo acto se definirá por acuerdo entre la mayoría de los asambleístas, o a falta de acuerdo por sorteo, cuál de los tres municipios que conforman la región será la sede provisional de sus sesiones.

La primera sesión de la Asamblea Regional se realizará, sin necesidad de convocatoria expresa, a los seis días de la posesión, en instalaciones del Gobierno Municipal de la sede provisional. Los actos protocolares y la elección de un presidium provisional conformado de entre los propios asambleístas, podrán ser asistidos por el Presidente del Concejo Municipal anfitrión.

Las sesiones solamente tendrán validez con la presencia de al menos la mitad más uno de sus integrantes, debiendo adoptar todas sus decisiones por mayoría absoluta del total de sus miembros, salvo en los casos que las normas legales y su propio reglamento interno dispongan mayores proporciones.

Cada decisión de la Asamblea Regional referida al cumplimiento de sumando será aprobada en la forma de una “Resolución Regional”, de cumplimiento obligatorio por sus miembros, su personal técnico y administrativo.

DEL FINANCIAMIENTO TRANSITORIO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO

El 45% de las regalías consolidadas para la Provincia Gran Chaco, podría ser la fuente de los recursos que cubran el presupuesto de costos administrativos y de funcionamiento de la Asamblea Regional del Chaco orientados estrictamente al mandato expresado en la presente Ley, cuya transferencia a la Asamblea Regional queda expresamente autorizada.

La Asamblea Regional del Chaco es la responsable del uso de los recursos asignados, cumpliendo las formalidades administrativas de ley; para ello deberá aprobar un presupuesto provisional orientado estrictamente al mandato expresado en la presente Ley.

Los gastos comprometidos que demande el funcionamiento de la Asamblea Regional hasta la aprobación de su presupuesto provisional y la efectiva asignación financiera, serán cubiertos por estos recursos

de forma retroactiva al día de su primera sesión, una vez que se tenga disponibilidad de ellos y cumpliendo las formalidades administrativas de ley.

La remuneración de las y los Asambleístas Regionales no podrá ser superior al promedio de la percibida por los Concejales Municipales de los tres municipios de la región.

c. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS MUNICIPALES

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en relación a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales deberá especificar los aspectos a ser abordados por las Cartas Orgánicas y conceptos marco de temas referidos al buen gobierno de estas Entidades como ser: transparencia, lealtad institucional, participación y control social, planificación, información y Control Gubernamental entre otros. Los aspectos de funcionamiento, organización y estructura de los Gobiernos Autónomos Municipales deberán ser resueltos en sus respectivas Cartas Orgánicas a partir de los principios marco de esta ley.

Sin embargo, hasta tanto no se tengan Cartas Orgánicas en vigencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, aprobadas por el Concejo Municipal, luego aprobadas en referendo, previo control de constitucionalidad; lo que tomará entre 2 a 5 años; y seguramente muchos municipios no estarán en condiciones de elaborar sus respectivas Cartas Orgánicas; será preciso elaborar y aprobar, en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley Orgánica de Gobiernos Autónomos Municipales que no sería otra que la Ley de Municipalidades 2028, todavía vigente, adecuada a la Constitución Política del Estado. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización podría establecer esto a través de una disposición transitoria; estableciendo que hasta que no se tenga aprobada la nueva Ley Orgánica de Gobiernos Autónomos Municipales, éstos podrán aplicar de manera supletoria la Ley de Municipalidades 2028 todavía en vigencia en todo aquello que no contradiga la Constitución Política del Estado.

Habría que considerar en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización la posibilidad de establecer que no todos los Gobiernos Autónomos Municipales estén obligados a elaborar sus Cartas Orgánicas, quizás sea razonable regular que los Gobiernos

Autónomos Municipales, de determinadas Unidades Territoriales Municipales (menos de 5000 habitantes) podrían decidir, de manera voluntaria y autónoma, no elaborar una Carta Orgánica y remitirse para su funcionamiento a la nueva Ley Orgánica de Gobiernos Autónomos Municipales.

**d. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS INDÍGENA
ORIGINARIA CAMPESINAS**

Al momento de abordar el tratamiento de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas, en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, debemos remitirnos a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos establecidos en el Capítulo Cuarto del Título II de Derechos Fundamentales y Garantías de la CPE:

“Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. **II.** En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: **1.** A existir libremente. **2.** A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. **3.** A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. **4.** A la libre determinación y territorialidad. **5.** A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. **6.** A la titulación colectiva de tierras y territorios. **7.** A la protección de sus lugares sagrados. **8.** A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. **9.** A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. **10.** A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. **11.** A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. **12.** A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. **13.** Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. **14.** Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Las puertas de acceso a las Autonomías Indígena Originaria Campesinas están abiertas en la propia CPE, lo que deberá hacer la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es precisar el alcance de su funcionamiento hasta que éstas se doten de sus respectivos Estatutos Autonómicos; entre otros deberá abordar conceptual y procedimentalmente los siguientes aspectos más relevantes derivados de la CPE:

- ✓ Sus fuentes de financiamiento.
- ✓ El proceso administrativo de conversión de las TCOs en Territorio.

- ✓ El ejercicio del gobierno de las autonomías indígena originario campesinas y su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales (Arts. 2, 289 y 290-II, CPE).
- ✓ Territorios ancestrales, actualmente habitados por pueblos y naciones indígena originario campesinos (Art. 290-I, CPE).
- ✓ Requisitos y condiciones de acceso y constitución de la autonomía indígena originaria campesina por voluntad de su población, expresada en consulta (Art. 293-I, CPE).
- ✓ Calidad de autonomías indígena originario campesinas adoptada por territorios indígena originario campesinos, municipios y regiones (Art. 291, CPE).
- ✓ Especificar el procedimiento cuando la conformación de una autonomía indígena originario campesina afectase límites de distritos municipales y límites municipales, derivando su regulación a la Ley de Unidades Territoriales (Art. 293, CPE).
- ✓ Requisitos mínimos de población y otros diferenciados para la constitución de autonomía indígena originario campesina (Art. 293-III, CPE).
- ✓ Mecanismos de articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio del gobierno autónomo indígena originario campesino cuyos territorios se encuentren en uno o más municipios (Art. 293-IV, CPE).
- ✓ Especificar la derivación a la Ley de Unidades Territoriales para regular la conformación de un nuevo municipio por comunidades campesinas, previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme a la Constitución y esta ley (Art. 294-III, CPE).
- ✓ Requisitos y condiciones para conformar una región indígena originario campesina (Art. 295, CPE).
- ✓ Condiciones para el derecho de los Territorios Indígena Originario Campesinos para el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se

encuentran en sus territorios (Art. 430-I, CPE).

- ✓ Procedimientos para el reconocimiento de los derechos de contar, en el territorio indígena originario campesino, áreas de producción, de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural (Art. 403-II, CPE).
- ✓ Regular el mecanismo de asignación, transferencia o delegación de competencias municipales, además de sus respectivas competencias asignadas por la CPE, a la autonomía indígena originaria campesina, de acuerdo a su proceso de desarrollo institucional y características culturales propias. (Art. 303, CPE).

Finalmente está la necesidad de especificar aspectos relacionados a la transición de los Gobiernos Municipales que decidan adoptar la condición de Municipio Indígena Originario Campesino. Al respecto ya se tiene en curso la emergencia de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas Municipales, a partir del resultado del referendo realizado el pasado 6 de diciembre del 2009, de 12 Municipios que decidieron ir a referendo. La población de 11 Municipios decidió votar a favor de la condición Indígena Originaria Campesina en sus respectivas Unidades Territoriales Municipales; es decir adoptar la condición de Municipio Indígena Originario Campesino. De acuerdo al Acta de Cómputo presentado por la Corte Nacional Electoral, los resultados de dichos referendos municipales por Departamento fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA *

	MUNICIPIO DE TARABUCO		MUNICIPIO DE MOJOCOYA		MUNICIPIO DE HUACAYA	
DETALLE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE
Ciudadanos inscritos	8.064		3.093		737	
Votos emitidos	7.785	100,00%	2.994	100,00%	685	100,00%
Votos válidos	7.057	90,65%	2.788	93,12%	628	91,68%
Votos nulos	334	4,29%	87	2,91%	26	3,80%
Votos en blanco	394	5,06%	119	3,97%	31	4,53%

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN

SI	6.408	90,80%	2.462	88,31%	337	53,66%
NO	649	9,20%	326	11,69%	291	46,34%
Abstención	279	3,46%	99	3,20%	52	7,06%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ*

DETALLE	MUNICIPIO DE CHARAZANI		MUNICIPIO DE JESÚS DE MACHACA	
	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE
Ciudadanos inscritos	3.992		5.513	
Votos emitidos	3.859	100,00%	5.416	100,00%
Votos válidos	3.504	90,80%	4.969	91,75%
Votos nulos	149	3,86%	194	3,58%
Votos en blanco	206	5,34%	253	4,67%

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN

SI	3.035	86,62%	2.787	56,09%
NO	469	13,38%	2.182	43,91%
Abstención	133	3,33%	97	1,76%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

DEPARTAMENTO DE POTOSI*

DETALLE	MUNICIPIO CHAYANTA	
	TOTAL	PORCENTAJE
Ciudadanos inscritos	6.325	
Votos emitidos	6.115	100,00%
Votos válidos	5.260	86,02%
Votos nulos	316	5,17%
Votos en blanco	539	8,81%

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN

SI	3.151	59,90%
NO	2.109	40,10%
Abstención	210	3,32%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

DEPARTAMENTO DE ORURO*

DETALLE	MUNICIPIO DE SALINAS DE GARCÍ MENDOZA		MUNICIPIO DE CHIPAYA		MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS		MUNICIPIO DE TOTORA		MUNICIPIO DE PAMPA AULLAGAS	
	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE
Ciudadanos inscritos	3.140		723		2.471		2.216		1.118	
Votos emitidos	3.001	100,00%	470	100,00%	2.342	100,00%	2.156	100,00%	1.094	100,00%
Votos válidos	2.726	90,84%	433	92,13%	2.052	87,62%	1.969	91,33%	986	90,13%
Votos nulos	75	2,50%	7	1,49%	90	3,84%	60	2,78%	34	3,11%
Votos en blanco	200	6,66%	30	6,38%	200	8,54%	127	5,89%	74	6,76%

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN

SI	2.047	75,09%	397	91,69%	925	45,08%	1.467	74,50%	825	83,67%
NO	679	24,91%	36	8,31%	1.127	54,92%	502	25,50%	161	16,33%
Abstención	139	4,43%	253	34,99%	129	5,22%	60	2,71%	24	2,15%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ*

MUNICIPIO DE CHARAGUA		
DETALLE	TOTAL	PORCENTAJE
Ciudadanos inscritos	7.869	
Votos emitidos	7.435	100,00%
Votos válidos	6.858	92,24%
Votos nulos	223	3,00%
Votos en blanco	354	4,76%

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN

SI	3.817	55,66%
NO	3.041	44,34%
Abstención	434	5,52%

* Elaboración propia en base al cómputo oficial entregado por la Corte Nacional Electoral.

Si bien la CPE no establece ningún parámetro poblacional de autoidentificación indígena originario campesina para la convocatoria a referendo y en base a ese parámetro medir sus resultados; los cuadros muestran una interesante concordancia y en otros casos contradicción entre la autoidentificación (según el censo 2001) indígena originaria campesina de la población y los resultados alcanzados en el referendo de estos municipios.

AUTOIDENTIFICACIÓN INDÍGENA DE LA POBLACIÓN (Según Censo 2001)*

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	POBLACIÓN TOTAL	PORCENTAJE
CHUQUISACA	TARABUCO	19554	93,40%
	MOJOCOYA	7926	94,58%
	HUACAYA	2345	63,77%
LA PAZ	CHARAZANI	9161	96,62%
	JESÚS DE MACHACA	13247	95,73%
POTOSÍ	CHAYANTA	14165	97,85%
ORURO	SALINAS DE GARCI MENDOZA	8723	95,59%
	CHIPAYA	1814	97,08%
	CURAHUARA DE CARANGAS	5278	92,73%
	TOTORA	4941	97,15%
	PAMPA AULLAGAS	2975	98,39%
SANTA CRUZ	CHARAGUA	24427	67,02%

*Elaboración propia en base a datos tomados del texto "Autonomías Indígenas en las Tierras Altas", Gonzalo Choque, IDEA Internacional, La Paz, 2009.

De los 12 Municipios en los que se convocó a referendo, de acuerdo al Censo 2001, en 10 de ellos existiría una autoidentificación indígena de la población por encima del 92%, a excepción del Municipio de Huacaya 63,77% y Charagua 67,02%.

En la mayoría de los casos existe una correspondencia razonable entre la identificación indígena de su población con el porcentaje que votó afirmativamente para la adopción de la cualidad indígena originaria campesina de su municipio. Sin embargo existen otros municipios que muestran una evidente contradicción; tal el caso de Jesús de Machaca donde pese a que el 95,73% del total de su población se autoidentificó, en el Censo 2001, como indígena originario campesino, el porcentaje que apoyó la conversión a indígena de su municipio apenas alcanzó al 56,09%; lo mismo sucedió en el Municipio de Chayanta.

En el caso de Padcaya, el 63,77% de su población se autoidentificó con algún pueblo o nación indígena originaria campesina, de ahí que parece razonable que el SÍ obtuviera un resultado poco contundente, 53,66%.

Pero la mayor contradicción se evidenció en el Municipio de Curahuara de Carangas donde pese a que un 92,73% del total de su población, en el Censo 2001, se autoidentificó indígena originario campesino; en el referendo del 6 de diciembre, la mayoría rechazó la adopción de la cualidad indígena originaria campesina para este municipio obteniendo el no un 54,92%.

¿Será razonable que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regule esta relación porcentual entre autoidentificación indígena y población que se pronuncie, a favor o en contra en referendo, para adoptar la condición de Municipio Indígena Originario Campesino? Al menos es un aspecto que ameritaría debatirlo.

La polémica incorporación de la pregunta sobre autopertenencia y autoidentificación étnica, en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, ha dado lugar a críticas en sentido de que dicha autoidentificación enmascaró una realidad mestiza no contemplada en dicho censo como afirma Moira Zuazo: “La Pregunta⁹ por la pertenencia como se planteó en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 nos

9. La pregunta 49 del Censo 2001 decía: “¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas: Quechua, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Mojeño, Otro nativo, Ninguno? Ver: “Identidad étnica y democracia en la Bolivia contemporánea”, Moira Zuazo en *Democracia y teoría política en movimiento*, Luis Tapia (Coordinador), CIDES, 2009, La Paz.

está mostrando el reconocimiento del origen y un orgullo por el origen como una de las características del grupo mestizo, pero no una condición indígena”. Por otro lado ha dado pie también a reivindicar los resultados del Censo 2001 con afirmaciones como la siguiente: “El resultado fue una cifra espectacular: 63% de la población se identificó como indígena. Con eso salió a luz pública y se hizo oficial lo que todos ya sabíamos: Bolivia es un país mayoritariamente indígena”¹⁰. Sea cual fuere la interpretación que se pueda dar al resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 lo evidente es que el 62,42% de la población censada el año 2001 ya vivía en el área urbana; habrá que esperar los resultados del próximo censo que deberá realizarse el próximo año, y seguramente el proceso de urbanización de la población se habrá incrementado. Para el próximo Censo valdría la pena abrir un debate nacional sobre la pertinencia de mantener la boleta censal con la pregunta sobre la autoidentificación o pertenencia con algún pueblo originario o indígena incorporando la variable mestiza. Parece razonable esperar los resultados del próximo censo, que implicará para las Entidades Territoriales Autónomas, especialmente municipales, no sólo la posibilidad de mayores recursos por Coparticipación tributaria, sino que posiblemente repercutirá también sobre la cantidad de población que responda por alguna de las opciones a preguntarse en el próximo censo.

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTATUTOS AUTONÓMICOS Y CARTAS ORGÁNICAS

Para abordar en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización los aspectos referidos a las normas básicas institucionales (Estatutos y Cartas Orgánicas) de las Entidades Territoriales Autónomas hay que remitirse a los alcances y límites establecidos en el siguiente artículo de la CPE:

“Artículo 271. I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas...”

Para ello la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá considerar las experiencias ya desarrolladas por algunas Entidades territoriales Autónomas, tal el caso del Gobierno Municipal de La Paz

¹⁰ Gonzalo Colque Fernández, “Autonomías Indígenas en las Tierras Altas”, Idea International, La Paz, 2009.

que encaró durante el año 2009 una experiencia participativa exitosa en la elaboración de su Anteproyecto de Carta Orgánica que dio como resultado un Documento Referencial de Carta Orgánica aprobado por la II Asamblea de la Ciudad que deberá ser transformado en el Proyecto de Carta Orgánica y aprobado por el Concejo Municipal entrante, remitirlo a control de Constitucionalidad y luego ser sometido a referendo para que, de ser aprobado por la ciudadanía, entrar plenamente en vigencia. Otra experiencia a tomar en cuenta es el proceso iniciado por la Prefectura del Departamento de La Paz que hizo lo propio con la propuesta de Estatutos Autonómicos para el futuro Gobierno Autónomo Departamental de La Paz elegido el 4 de abril, el mismo que deberá seguir la misma ruta de aprobación.

Estas y otras experiencias deberán servir de referencia para insertar en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización los procedimientos participativos que deberán seguir aquellas Entidades Territoriales Autónomas que todavía no empezaron su proceso de elaboración de sus respectivas Normas Básicas Institucionales.

4. ACREDITACIÓN, TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN COMPETENCIAL

Para la definición en la Ley Marco de Autonomías de la acreditación, transferencia y delegación competencial se deberá considerar el catálogo de las 199 competencias distribuidas entre todos los niveles del Estado en los artículos 298 al 304 de la CPE que han sido ordenados en el “Catálogo de Competencias distribuido por Materia según la CPE” que se publica en el Anexo 3 al final de este libro.

En el tema competencial, además de los artículos señalados donde se especifica las competencias del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, es preciso remitirse también a los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.
2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.
3. Concurrentes, aquellas

en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.

Artículo 300. ... II. Los Estatutos Autonómicos Departamentales podrán a su vez definir como concurrentes algunas de sus competencias exclusivas, con otras entidades territoriales del departamento. III. Serán también de ejecución departamental las competencias que le sean transferidas o delegadas.

Artículo 302. ... II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o delegadas.

Artículo 303. I. La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. II. La región indígena originario campesina, asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas”.

En el tema de transferencia y delegación competencial la LMAD deberá regular, entre otros, mínimamente los siguientes aspectos:

- ✓ **Tipología competencial y armonización legislativa.** A partir de la definición de los cuatro tipos de competencias establecida en la CPE, la LMAD deberá desarrollar las mismas y establecer los criterios que deberán considerarse tanto por el nivel Central del Estado como por las ETAs a fin de armonizar el desarrollo legislativo especialmente de aquellas competencias exclusivas cuya formulación implica legislar en el ámbito de su jurisdicción una misma materia; como sucede por ejemplo con la materia de turismo. Para una mejor visualización de estas competencias y su necesario proceso de armonización legislativa con las competencias de los otros niveles del Estado ver el Anexo 3 Catálogo de Competencias distribuidas por Materia de acuerdo a la CPE, al final de este mismo libro.

- ✓ **Ejercicio del Principio de Gradualidad** estableciendo que las competencias exclusivas conferidas en la CPE a todos los niveles territoriales podrán ser ejercidas en su totalidad o de manera parcial, sujeto a: medición de la capacidad institucional; cálculo de costo de las competencias asumidas; y definición de recursos económicos a desarrollarse en el capítulo referido al régimen económico financiero.
- ✓ **Metodología** a seguir para la transferencia de las competencias concurrentes y compartidas catalogadas de ésta manera en la CPE.
- ✓ **Metodología** a seguir para delegar o transferir aquellas funciones competenciales de reglamentación y ejecución que el portador de la Competencia Exclusiva, sea del nivel central del Estado o de las Entidades Territoriales Autónomas, decida delegar o transferir a los otros niveles en su respectiva legislación.

Lo ideal sería que esta parte de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización sea resultado de un PACTO COMPETENCIAL entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, ojalá que el tiempo que dispone la Asamblea Legislativa Plurinacional sea suficiente para lograr esto.

5. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

El régimen económico financiero a regularse en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá considerar lo estipulado en los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 304. (De las competencias de las autonomías indígena originario campesinas) ...IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán transferidos automáticamente por el Estado Plurinacional de acuerdo a la ley.

Artículo 305. Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.

Artículo 321. I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de

planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste. V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente. III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponible sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos

departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. **2.** No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. **3.** No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. **4.** No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

Artículo 340. **I.** Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales, e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos. **II.** La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinos. **III.** Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional. **IV.** El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías.

Artículo 341. Son recursos departamentales: **1.** Las regalías departamentales creadas por ley; **2.** La participación en recursos provenientes de impuestos a los Hidrocarburos según los porcentajes previstos en la Ley. **3.** Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los recursos naturales. **4.** Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social; **5.** Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos establecidos en el artículo 339.I de esta Constitución. **6.** Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. **7.** Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos. **8.** Los legados, donaciones y otros ingresos similares”.

Por tanto y a partir de lo establecido en la CPE, el régimen económico financiero a desarrollarse en la LMAD deberá referirse al menos a los siguientes aspectos:

- ✓ Disposiciones generales y principios
- ✓ Transparencia en la Gestión Fiscal Financiera
- ✓ Seguridad Jurídica en los actos Administrativos y Financieros. Las acciones y decisiones que se tome dentro del régimen patrimonial, fiscal y financiero, deberán circunscribirse al ordenamiento jurídico establecido por las Entidades Territoriales Autónomas y por el nivel central del Estado cuando corresponda.
- ✓ Rendición de Cuentas a la Comunidad
- ✓ Equilibrio Fiscal. Los compromisos financieros que se asuman no deberán estar por encima de la capacidad de sostenerlos en el presente y futuro.
- ✓ **Orientación de la inversión pública.** La orientación de la inversión pública, debe estar destinada a la generación de condiciones y mecanismos necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad social, atendiendo prioritariamente a grupos socialmente excluidos; dando prioridad en la asignación presupuestaria a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo (Art. 321, II, CPE).
- ✓ Control y Sencillez Administrativa. La formulación de las normas y procedimientos fiscales deben caracterizarse por su claridad y precisión para el mejor entendimiento de la ciudadanía.
- ✓ Igualdad de Género. La formulación de políticas en el régimen patrimonial, fiscal y financiero deberá reducir las desigualdades y la discriminación de género, que provean y garanticen condiciones y oportunidades análogas, para que los hombres y mujeres ejerzan sus derechos humanos en igualdad de condiciones.
- ✓ Universalidad. Las normas y políticas tributarias deberán ser de aplicación obligatoria en la jurisdicción que corresponda.
- ✓ Clasificación y disposición del PATRIMONIO Y BIENES de las Entidades Territoriales Autónomas: Bienes de dominio público; Bienes de Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico; Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional.

- ✓ **RECURSOS de las Entidades Territoriales Autónomas**
 - Ingresos Tributarios: Impuestos; Tasas; Patentes y Contribuciones Especiales.
 - Ingresos No Tributarios.
 - Transferencias del Nivel Central del Estado. Constituidos por aquellos ingresos provenientes del nivel Central del Estado destinados a cubrir y garantizar la ejecución de las competencias transferidas o delegadas por la CPE y la Ley a las ETAs, eliminando las diferencias en la capacidad de generación de ingresos y buscando evitar la exclusión de los grupos sociales menos favorecidos, definidos en la normativa nacional: Coparticipación de la recaudación tributaria nacional; Coparticipación de la recaudación del régimen aduanero; Recursos de la explotación de Recursos Naturales; Recursos de políticas de compensación y equidad en la distribución; Recursos de condonaciones de deuda; Recursos de emergencia destinados a la atención de desastres naturales, calamidades públicas, conmoción interna o agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños; Transferencias IDH; y Otros Recursos.
 - Donaciones y legados a favor de las Entidades Territoriales Autónomas. Son aquellos ingresos provenientes de transferencias gratuitas, de personas, instituciones públicas, instituciones privadas y de organismos internacionales, por lo que pueden ser donaciones externas o internas.
 - Operaciones de Crédito. Son aquellos ingresos provenientes de la contratación de deuda que se puede adquirir sea con el sector público y/o privado, con agentes, instituciones o personas nacionales o extranjeras
 - Regalías por: Hidrocarburos, minerales, forestales y otros que establezca la ley.
- ✓ **GASTOS de las Entidades Territoriales Autónomas: Definición. Programación del Gasto. Tipos de gasto (Gasto Corriente, Gasto de Inversión, y Gasto de Endeudamiento). Límite del Gasto de Funcionamiento. Políticas de gasto de Inversión. Límites de Endeudamiento. Otros.**
- ✓ **TIPO, COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA: Definición. Composición de la Deuda. Origen de la Deuda Pública**

- ✓ ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA: Régimen Tributario; Ámbito Territorial de Aplicación. Administración Tributaria de las ETAs. Alcance y Dominio de las ETAs. Registros Tributarios de las ETAs.
- ✓ PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD: Formulación del Presupuesto. Aprobación del Presupuesto. De la Programación y Ejecución Presupuestaria. Contabilidad de las ETAs.
- ✓ MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO: Auditoría interna. Auditorías Externas. Auditorías Forenses. Contraloría General de la República.

Al igual que el capítulo de asignación competencial, es deseable que el régimen económico financiero, a insertarse en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, sea resultado del PACTO FISCAL entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

6. COORDINACIÓN ENTRE EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

La LMAD deberá establecer las instancias de coordinación entre el nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas; y entre las ETAs. Habrá necesidad de un Consejo Nacional Autonómico y de Consejos Departamentales Autonómicos. Esta Ley deberá establecer los aspectos que se tratarán en las instancias a crearse y el carácter de sus deliberaciones. La composición de las mismas y su funcionamiento.

Considero fundamental que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización instituya el funcionamiento de una necesaria instancia de coordinación entre la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de las Comisiones de Organización Territorial del Estado y Autonomías tanto de la Cámara de Diputados como Senadores, y las Asambleas Departamentales, Regionales y Concejos Municipales; que como legisladores en sus respectivas instancias son los llamados a encarar la armonización legislativa que se requerirá a fin de resolver seguras controversias competenciales que se presentarán especialmente al momento de elaborar y aplicar no solo la LMAD, los Estatutos y Cartas Orgánicas sino también la demás legislación que deberán elaborar las

Entidades Territoriales Autónomas y Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente en el marco de sus respectivas competencias exclusivas.

7. MANCOMUNIDADES Y SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

Será preciso insertar en la Ley Marco de Autonomías un capítulo especial referido al sistema mancomunado entre Entidades Territoriales Autónomas considerando el artículo 273 de la CPE que expresamente excluye de esta posibilidad de conformar mancomunidades entre Departamentos:

“Artículo 273 La ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y territorios indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos”.

La potencialidad favorable a los procesos de gestión y planificación territorial, que implican las Mancomunidades entre Entidades Territoriales Autónomas Municipales e Indígena Originarias Campesinas, deberá estar ampliamente desarrollada en la LMAD. Se deberá definir el alcance jurídico de las mancomunidades como sujetos de derecho público y privado para una mayor y amplia cobertura de su trabajo.

De las varias posibilidades y motivaciones para conformar mancomunidades, sea para propósito específico y circunstancial o para encarar programas concurrentes de mayor envergadura; considero fundamental ligar la emergencia de las mancomunidades entre Unidades Territoriales Municipales que coinciden con el concepto de región como espacio de planificación y gestión territorial; las mancomunidades regionales son las que hacia adelante tendrán una mayor sustentabilidad; superando la todavía poca consistencia que han tenido las experiencias mancomunadas en los últimos años.

En lo que se refiere al Sistema Asociativo, la LMAD debería desarrollar y determinar el marco referencial para el reconocimiento y funcionamiento del Sistema Asociativo Municipal, para fortalecer la importante labor que ha realizado y debe realizar la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y las Asociaciones Municipales de cada Departamento (AMDs).

De no desarrollarse este aspecto en la LMAD se requeriría otra Ley para este propósito.

8. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Si bien se requerirá una ley específica para regular todo el proceso de participación y control social en base a los preceptos constitucionales; la LMAD deberá limitarse a la aplicación marco de dichos preceptos en las Entidades Territoriales Autónomas dando el suficiente espacio normativo a sus respectivas normas básicas institucionales (Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas).

La LMAD deberá establecer los parámetros marco aplicando especialmente lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 242 de la CPE: “....3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas”.

La Participación y control social está constitucionalizada (Arts. 241 y 242 de la CPE) y sus preceptos deberá ser aplicados y desarrollados en las normas básicas institucionales (Estatutos y Cartas Orgánicas) de acuerdo a la realidad de cada Unidad Territorial sea Municipal, Regional o Departamental.

9. FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Las Asambleas Departamentales, regionales y Concejos Municipales son las instancias llamadas a ejercer plenamente la labor de fiscalización a sus respectivos Órganos Ejecutivos; para ello la LMAD debería establecer los marcos referenciales para esta labor. Sin perjuicio de esta fundamental labor de los Órganos Deliberantes, Fiscalizadores y Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, la LMAD deberá establecer los mecanismos de control gubernamental que se aplicarán a éstas. Más allá de que será necesario trabajar a la brevedad posible la nueva Ley de Administración y Control Gubernamental, la LMAD deberá precisar los procedimientos mínimos que hacen al control gubernamental como la obligación de remitir información regular de la ejecución presupuestaria y estados financieros al ente competente del nivel central del Estado; así como regular con mayor precisión algunos mecanismos de control gubernamental como es el caso de inhabilitación de cuentas fiscales ante el incumplimiento de deberes formales establecidos en la Ley o derivadas de conflictos de gobernabilidad.

10. ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Lo que mínimamente corresponde es que la LMAD desarrolle con claridad el alcance de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecida en los siguientes preceptos constitucionales, sin perjuicio de la tarea de fiscalización que le corresponde a las Asambleas Departamentales, Regionales y Concejos municipales:

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:...
17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas....19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.
20. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado”.

Por otro lado la LMAD podría elevar a rango de esta Ley lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, desarrollando los procedimientos a seguir y los alcances de lo contemplado en dicho reglamento, que al respecto señala:

“Artículo 23° (Derechos Parlamentarios). Las Diputadas y los Diputados Nacionales, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, tendrán los siguientes derechos:... **b) Derecho de Fiscalización:** Las Diputadas y los Diputados Nacionales, a través de los órganos de la Cámara pueden requerir a ...Máximas Autoridades de los Gobiernos Autónomos de las Entidades Territoriales ..., informes escritos u orales con fines legislativos, de información o fiscalización, así como proponer investigaciones sobre todo asunto de interés público....

MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Artículo 127° (Naturaleza y objeto). Las Minutas de Comunicación son recomendaciones...[a los] Gobiernos Autónomos de las Entidades territoriales....

PETICIONES DE INFORME ESCRITO

Artículo 135° (Naturaleza y Objeto). ...Las y los diputados, a través de las Comisiones de la Cámara, podrán solicitar informes escritos a las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Gobiernos Autónomos de las entidades territoriales... con fines de información, investigación y legislativos.

PETICIÓN DE INFORME ORAL

Artículo 139° (Naturaleza y Objeto). Las Diputadas o Diputados a través de las Comisiones de la Cámara podrán solicitar informes orales a las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Gobiernos Autónomos de las Entidades Territoriales... con fines de información, investigación y legislativos”.

11. DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y ABROGATORIAS

Como una disposición final se debería aclarar que si bien la CPE prevé en su artículo 274 que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”; y habiéndose ya efectuado los referendos en todos los departamentos cuyos resultados determinaron en todos los casos el acceso al régimen autonómico para transformar las Prefecturas de Departamento en Gobiernos Autónomos Departamentales; no habría necesidad de regular un régimen de descentralización departamental en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Como disposiciones transitorias se debería prever procedimientos que faciliten la transición administrativa especialmente de las viejas Prefecturas a la nueva razón social y estructura de las Gobernaciones.

La LMAD deroga al menos la Ley 1654 de Descentralización Administrativa y la Ley 1551 de Participación Popular, dando fin de esta manera a un ciclo de descentralización que en realidad fue una mera desconcentración del Ejecutivo Nacional a nivel departamental, y una Autonomía Municipal insuficiente, para dar curso a la implementación efectiva del Estado descentralizado y con autonomías establecido en la CPE.

VIII. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN

Además de legislar que es su principal responsabilidad, los y las asambleístas miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos la obligación y el derecho de fiscalizar, informarnos e investigar sobre asuntos que sean de interés público. No se vaya a pensar que la tarea de fiscalización sólo corresponde a la bancada opositora, pues considero que la bancada mayoritaria tiene el doble compromiso moral de cumplir sus obligaciones y derecho constitucional de ejercer también sus tareas de fiscalización.

Debemos entender las acciones de fiscalización como aquellas que no sólo están orientadas a investigar actos de corrupción y que las mismas sean penalizadas de acuerdo a la CPE y la Ley, sino también la labor de fiscalizar significa incidir sobre el cumplimiento de obligaciones y funciones para las que han sido elegidas, designadas o contratadas los servidores públicos y las servidoras públicas. La tarea de fiscalización no se limita a contribuir en la lucha contra la corrupción sino también contribuir con los resultados programados por servidores públicos y servidoras públicas.

Para ello la Constitución Política del Estado le dota a la Asamblea Legislativa de un conjunto de instrumentos en el marco de sus atribuciones que deberán utilizarse para este propósito. Así tenemos atribuciones para incidir en la gestión y orientación de la inversión pública a través de las siguientes disposiciones constitucionales que hacen a la gestión pública:

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:...7. Aprobar el plan de desarrollo económico y social presentado por el Órgano Ejecutivo. 8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.... 10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos. 11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado. 12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo. 13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”.

Será muy importante que el Órgano Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Plan de Desarrollo Económico Social que no es otro que el Plan Nacional de Desarrollo ajustado al programa de gobierno presentado por el Presidente Evo Morales, durante la campaña para las Elecciones Generales del 6 de diciembre del 2009, y que contó con el respaldo de más del 64% de la ciudadanía; por lo que velar por su efectiva implementación debería ser uno de sus objetivos político, ideológico y programático de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco precisamente de sus atribuciones fiscalizadoras. Como manda la Constitución la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá contribuir, enriquecer y aprobar dicho plan para su implementación en beneficio de nuestra comunidad.

Adicionalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene las siguientes atribuciones fiscalizadoras, de control, de interpelación, de investigación e iniciar procesos acusatorios, de acuerdo a los siguientes preceptos constitucionales:

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:... 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. 18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las

Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro. 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes. 20. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.

Artículo 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley:...11. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:...6. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley.

Artículo 161. Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución:...7. Autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta o del Presidente, o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”.

En base a las atribuciones contempladas en la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de activar una serie de acciones de fiscalización cuyos procedimientos están ampliamente desarrollados en sus Reglamentos, específicamente en el Reglamento General de la Cámara de Diputados se establece lo siguiente:

Artículo 23° (Derechos Parlamentarios). Las y los Diputados Nacionales, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, tendrán los siguientes derechos:...**b) Derecho de Fiscalización:** Las y los Diputados Nacionales, a través de los órganos de la Cámara, pueden requerir a los Ministerios y entidades del Órgano Ejecutivo, del Órgano Judicial y del Órgano Electoral, a la contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General del

Estado, a la Procuraduría General del Estado, Máximas Autoridades de los Gobiernos Autónomos de las entidades territoriales y las Universidades Públicas, informes escritos u orales con fines legislativos, de información o fiscalización, así como proponer investigaciones sobre todo asunto de interés público. Asimismo podrán fiscalizar a las empresas públicas o mixtas en las cuales tenga participación el Estado”.

Finalmente, en el mismo Reglamento General de la Cámara de Diputados se establecen los procedimientos a seguir para activar las acciones de Interpelación de acuerdo al siguiente artículo de dicho Reglamento:

“Artículo 144° (Naturaleza y Objeto). Cualquier Diputada o Diputado podrá plantear una interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las Ministras o Ministros del Órgano Ejecutivo para obtener la remoción de la autoridad interpelada y la modificación de políticas que considere inadecuadas. Para ello, presentará un pliego interpelatorio a la Presidencia de la Cámara, con determinación de la materia y objeto”.

Al respecto de la facultad de interpelación a las Ministras o Ministros de Estado la Constitución Política del Estado establece la siguiente atribución:

“Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:...18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.

IX. NUEVA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL: AUTORIDADES A DESIGNAR POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL Y OTRAS ATRIBUCIONES EXPRESAS

Luego de la debacle institucional del viejo sistema político partidocrático, que devino en el cuoteo de las diversas instituciones del Estado, provocando una pérdida absoluta de institucionalidad y legitimidad de las más importantes instituciones que en todo Estado, moderno y democrático, son la base de la construcción de ciudadanía universal, que pasa por que las instituciones del estado gocen de credibilidad y fortaleza institucional. De las cenizas del viejo Estado partidocrático, centralista, monocultural, excluyente, adultocentrista, sexista y neoliberal; urge reconstruir la institucionalidad estatal con la designación constitucional de las autoridades de diversos Órganos del Estado y Entidades Públicas fundamentales, para una implementación democrática de la Constitución Política del Estado.

A continuación detallamos las autoridades que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe designar, preseleccionar o definir ternas.

1. ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Una vez aprobada la Ley del Órgano Electoral Plurinacional en los 180 días a partir de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir hasta el 22 de julio del presente año, se deberá elegir a los miembros del Órgano Electoral Plurinacional de acuerdo a lo estipulado por los siguientes artículos de la CPE:

“Artículo 158. Son atribuciones de la Asamblea: ...4. Elegir a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional, por dos tercios de votos de sus miembros presentes.

Artículo 206. ...III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros presentes, elegirá a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. La Presidenta o el Presidente del Estado designará a uno de sus miembros”.

2. TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES

Los Tribunales Electorales Departamentales son parte integrante del Órgano Electoral Plurinacional, las mismas que, una vez elegidos en los nueve Departamentos las Asambleas Legislativas Departamentales, en las elecciones del 4 de abril de 2010, y se tenga aprobada la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, las Asambleas Legislativas Departamentales deberán seleccionar una terna para cada uno de los vocales para que, de dichas ternas, sea la Cámara de Diputados la que proceda a elegir a los miembros de estos Tribunales de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la CPE:

“Artículo 206. ...V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o Consejos Departamentales seleccionarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes, una terna por cada uno de los vocales de los Tribunales Departamentales Electorales. De estas ternas la Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los Tribunales Departamentales Electorales, por dos tercios de votos de los miembros presentes, garantizando que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Departamento”.

3. PRESELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

El cambio estructural de la justicia en el Estado Plurinacional estará marcado por la preselección de candidatos y candidatas a ocupar las máximas responsabilidades de conducción de estos tribunales del Órgano Judicial y la posterior elección por sufragio universal de acuerdo al siguiente artículo de la CPE:

“Artículo 158. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: ...5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la

conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

La CPE desarrolla para cada Tribunal sus atribuciones, funciones y forma de elección de acuerdo a los siguientes artículos:

3.1. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

“Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley.

Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral. III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos. IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos. VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos”.

3.2. TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

“Artículo 188. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia...”.

3.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

“Artículo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”.

4. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEBERÁ PRESELECCIONAR A POSTULANTES AL CONTROL ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA O CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Para el caso del Consejo de la Magistratura habría alguna dificultad en la denominación y forma de elección, pues la CPE en su artículo 158 inciso 5, establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional la preselección a las candidatas y a los candidatos del Consejo de la Magistratura, reiterando lo mismo en el artículo 194 inciso I; sin embargo en el artículo 159 como atribuciones de la Cámara de Diputados esta la preselección a los postulantes al Control Administrativo de Justicia. Debemos suponer que ambas denominaciones se refieren al mismo tribunal y que la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional se la efectivizará en este caso a través de la Cámara de Diputados:

“Artículo 158. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: ...5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Artículo 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley: ... 13. Preseleccionar a los postulantes al Control Administrativo de Justicia y remitir al Órgano Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.

Artículo 194. I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional...”.

5. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEBE PROPONER AL PRESIDENTE TERNAS PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES DE ENTIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES, Y OTROS CARGOS EN QUE PARTICIPE EL ESTADO

Se entendería por “entidades económicas y sociales, y otros cargos” a las siguientes entidades: Aduana Nacional, YPFB, ABC, Impuestos Internos, CNSS, entre otras.

“**Artículo 159.** Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley: ...12. Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución”.

6. CONTRALORA O CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

“**Artículo 214.** La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.

7. DEFENSORA O DEFENSOR DEL PUEBLO

“**Artículo 220.** La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.

8. LA FISCAL O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

“Artículo 227. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público...”.

9. OBJETAR EL NOMBREMIENTO PRESIDENCIAL DE PROCURADORA O PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

“Artículo 230. ...II. La designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. **III.** La designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada”.

10. TERNAS PARA EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL

“Artículo 329. I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos...”.

11. TERNA DE LA INSTITUCIÓN DE REGULACIÓN DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

“Artículo 332. I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. **II.** La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley”.

12. REPRESENTANTES DE BOLIVIA ANTE ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá resolver mediante Ley el procedimiento a seguir para dar cumplimiento al siguiente precepto constitucional:

“Artículo 266. Las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración se elegirán mediante sufragio universal”.

OTRAS ATRIBUCIONES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CONTEMPLADAS EN LA CPE

1. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATOS REFERIDOS A ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.

“Artículo 362. I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado. **II.** Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna”.

2. CONVOCATORIA A REFERENDO PARA ACTIVAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

“Artículo 411. I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte

por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

3. LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“**Artículo 411.** ...II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

ANEXO 1

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2009

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 2009*

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	NACIONALES Y VOTOS EN EL EXTERIOR		RESULTADO VOTOS EN EL EXTERIOR CÓMPUTO PARA PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	
	TOTAL	%	TOTAL	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (FPB-CONVERGENCIA)	1.212.795	26,46	22.192	18,44
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (PULSO)	12.995	0,28	360	0,30
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIÓTICA (MUSPA)	23.257	0,51	1.428	1,19
ALIANZA PARA LA REFUNDACION DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	2.943.209	64,22	91.213	75,77
BOLIVIA SOCIAL DEMOCRATA (BSD)	9.905	0,22	196	0,16
GENTE	15.627	0,34	239	0,20
ALIANZA SOCIAL (AS)	106.027	2,31	1.075	0,89
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CF)	258.971	5,65	3.672	3,05
Votos válidos	4.582.786	94,31	120.375	96,22
Votos nulos	120.364	2,48	3.525	2,82
Votos en blanco	156.290	3,22	1.201	0,96
Votos emitidos	4.859.440	100,00	125.101	100,00
Ciudadanos inscritos	5.139.554		169.096	
Abstención	280.114	5,45	43.995	26,01

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES VOTOS EN EL EXTERIOR 2009

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	ARGENTINA	%	BRASIL	%	ESPAÑA	%	ESTADOS UNIDOS	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (FPB-CONVERGENCIA)	2.039	3,19	379	2,73	14.179	43,04	5.055	61,04
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (PULSO)	151	0,24	10	0,07	169	0,49	30	0,36
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIÓTICA (MUSPA)	1.040	1,63	54	0,39	301	0,88	33	0,40
ALIANZA PARA LA REFUNDACIÓN DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	58.959	92,13	13.196	94,95	16.487	48,21	2.571	31,05
BOLIVIA SOCIAL DEMÓCRATA (BSD)	101	0,16	15	0,11	61	0,18	19	0,23
GENTE	149	0,23	19	0,14	66	0,19	5	0,06
ALIANZA SOCIAL (AS)	647	1,01	46	0,33	320	0,94	62	0,75
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CF)	911	1,42	179	0,07	2.076	6,075	506	6,11
Votos válidos	63.997	96,23	13.898	97,27	34.199	95,68	8.281	96,68
Votos nulos	1.825	2,74	318	2,23	1.235	3,46	147	1,72
Votos en blanco	682	1,03	72	0,50	310	0,87	137	1,60
Votos emitidos	66.504	100,00	14.288	100,00	35.744	100,00	8.565	100,00
Ciudadanos inscritos	89.953		18.142		49.995		11.006	
Abstención	23.449	26,06	3.854	21,24	14.251	28,5	2.441	22,17

* Elaboración propia, en base al Acta de Cómputo Nacional, entregada por la Corte Nacional Electoral el 22 de Diciembre de 2009.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES A NIVEL NACIONAL 2009 (SIN VOTOS DEL EXTERIOR)

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	BOLIVIA	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (PPB-CONVERGENCIA)	1 190.603	26,68
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (PULSO)	12.635	0,28
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIOTICA (MUSPA)	21.829	0,49
ALIANZA PARA LA REFUNDACION DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	2 851.996	63,91
BOLIVIA SOCIAL DEMOCRATA (BSD)	9.709	0,22
GENTE	15.388	0,34
ALIANZA SOCIAL (AS)	104.952	2,35
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CF)	255.299	5,72
Votos válidos	4.462.411	94,26
Votos nulos	116.839	2,47
Votos en blanco	155.089	3,28
Votos emitidos	4.734.339	100,00
Ciudadanos inscritos	4.970.458	
Abstención	236.119	4,75

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	CHUQUISACA	%	LA PAZ	%	COCHABAMBA	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (PPB-CONVERGENCIA)	76.722	33,60	119.248	8,71	203.041	24,55
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (PULSO)	1.150	0,50	3.248	0,24	3.725	0,45
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIOTICA (MUSPA)	1.660	0,73	7.247	0,53	3.074	0,37
ALIANZA PARA LA REFUNDACION DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	127.995	56,05	1.099.259	80,28	569.237	68,82
BOLIVIA SOCIAL DEMOCRATA (BSD)	748	0,33	3.017	0,22	1.189	0,14
GENTE	1.202	0,53	5.810	0,42	2.617	0,32
ALIANZA SOCIAL (AS)	5.885	2,58	21.185	1,55	9.469	1,14
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CF)	12.998	5,69	110.292	8,05	34.804	4,21
Votos válidos	228.360	89,91	1.369.306	95,73	827.156	93,64
Votos nulos	6.806	2,68	28.667	2,00	24.481	2,77
Votos en blanco	18.826	7,41	32.339	2,26	31.721	3,59
Votos emitidos	253.992	100,00	1.430.312	100,00	883.358	100,00
Ciudadanos inscritos	267.701		1.481.037		922.618	
Abstención	13.709	5,12	50.725	3,42	39.260	4,26

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	ORURO	%	POTOSI	%	TARIJA	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (FPB-CONVERGENCIA)	20.170	8,99	13.238	4,25	85.840	38,28
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (FULSO)	666	0,30	945	0,30	599	0,27
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIOTICA (MUSPA)	1.603	0,71	1.678	0,54	1.373	0,61
ALIANZA PARA LA REFUNDACION DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	178.363	79,46	243.855	78,32	114.577	51,09
BOLIVIA SOCIAL DEMOCRATA (BSD)	450	0,20	983	0,32	636	0,28
GENTE	908	0,40	1.504	0,48	861	0,38
ALIANZA SOCIAL (AS)	8.431	3,76	41.767	13,42	3.847	1,72
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CP)	13.870	6,18	7.375	2,37	16.513	7,36
Votos válidos	224.461	94,36	311.345	90,59	224.246	92,00
Votos nulos	5.841	2,46	10.382	3,02	7.649	3,14
Votos en blanco	7.585	3,19	21.942	6,38	11.855	4,86
Votos emitidos	237.887	100,00	343.669	100,00	243.750	100,00
Ciudadanos inscritos	249.780		361.895		260.598	
Abstención	11.893	4,76	18.266	5,03	16.848	6,46

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN CIUDADANA O ALIANZA	SANTA CRUZ	%	BENI	%	PANDO	%
PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA-CONVERGENCIA NACIONAL (FPB-CONVERGENCIA)	567.974	52,60	85.631	53,15	18.739	51,07
PUEBLOS POR LA LIBERTAD Y SOBERANÍA (FULSO)	1.955	0,18	312	0,19	35	0,10
MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL PATRIOTICA (MUSPA)	4.670	0,43	462	0,29	62	0,17
ALIANZA PARA LA REFUNDACION DE BOLIVIA (MAS-IPSP)	441.705	40,91	60.671	37,66	16.334	44,51
BOLIVIA SOCIAL DEMOCRATA (BSD)	1.988	0,18	619	0,38	79	0,22
GENTE	1.963	0,18	458	0,28	65	0,18
ALIANZA SOCIAL (AS)	13.025	1,21	1.062	0,66	281	0,77
ALIANZA POR EL CONSENSO Y LA UNIDAD NACIONAL (UN-CP)	46.451	4,30	11.897	7,38	1.099	3,00
Votos válidos	1.079.731	95,40	161.112	94,04	36.694	95,87
Votos nulos	27.531	2,43	4.681	2,73	801	2,09
Votos en blanco	24.517	2,17	5.524	3,22	780	2,04
Votos emitidos	1.131.779	100,00	171.317	100,00	38.275	100,00
Ciudadanos inscritos	1.202.432		183.485		40.912	
Abstención	70.653	5,87	12.168	6,63	2.637	6,44

ANEXO 2

NÓMINA DE CIUDADANOS ELECTOS COMO SENADORES, DIPUTADOS PLURINOMINALES, DIPUTADOS UNINOMINALES Y DIPUTADOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA ORIGINARIO

NÓMINA DE CIUDADANOS ELECTOS COMO SENADORES,
DIPUTADOS PLURINOMINALES, DIPUTADOS
UNINOMINALES Y DIPUTADOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
ESPECIAL INDÍGENA ORIGINARIO

CHUQUISACA*

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	RENE OSCAR	MARTINEZ CALLAHUANCA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	HILDA	SAAVEDRA SERRANO
MAS-IPSP	2	TITULAR	NELIDA	SIFUENTES CUETO
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	IGNACIO ROMAN	MENDOZA PIZARRO
MAS-IPSP	3	TITULAR	DAVID	SANCHEZ HEREDIA
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	CINTHIA ROSSE MARY	TABOADA FRANCO
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	LUIS GERALD	ORTIZ ALBA
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	CLAUDIA JIMENA	TORRES CHAVEZ

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	MARIANELA	PACO DURAN
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	JUAN CARLOS	APAZA MACIAS
MAS-IPSP	2	TITULAR	EFRAIN	BALDERAS CHAVEZ
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	MARYLIN	PARTES AMACHUY
MAS-IPSP	3	TITULAR	FLORA	AGUILAR FERNANDEZ
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	RODOLFO	AVILES AYMA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	RENE	VIDAL LEON
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	VIRGINIA SEGUNDINA	RAMIREZ VEDIA
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	ARMINDA EPIFANIA	MORALES CALVIMONTES
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	JAIME	DELGADILLO VELASQUEZ

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 01	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	JUAN LUIS	GANTIER ZELADA
C. 01	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	CLAUDIA EVELYN	AMPUERO PADILLA
C. 02	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	PEDRO	MEDRANO REYES
C. 02	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	SIN SUPLENTE	
C. 03	MAS-IPSP	TITULAR	ELISEO	SESGO MOSTACEDO
C. 03	MAS-IPSP	SUPLENTE	LAURA	REYNA ZARATE
C. 04	MAS-IPSP	TITULAR	JUAN	BARRIGA MONTERO
C. 04	MAS-IPSP	SUPLENTE	ANA	RODAS CUELLAR
C. 05	MAS-IPSP	TITULAR	CARLOS	APARICIO VEDIA
C. 05	MAS-IPSP	SUPLENTE	VICENTA	ZABALA RENTERIA
C. 06	MAS-IPSP	TITULAR	IRINEO	CONDORI CARLOS
C. 06	MAS-IPSP	SUPLENTE	ESPERANZA	GUEVARA

* Elaboración propia, en base al Acta de Cómputo Nacional, entregada por la Corte Nacional Electoral

LA PAZ

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	ANA MARIA DE LAS NIEVES	ROMERO
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	ANGEL GONZALO JAVIER	HURTADO MERCADO
MAS-IPSP	2	TITULAR	EUGENIO	ROJAS APAZA
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	MARY CONSTANCIA	MEDINA ZABALETA
MAS-IPSP	3	TITULAR	MARTHA	POMA LUQUE
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	VICTOR	CASTRO GONZALES
MAS-IPSP	4	TITULAR	FIDEL ANDRES	SURCO CAÑASACA
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	ROSSEMERY	CARLO LUCAS

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	HECTOR ENRIQUE	ARCE ZACONETA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	ELIZABETH CRISTINA	SALGUERO CARRILLO
MAS-IPSP	2	TITULAR	GILDA ALCIRA	OPORTO BARROZO
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	EMILIO	RUFFO ROCHA
MAS-IPSP	3	TITULAR	WILFREDO	CALANI CHOQUE
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	MARIA	ALANOCA
MAS-IPSP	4	TITULAR	CARMEN LEONOR	RODRIGUEZ BOLAÑOS
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	ELIAS	QUELCA MAMANI
MAS-IPSP	5	TITULAR	JORGE ADALBERTO	CHOQUETARQUI JAHUIRCATA
MAS-IPSP	5	SUPLENTE	PAULINA	RODRIGUEZ HUARAS
MAS-IPSP	6	TITULAR	PATRICIA	MANCILLA MARTINEZ
MAS-IPSP	6	SUPLENTE	ANTONIO ELISEO	SUXO SUXO
MAS-IPSP	7	TITULAR	RODOLFO	CALLE INCA
MAS-IPSP	7	SUPLENTE	MARIBEL TERESA	VARGAS SARABIA
MAS-IPSP	8	TITULAR	JULIA	FIGUEREDO
MAS-IPSP	8	SUPLENTE	EUFREN CARLOS	TROCHE JIMENEZ
MAS-IPSP	9	TITULAR	DONATO RUBEN	CALLISAYA MAYTA
MAS-IPSP	9	SUPLENTE	LIDIA	PAUCARA MANCILLA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	ALEJANDRO NORTHON	ZAPATA AVENDAÑO
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	BLANCA CONSTANCIA	GONZALES RIOS
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	ANA MARIA	SEMPERTEGUI
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	ANDRES ROLANDO	ORTEGA TARIFA
UN-CP	1	TITULAR	RITA ELISABET	REYES LIMPIAS
UN-CP	1	SUPLENTE	WILLY	AGUILAR FEBRERO
UN-CP	2	TITULAR	JAIME ROLANDO	NAVARRO TARDIO
UN-CP	2	SUPLENTE	FLORA	OYARDO MAMANI

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 07	MAS-IPSP	TITULAR	SAMUEL DOMINGO	PAMURI MAMANI
C. 07	MAS-IPSP	SUPLENTE	BENANCIA	GUTIERREZ FLORES
C. 08	MSM/MAS-IPSP*	TITULAR	JAVIER EDUARDO	ZAVALETA LOPEZ
C. 08	MSM/MAS-IPSP	SUPLENTE	GABRIELA ROSARIO	MEDINA GARRON
C. 09	MSM/MAS-IPSP	TITULAR	FABIAN II	YAKSIC FERAUDY
C. 09	MSM/MAS-IPSP	SUPLENTE	BASILIA	VICTORIA QUISPE
C. 10	MSM/MAS-IPSP	TITULAR	MIRIAM MARCELA	REVOLLO QUIROGA
C. 10	MSM/MAS-IPSP	SUPLENTE	JOSE ANGEL	CALLAO JIMENES
C. 11	MAS-IPSP	TITULAR	OSVALDO GUILLERMO	TORREZ ARISACA
C. 11	MAS-IPSP	SUPLENTE	FELICIDAD	SUAZO
C. 13	MAS-IPSP	TITULAR	BENEDICTA	GARCIA
C. 13	MAS-IPSP	SUPLENTE	ROGELIO	MAYDANA APAZA
C. 14	MAS-IPSP	TITULAR	LUCIO	MARCA MAMANI
C. 14	MAS-IPSP	SUPLENTE	CAROL MIREYA	MONTAÑO ROCHA
C. 15	MAS-IPSP	TITULAR	ROBERTO	ROJAS HERRERA
C. 15	MAS-IPSP	SUPLENTE	ENRIQUETA	VILLARROEL POMA
C. 16	MAS-IPSP	TITULAR	HUGO	MUJICA AGUILAR
C. 16	MAS-IPSP	SUPLENTE	CARMEN SUSANA	TELLERIA QUISPE
C. 17	MAS-IPSP	TITULAR	LUCIO	HUAYCHO NINA
C. 17	MAS-IPSP	SUPLENTE	EVARISTA MARIA	MAYTA
C. 18	MAS-IPSP	TITULAR	JAVIER ADELIO	PAUCARA LLOJLLA
C. 18	MAS-IPSP	SUPLENTE	PASTORA	JOVE
C. 19	MAS-IPSP	TITULAR	DAVID	QUISPE BALBOA
C. 19	MAS-IPSP	SUPLENTE	GENARA JULIA	QUISBERT CUENTAS
C. 20	MAS-IPSP	TITULAR	QUINTIN	QUISPE CHURA
C. 20	MAS-IPSP	SUPLENTE	MERCEDES	MAMANI TRISTAN
C. 21	MAS-IPSP	TITULAR	MARTIN	QUISPE JULIAN
C. 21	MAS-IPSP	SUPLENTE	MARIA	TUPA LOVERA
C. 22	MAS-IPSP	TITULAR	SAMUEL	PLATA PLATA
C. 22	MAS-IPSP	SUPLENTE	DOMITILA ALCIRA	FLORES CORTEZ

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 2	MAS-IPSP	TITULAR	JORGE	MEDINA BARRA
C.E.I. 2	MAS-IPSP	SUPLENTE	BLANCA MARILIN	CARTAGENA CHUQUI

* El Movimiento Sin Miedo (MSM) participó de las elecciones del 6 de diciembre en "Alianza para la refundación de Bolivia" con el MAS - IPSP

COCHABAMBA

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	GONZALO ADOLFO RAMON	MENDOZA LEIGUE
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	CARMEN JULIETA	PEREDO MONTAÑO
MAS-IPSP	2	TITULAR	MARCELINA	CHAVEZ SALAZAR
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	JULIO CESAR	TORRICO PEÑARANDA
MAS-IPSP	3	TITULAR	JULIO	SALAZAR
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	NELLY	FERNANDEZ NEGRETE
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	BERNARD OSVALDO	GUTIERREZ SANZ
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	LENNY TERESA	ZACONETA CARDENAS

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	REBECA ELVIRA	DELGADO
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	SAMUEL	PEREIRA AGREDA
MAS-IPSP	2	TITULAR	JOSE RAUL	ALBORTA SILES
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	NORA	REVOLLO BALDERRAMA
MAS-IPSP	3	TITULAR	CECILIA LUISA	AYLLON
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	SAUL LIMBERT	GARABITO CONDORI
MAS-IPSP	4	TITULAR	JAVIER ADRIAN	SANTIVANEZ CAMACHO
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	CINDA	ROMERO
MAS-IPSP	5	TITULAR	IBONNE DAYSI	LUNA ZEBALLOS
MAS-IPSP	5	SUPLENTE	NESTOR	RIVERA SOLIS
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	MAURICIO RAMIRO ARTURO	MUÑOZ ENCINAS
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	GLADYS BLANCA	PRIETO MOREIRA
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	NORMA ALICIA	PIEROLA
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	APOLINAR	RIVERA MUÑOZ
PPB-CONVERGENCIA	3	TITULAR	JOSE HERNAN	PAREDES SANCHEZ
PPB-CONVERGENCIA	3	SUPLENTE	XIMENA NEVENCA	GRAGEDA ORELLANA

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 12	MAS-IPSP	TITULAR	OMAR	VELASCO PEREZ
C. 12	MAS-IPSP	SUPLENTE	CRESENCIA ALBERTA	PADILLA FLORES
C. 23	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	DAVID ANGEL	MEJIA GARECA
C. 23	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	NEYVA PAOLA IRMA	ZAPATA MONTAÑO
C. 24	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	JAVIER ALEX	OROZCO ROSAS
C. 24	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	MARIA ALEJANDRA	PRADO RICHTER
C. 25	MAS-IPSP	TITULAR	JUAN CARLOS	CLAROS RODRIGUEZ
C. 25	MAS-IPSP	SUPLENTE	NATIVIDAD	CHOQUE LAURA
C. 26	MAS-IPSP	TITULAR	EVARISTO	PEÑALOZA ALEJO
C. 26	MAS-IPSP	SUPLENTE	WILMA ALEJANDRINA	QUIROZ MERCADO
C. 27	MAS-IPSP	TITULAR	EUGENIO	LUNA QUINTANA
C. 27	MAS-IPSP	SUPLENTE	MIGUELINA	VILLARROEL LAFUENTE
C. 28	MAS-IPSP	TITULAR	JOSE FELIX	MENDIETA VILLARROEL
C. 28	MAS-IPSP	SUPLENTE	MARCELINA	VILLARROEL MARIN
C. 29	MAS-IPSP	TITULAR	ESTEBAN	RAMIREZ TORRICO
C. 29	MAS-IPSP	SUPLENTE	OLIVIA	REYES GARCIA
C. 30	MAS-IPSP	TITULAR	NELSON	VIRREIRA MENECEZ
C. 30	MAS-IPSP	SUPLENTE	JULIANA	MAMANI
C. 31	MAS-IPSP	TITULAR	PEDRO	GUTIERREZ CRUZ
C. 31	MAS-IPSP	SUPLENTE	ROBERTA	TINTA QUIROGA

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 3	MAS-IPSP	TITULAR	ELEUTERIO	GUZMAN ZELADA
C.E.I. 3	MAS-IPSP	SUPLENTE	LUISA	GUAGUASU ISATEGUA

ORURO

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	SANDRA LILIAN	SORIANO BASCOPE
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	JUAN	SALAMANCA VELASQUEZ
MAS-IPSP	2	TITULAR	ANDRES AGUSTIN	VILLCA DAZA
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	ROSARIO	APAZA CHAMBI
MAS-IPSP	3	TITULAR	ROXANA	CAMARGO FERNANDEZ
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	RICARDO FROILAN	AILLON ALVAREZ
MAS-IPSP	4	TITULAR	MARIO	CHOQUE GUTIERREZ
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	NELLY OLIMPIA	ANCASI TICONA

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	FREDDY GERMAN	HUAYTA VELIZ
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	ERIKA MARGOTH	MANARDY CANAVIRI
MAS-IPSP	2	TITULAR	MARIA MAGDALENA	CHUCA GUTIERREZ
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	DOROTEO	MARTINEZ QUINAYA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	FRANZ GROVER	CHOQUE ULLOA
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	ANGHELA	MEJIA MONTECINOS

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 32	MAS-IPSP	TITULAR	NELLY	NUÑEZ ZEGARRA
C. 32	MAS-IPSP	SUPLENTE	BENJAMIN	FLORES ONORI
C. 33	MAS-IPSP	TITULAR	MARCELO WILLIAM	ELIO CHAVEZ
C. 33	MAS-IPSP	SUPLENTE	GLISELDA MIRIAN	BLANCO APAZA
C. 34	MAS-IPSP	TITULAR	EVER LUCAS	MOYA ZARATE
C. 34	MAS-IPSP	SUPLENTE	CORNELIA	FLORES CHOQUE
C. 35	MAS-IPSP	TITULAR	EDGAR	CONTAJA HUAYTA
C. 35	MAS-IPSP	SUPLENTE	BEATRIZ FLORA	GUZMAN GOMEZ
C. 36	MAS-IPSP	TITULAR	JAIME	MEDRANO VEIZAGA
C. 36	MAS-IPSP	SUPLENTE	GUILLERMINA	ASTETE CHOQUEVILLCA

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 4	MAS-IPSP	TITULAR	BENIGNO	QUISPE MAMANI
C.E.I. 4	MAS-IPSP	SUPLENTE	TORIBIA	ALVARO MOYA

POTOSI

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	EDUARDO HUMBERTO	MALDONADO IPORRE
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	ANA	VILACAMA POZO
MAS-IPSP	2	TITULAR	CARMEN	GARCIA MAMANI
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	JULIO	VILLEGAS ROMERO
MAS-IPSP	3	TITULAR	EFRAIN	CONDORI LOPEZ
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	NORMA	CHOQUE CUSIPUMA
MAS-IPSP	4	TITULAR	CLEMENTINA	GARNICA CRUZ
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	LUIS	MARTINEZ CASTRO

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	BENITO	RAMOS CALIZAYA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	FRANCISCA	MAMANI CANAVIRI
MAS-IPSP	2	TITULAR	FLORA	LARGO PUMARI
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	HUGO	GARCIA MENDEZ
MAS-IPSP	3	TITULAR	ADOLFO	OCAMPO MELGAREJO
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	GLADYS	VARGAS ESCOBAR
MAS-IPSP	4	TITULAR	AGRIPINA	RAMIREZ NAVA
MAS-IPSP	4	SUPLENTE	JUSTINO	LEAÑO QUISPE
MSM/MAS-IPSP *	5	TITULAR	FELIPE	MOLLOJA BAEZ
MSM/MAS-IPSP	5	SUPLENTE	ALEJANDRA	CAZON ANGELO
MAS-IPSP	6	TITULAR	EMELIANA	AIZA PARADA
MAS-IPSP	6	SUPLENTE	SIN SUPLENTE	

* El Movimiento Sin Miedo (MSM) participó de las elecciones del 6 de diciembre en "Alianza para la refundación de Bolivia" con el MAS - IPSP.

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 37	AS	TITULAR	ANGEL DAVID	CORTES VILLEGAS
C. 37	AS	SUPLENTE	ELIZABETH	SOTO MAMANI
C. 38	MAS-IPSP	TITULAR	JUAN CARLOS	CEJAS UGARTE
C. 38	MAS-IPSP	SUPLENTE	VICTORIA	TOLA MENDOZA
C. 39	MAS-IPSP	TITULAR	LUIS	GALLEGO CONDORI
C. 39	MAS-IPSP	SUPLENTE	FILOMENA	MAMANI CRISPIN
C. 40	MAS-IPSP	TITULAR	RICHARD	CORDEL RAMIREZ
C. 40	MAS-IPSP	SUPLENTE	ZENOBIA	LEON ROJAS
C. 41	MAS-IPSP	TITULAR	SEVERO	AGUILAR GABRIEL
C. 41	MAS-IPSP	SUPLENTE	RITA	CALLAHUARA AMAJAYA
C. 42	MAS-IPSP	TITULAR	EUSEBIO	CRUZ GONZA
C. 42	MAS-IPSP	SUPLENTE	MAGDALENA	CONDORI VARGAS
C. 43	MAS-IPSP	TITULAR	ESTANIS	CONDORI CARDENAS
C. 43	MAS-IPSP	SUPLENTE	FELIPA	HUANCA MAMANI
C. 44	MAS-IPSP	TITULAR	PASCUAL	HUARACHI ROMERO
C. 44	MAS-IPSP	SUPLENTE	DELIA	ALEJO PORCO

TARIJA

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	RHINA	AGUIRRE AMEZAGA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	DARIO MARCELO	GARECA CARDOZO
MAS-IPSP	2	TITULAR	JUAN ENRIQUE	JURADO RUIZ
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	MARY EVA	VACAFLOL SORUCO
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	MARCELO EULOGIO	ANTEZANA RUIZ
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	DORA VIOLETA	BURGOS VIDES
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	MARIA ELENA	MENDEZ LEON
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	LUIS	PEDRAZA CERDA

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	LUIS BERTIN	ALFARO ARIAS
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	CAROLINA MERCEDES	CAZON CASTRILLO
MAS-IPSP	2	TITULAR	NINFA	HUARACHI CONDORI
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	CARLOS SANDRO	BORDA VALDEZ
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	ADRIAN ESTEBAN	OLIVA ALCAZAR
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	MIRTHA NATIVIDAD	ARCE CAMACHO

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 45	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	VICTOR HUGO	ZAMORA CASTEDO
C. 45	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	DIANA PATRICIA	PAPUTSAKIS BURGOS
C. 46	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	ROY MORONI	CORNEJO RAÑA
C. 46	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	SIN SUPLENTE	
C. 47	MAS-IPSP	TITULAR	JOSE ANTONIO	YUCRA PAREDES
C. 47	MAS-IPSP	SUPLENTE	TERESA DAINE	BLACUTT MENDOZA
C. 48	AS	TITULAR	WILMAN RAMON	CARDOZO SURRIABRE
C. 48	AS	SUPLENTE	GLADIS CLARA	MAMANI QUISPE
C. 49	MAS-IPSP	TITULAR	RAUL	ALTAMIRANO TRUJILLO
C. 49	MAS-IPSP	SUPLENTE	SENOBIA	GUTIERREZ AVENDAÑO

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 6	MAS-IPSP	TITULAR	FEDERICO	SALAZAR SANCHEZ
C.E.I. 6	MAS-IPSP	SUPLENTE	CRISTINA	VALEROSO CUELLAR

SANTA CRUZ

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	LILLY GABRIELA	MONTAÑO VIAÑA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	FELIX GUALBERTO	MARTINEZ SALDIAS
MAS-IPSP	2	TITULAR	ISAAC	AVALOS CUCHALLO
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	AMALIA	ANTONIO SARABIA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	GERMAN	ANTELO VACA
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	MARIA ELVA	PINCKERT
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	CENTA LOTHY	REK LOPEZ
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	VICTOR HUGO	MAYSER LIAÑO

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	BETTY ASUNTA	TEJADA SORUCO
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	MAURO	PEÑA SILES
MAS-IPSP	2	TITULAR	EDGAR LUIS	FERNANDEZ
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	GLADYS	AGUILAR RAMIREZ
MAS-IPSP	3	TITULAR	SEGUNDINA	FLORES SOLAMAYO
MAS-IPSP	3	SUPLENTE	HEINZ DARWIN	CHOQUERIVE SOSSA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	JORGE ANTONIO	FLORES REUS
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	MARIA	ODALIS REYES
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	ADRIANA	GIL MORENO
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	MOISES FANOR	SALCES LOZANO
PPB-CONVERGENCIA	3	TITULAR	RAFAEL DARIO	LOPEZ MERCADO
PPB-CONVERGENCIA	3	SUPLENTE	JESSICA ROSELIN	ECHEVERRIA BRAVO
PPB-CONVERGENCIA	4	TITULAR	ERICA ROXANA	CLAURE
PPB-CONVERGENCIA	4	SUPLENTE	JUAN CARLOS	BECERRA OROZA
PPB-CONVERGENCIA	5	TITULAR	JAVIER	LEIGUE HERRERA
PPB-CONVERGENCIA	5	SUPLENTE	VANESSA	MORENO OTERO
PPB-CONVERGENCIA	6	TITULAR	CARMEN ROSA	DURAN SOLIZ
PPB-CONVERGENCIA	6	SUPLENTE	FELIPE	GARCIA PEREZ
PPB-CONVERGENCIA	7	TITULAR	JAIME	ESTIVARIZ BUSTILLOS
PPB-CONVERGENCIA	7	SUPLENTE	SIN SUPLENTE	
UN-CP	1	TITULAR	OSCAR ANTONIO	FRANCO VACA
UN-CP	1	SUPLENTE	MARIA CRISTINA	VISCARRA GIL

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 50	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	CARLOS EDUARDO	SUBIRANA GIANELLA
C. 50	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	VERONICA	AGUILERA SALAZAR
C. 51	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	MAIDA	PAZ CALLAU
C. 51	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	RODOLFO	LANDIVAR ALBA
C. 52	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	RUBEN DARIO	ROJO PARADA
C. 52	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	MIRIAM	TERRAZAS
C. 53	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	TOMAS XAVIER	MONASTERIO ROMAY
C. 53	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	ANA MARIA	VACA SALVADOR
C. 54	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	ALCIDES ANDRES	GALLARDO IBARRA
C. 54	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	MARIA ANETTE	DAHER TOBIA
C. 55	MAS-IPSP	TITULAR	ADRIANA	ARIAS
C. 55	MAS-IPSP	SUPLENTE	AGUSTIN	RIVAS BRITO
C. 56	MAS-IPSP	TITULAR	EDWIN	TUPA TUPA
C. 56	MAS-IPSP	SUPLENTE	MARCELINA	RAMIREZ
C. 57	MAS-IPSP	TITULAR	GERMAN	ALAVI CANAVIRI
C. 57	MAS-IPSP	SUPLENTE	BASILIA	FLORES ARCE
C. 58	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	LUIS FELIPE	DORADO MIDDAGH
C. 58	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	MARIA DEL CARMEN	ESPAÑA
C. 59	MAS-IPSP	TITULAR	WILSON	CHANGARAY TABORGA
C. 59	MAS-IPSP	SUPLENTE	INES	MIRANDA KAMA
C. 60	MAS-IPSP	TITULAR	GONZALO	RODRIGUEZ CAMARA
C. 60	MAS-IPSP	SUPLENTE	CIRILA	CORO ELIAS
C. 69	MAS-IPSP	TITULAR	FRANKLIN	GARVIZU JANCO
C. 69	MAS-IPSP	SUPLENTE	DALCY	HERRERA MORALES
C. 70	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	YUSSER ROLANDO	VILLARROEL GARVISO
C. 70	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	ROSARIO	LEONOR TORRICO

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 7	MAS-IPSP	TITULAR	BIENVENIDO ZACU	MBOROBAINCHI
C.E.I. 7	MAS-IPSP	SUPLENTE	TERESA	NOMINE CHIQUENO

BENI

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	FREDDY	BERSATTI TUDELA
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	TANIA YNES	MELGAR HENRICH
MAS-IPSP	2	TITULAR	ZONIA	GUARDIA MELGAR
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	DEMETRIO	GARCIA CARTAGENA
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	CARLOS ALBERTO	SONNENSCHN ANTELO
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	MAGDA MARINA	ARZE MAYER
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	JEANINE	AÑEZ CHAVEZ
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	JORGE DONNY	CHAVEZ SUAREZ

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	INGRID LORETO	ZABALA ESCOBAR
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	JORGE	CALLAU ALLORTO
MAS-IPSP	2	TITULAR	MIGUEL ANGEL	RUIZ MORALES
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	KATYA	CHAVEZ DEBRIE
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	OSNEY	MARTINEZ DAGUER
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	YAQUELINE EMMA LAVIVE	YAÑEZ SIMON

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 61	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	MEZOTH JOSE	SHRIQUI RAPP
C. 61	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	BELIA ANTONIA	CAJIRI ROCA
C. 62	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	FARIDES	VACA SUAREZ
C. 62	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	CARMELO	EGUEZ RODRIGUEZ
C. 63	MAS-IPSP	TITULAR	ANTONIO	MOLINA SERRANO
C. 63	MAS-IPSP	SUPLENTE	MARIA GARDENIA	ARAUZ MENACHO
C. 64	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	EINAR	GOZALVES BEYUMA
C. 64	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	VICTORIA	LORAS FERREYRA
C. 65	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	JUAN CARLOS	OJOPI BARBA
C. 65	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	LENY	CALLE RIVERA

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 8	MAS-IPSP	TITULAR	PEDRO	NUNY CAITY
C.E.I. 8	MAS-IPSP	SUPLENTE	MARIA SONIA	JUSTINIANO CUJUY

PANDO

SENADORES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	MANUEL	LIMACHI QUISPE
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	NORAH	MONTERO
MAS-IPSP	2	TITULAR	MIRTHA	DA COSTA FERREIRA
MAS-IPSP	2	SUPLENTE	FELIX NATALIO	YAPU ENCINAS
PPB-CONVERGENCIA	1	TITULAR	ROGER	PINTO MOLINA
PPB-CONVERGENCIA	1	SUPLENTE	LINDA FLOR	BRASILDA VILLALOBOS
PPB-CONVERGENCIA	2	TITULAR	CARMEN EVA	GONZALES LAFUENTE
PPB-CONVERGENCIA	2	SUPLENTE	ORLANDO	RAMOS RAMIREZ

DIPUTADOS PLURINOMINALES

SIGLA	POS	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
MAS-IPSP	1	TITULAR	GALO	SILVESTRE BONIFAZ
MAS-IPSP	1	SUPLENTE	CARLIN	HAENSEL INUMA

DIPUTADOS UNINOMINALES

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C. 66	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	HERBERT	SALVATIERRA BECERRA
C. 66	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	MARILUZ	GONZALES RODRIGUEZ
C. 67	MAS-IPSP	TITULAR	JUAN	CHAMARO NAY
C. 67	MAS-IPSP	SUPLENTE	KATERINE	OLIVER ACHIPA
C. 68	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	JUAN	RODRIGUEZ LAZO
C. 68	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	SANDRA ALIXON	CLAURE ENDARA

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL ORIGINARIO CAMPESINA

CIRCUNSCRIPCION	SIGLA	TIT/SUP	NOMBRES	APELLIDOS
C.E.I. 8	PPB-CONVERGENCIA	TITULAR	JULIO	CORTEZ VIRA
C.E.I. 8	PPB-CONVERGENCIA	SUPLENTE	BERTHA	RAMALLO HURTADO

ANEXO 3

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS
DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE
ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
22	38	7	16	36	43	23	4	10

EN MATERIA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN PÚBLICA

				1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley.	1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley.	1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y la ley.		
	26. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al procedimiento establecido por Ley.			25. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público.	22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público.			
						23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios.		
					36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas.			
		6. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal.						

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
					34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros municipios.	17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas.		
					35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.			
12. Creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado.	28. Empresas públicas del nivel central del Estado.			29. Empresas públicas departamentales.	26. Empresas públicas municipales.			
					37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal.			
3. Sistema de pesas y medidas, así como la determinación de la hora oficial.								
	14. Otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen Actividades en más de un Departamento.			12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en el departamento.				
	15. Otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento.			13. Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento.			4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural.	
					33. Publicidad y propaganda urbana.			

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA								
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal ..., comercial ...								
	18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico o municipal.							
	24. Administración de Justicia.					8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley.		
EN MATERIA ELECTORAL								
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia ... electoral.	1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales.	1. Régimen electoral departamental y municipal.						
15. Registro Civil.								
				3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia.	3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia.			
						21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.		

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES								
8. Política exterior.		5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado.					1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado.	
5. Comercio Exterior.								
9. Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio.								
11. Regulación y políticas migratorias.								
EN MATERIA DE SEGURIDAD, FF.AA. Y POLICÍA BOLIVIANA								
6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana.			13. Seguridad ciudadana.					
10. Control de fronteras en relación a la seguridad del Estado.								
7. Armas de fuego y explosivos.								
EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO								
				26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.	23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus Programas de operaciones y su presupuesto.	14. Elaborar, aprobar y ejecutar sus Programas de operaciones y su presupuesto.		
22. Política económica y planificación nacional.				35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional.	42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional.			
				32. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.				
	33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial.			5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena originario campesinos.	6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas.	4. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales y municipales.		

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
						15. Planificación y gestión de la ocupación territorial.		
	12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia.							
16. Censos oficiales.	13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.			11. Estadísticas departamentales.	9. Estadísticas municipales.			
						2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo.		
			3. Ciencia, tecnología e investigación.					2. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado.
EN MATERIA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN PRIVADA								
	35. Políticas generales de desarrollo productivo.					19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva.		
				24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental.				
				34. Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco de las políticas económicas nacionales.				
EN MATERIA DE TURISMO								
	37. Políticas generales de turismo.			20. Políticas de turismo departamental.	17. Políticas de turismo local.	11. Políticas de Turismo.		

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO								
	22. Control de la administración agraria y catastro rural.							
	21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.			14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.	13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal.			
			16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.	31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.				8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería.
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								
14. Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.			5. Servicio meteorológico.	10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales.	8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.			
	11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.			21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.	21. Proyectos de infraestructura productiva.			7. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas.
					28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.	20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su jurisdicción.		
	8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado.	3. Electrificación urbana.		15. Proyectos de electrificación rural.	30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.			
				6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados.		5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción.		

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
	9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental.			7. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.	7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígenas originario campesinos cuando corresponda.	6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.		6. Construcción de caminos vecinales y comunales.
	10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y ferrocarriles de la Red Fundamental.			8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las políticas estatales, interviniendo en los de la Red Fundamental en coordinación con el nivel central del Estado.				
	32. Transporte terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento.		12. Administración de puertos fluviales.	9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento.	18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano.			
	2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones.	2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.	6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.					
	30. Políticas de servicios básicos.				40. Servicios básicos, así como aprobación las tasas que correspondan en su jurisdicción.			
			8. Residuos industriales y tóxicos.		27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado.			
	3. Servicio postal.							

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMESINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMESINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMESINAS
EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL								
20. Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente.	6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.			16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad alimentaria.	12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal.			3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente.
			1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.		5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.	22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas.		
							3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley.	
	19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.				11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.	7. Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política del Estado.		
	4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.							
	20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales.			18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.	15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.	3. Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la Constitución.		

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE AGUA POTABLE, RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO								
	5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.		7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.					4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política del Estado, al interior de su jurisdicción.
			10. Proyectos de riego.		38. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígenas originario campesinos.	18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego.		5. Construcción de sistemas de microriego.
			9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.					
			11. Protección de cuencas.					
EN MATERIA DE HIDROCARBUROS								
18. Hidrocarburos.				33. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector.	43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector.			9. Control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarbúferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción.
EN MATERIA DE MINERÍA								
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia ... minería ...					41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígenas originario campesinos, cuando corresponda.		2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos.	
EN MATERIA DE RECURSOS FORESTALES								
	7. Política forestal y régimen general de suelos y recursos forestales y bosques.		4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.					

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA FISCAL, FINANCIERA, HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO DEL ESTADO Y RÉGIMEN ADUANERO								
1. Sistema financiero.	23. Política fiscal.		14. Sistema de control gubernamental.					10. Sistemas de control fiscal y administración de bienes y servicios.
2. Política monetaria, Banco Central, sistema monetario y la política cambiaria.	34. Deuda pública interna y externa.			27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.	24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.			
4. Régimen aduanero.								
13. Administración del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas del nivel central del Estado.								
EN MATERIA TRIBUTARIA								
19. Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado.		7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.		22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imposables no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales.	19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imposables no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.	13. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción.		
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia ... tributaria ...				23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental.	20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal.	12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley.		
				36. Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental.				

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO								
				2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.	2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.			
				30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.	39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.			
EN MATERIA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS								
	36. Políticas generales de vivienda.		15. Vivienda y vivienda social.		29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.	16. Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de su jurisdicción.		
	29. Asentamientos humanos rurales.				10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.			
EN MATERIA DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES								
21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia ... laboral ...	31. Políticas y régimen laborales.			4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales.	4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales.			
EN MATERIA DE SALUD Y EDUCACIÓN								
	17. Políticas del sistema de educación y salud.		2. Gestión del sistema de salud y educación.					1. Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción.
	16. Régimen de Seguridad Social.							

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS POR MATERIA DE ACUERDO A LA CPE

PRIVATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	COMPARTIDAS	CONCURRENTES	EXCLUSIVAS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AUTONOMOS	EXCLUSIVAS GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS	EXCLUSIVAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	COMPARTIDAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS	CONCURRENTES AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPELINAS
EN MATERIA DE TIERRAS Y TERRITORIO								
17. Política General sobre tierras y territorio, y su titulación.	38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.							
EN MATERIA CULTURAL Y PATRIMONIAL								
	25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural: histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.			19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural: histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.	16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural: histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.	10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos.		
					31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.			
	27. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros de interés del nivel central del Estado.			28. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros departamentales.	25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros municipales.			
EN MATERIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN								
		4. Juegos de lotería y de azar.			32. Espectáculos públicos y juegos recreativos.	9. Deporte, esparcimiento y recreación.		
				17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.	14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.			